

El fujimorismo

ascenso y caída de un régimen autoritario

Julio Cotler

Romeo Grompone

IEP Instituto de Estudios Peruanos



Serie: **IDEOLOGÍA Y POLÍTICA**

09. Martín Tanaka

*Los espejismos de la democracia.
El colapso de un sistema de
partidos en el Perú.*
1998, 279 pp.

10. Bruno Revesz (ed.)

*Descentralización y
gobernabilidad en tiempos
de globalización.*
1998, 254 pp.

11. Steven Stern (ed.)

*Los senderos insólitos del
Perú. Guerra y sociedad.
1980-1995.*
1999, 490 pp.

12. Yusuke Murakami

*El espejo del otro. El Japón
ante la crisis de los rehenes
en el Perú.*
1999, 178 pp.

13. Carlos Iván Degregori

*La década de la antipolítica.
Auge y huida de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos.*
2000, 393 pp.

14. Fernando Rospigliosi

*Montesinos y las fuerzas armadas.
Cómo controló durante una
década las instituciones militares.*
2000, 307 pp.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

John SHEAHAN

La economía peruana.

Guillermo ROCHABRÚN (ed.)

*La Mesa Redonda sobre
Todas las Sangres.*

El fujimorismo:

ascenso y caída de un régimen autoritario

El fujimorismo

ascenso y caída de un régimen autoritario

Julio Cotler

Romeo Grompone

IEP Instituto de Estudios Peruanos

Este proyecto forma parte del "Programa Institucional de Sociología y Política 1998-1999", auspiciado por la Fundación Ford. Donación 980-0347

© IEP Ediciones / Julio COTLER - Romeo GROMPONE

Horacio Urteaga 694, Lima 11

Telf.332-6194

Fax (5114) 332-6173

E-mail: iepedit@iep.org.pe

ISBN: 9972-51-050-6

ISSN: 1019-455X

Impreso en el Perú

Primera edición, diciembre del 2000

1,000 ejemplares

Hecho el depósito legal: 1501052000-4773

Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro por cualquier medio sin permiso del Instituto de Estudios Peruanos.

COTLER, Julio / GROMPONE, Romeo

El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario / Julio Cotler y

Romeo Grompone— Lima: IEP, 2000.— (Ideología y Política, 15)

FUJIMORI, ALBERTO / MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO / AUTORITARISMO / CORRUPCIÓN / PERÚ

W/04.04.02/I/15

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 9

LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ:
ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA DEMOCRACIA

JULIO COTLER 13

1. La crisis de gobernabilidad durante los años ochenta. 17
 2. La gobernabilidad contra la democracia. 22
 3. Las bases institucionales y sociales del régimen autoritario. 35
 4. El nuevo ciclo de participación pública. 40
 5. Entre el autoritarismo y la democracia. 53
 6. Algunas observaciones finales. 67
- Post-Scriptum. 68

AL DÍA SIGUIENTE: EL FUJIMORISMO COMO PROYECTO INCONCLUSO
DE TRANSFORMACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

ROMEO GROMPONE 77

1. Las condiciones favorables para la afirmación del régimen. 83
2. La debilidad del Estado. 88
3. La construcción del autoritarismo. 93
4. El control de las Fuerzas Armadas. 96
5. Las posiciones divididas de los empresarios. 102
6. Un gobierno de camarilla. 107

7. Políticas económicas, reformas institucionales y autoritarismo.	114
8. Las idealizadas y distantes reformas de segunda generación.	119
9. Maquinarias políticas y sectores populares.	124
10. Los operadores políticos.	137
11. Movimientos de independientes y lealtades políticas.	141
12. El autoritarismo acosado.	152
13. La recuperación de la sociedad civil.	158
14. La expectativa de nuevos partidos.	164
15. Perspectivas de una salida ordenada.	169
16. Democracia: el breve espacio en que no estás.	172
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	175

PRESENTACIÓN

DESPUÉS DE UNA LARGA DÉCADA de autoritarismo, el país cuenta ahora con un gobierno democrático de transición con la presidencia de Valentín Paniagua. Los acontecimientos se precipitaron con tal velocidad en el último año, que es difícil comprender en su totalidad lo ocurrido.

Esta tarea es indispensable no sólo para dar cuenta de un período crucial en nuestra historia política, sino también para abordar con la mayor lucidez posible la responsabilidad de la recuperación de las instituciones democráticas que, en verdad, nunca consiguieron afianzarse en nuestro país. Desde esta perspectiva se emprende el análisis de los dos artículos de este libro.

Julio Cotler analiza los problemas irresueltos de gobernabilidad que enfrentaron en las dos últimas décadas tanto los gobiernos democráticos como los autoritarios en el campo de la política económica, la subversión, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad jurídica y política. En el proceso se armaron y desarmaron coaliciones de apoyo al gobierno por parte de

los principales actores estratégicos del país. El peso decisivo, sin embargo, recayó en la comunidad internacional, cuyas preocupaciones para garantizar un escenario controlable la llevó a tomar en distintas etapas, y en especial durante el gobierno de Alberto Fujimori, discursos contradictorios sólo en apariencia. Aquellos transitaron en el primer período por un apoyo condicionado, sustentado especialmente en los lineamientos seguidos por el gobierno en política económica y lucha contra el narcotráfico, considerando además la situación excepcional del país que intentaba salir de las secuelas de la guerra interna y la hiperinflación. Por argumentos también vinculados a la gobernabilidad, años después, en un contexto diferente, el régimen se expuso al aislamiento y la condena por dismantelar las instituciones del Estado de Derecho, controlar medios de comunicación, promover la reelección ilegal de Fujimori e intentar desempeñar un protagonismo en el escenario internacional que se enfrentaba a los intereses y prioridades de los actores externos más influyentes. Esta situación explica, entre otras razones, la descomposición de un régimen político que había tomado, sobre todo en el último período, rasgos mafiosos. Para entender este proceso se realiza el estudio en términos de una secuencia razonada, de las iniciativas del gobierno de Fujimori y las cambiantes respuestas de los grupos más influyentes del país y sobre todo del gobierno de Estados Unidos a través de sus diversas agencias, de la OEA y de los organismos internacionales de crédito. Un país de relativa importancia internacional como el Perú toma un inusitado protagonismo, en parte por los excesos y errores de cálculo en los que incurrió el gobierno de Fujimori en una convulsionada región andina.

Romeo Grompone, por su parte, considera las características principales del régimen autoritario en un contexto de debilidad del Estado, así como las relaciones y alianzas con las Fuerzas

Armadas y parte del empresariado. Examina los rasgos principales de un gobierno de camarilla y la maquinaria política para conquistar las voluntades de los sectores populares. Intenta estudiar las razones por las que el neoliberalismo sirvió en el caso especial del Perú para construir una autocracia y los límites que no se podían transgredir en el proceso de reformas, si no se quería violentar el orden que se quería imponer. Considera que el sistema se basaba en lealtades frágiles, incluso entre los propios movimientos de independientes opositores, lo que convenía al gobierno. Busca entender las razones por las que Fujimori y Montesinos desbordaron límites y reglas impuestas por la comunidad internacional, en especial las de los organismos de inteligencia. Y, finalmente, analiza las perspectivas de recuperación de la sociedad civil y de los partidos políticos, y las peculiaridades de una transición en la que a diferencia de otros países de América Latina —por la propia descomposición del régimen político, sobre todo de las Fuerzas Armadas— resulta extremadamente complejo y hasta inviable establecer pactos y concesiones con los representantes del régimen saliente.

Los dos artículos coinciden en evitar un optimismo fácil por el advenimiento de un gobierno democrático de transición, al mismo tiempo que procuran persuadir, por la consideración desapasionada de los hechos, que sólo una democracia consolidada asegura al mismo tiempo gobernabilidad y cambios, temas para lo que se requiere voluntad y lucidez en los gobernantes y ciudadanos.

LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ: ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA DEMOCRACIA

JULIO COTLER

DURANTE LA PRESENTE DÉCADA el Perú ha sido un caso singular de la participación de diferentes actores internacionales en la escena nacional. Esta se presenta en países cuyas autoridades se demuestran impotentes para enfrentar las amenazas que penden sobre la seguridad nacional y la estabilidad regional. Para tal efecto, gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales de distinto signo, sectores empresariales, instituciones militares y medios de comunicación pertenecientes a los principales países del mundo colaboran, al tiempo que ejercen presión sobre las débiles autoridades nacionales y las desprestigiadas organizaciones políticas, para implantar la economía de mercado y defender los derechos humanos y el régimen democrático, a los que consideran objetivos complementarios para (re)establecer el orden institucional.

El sorprendente grado de participación y la significativa influencia que ejercen esos actores en la dinámica política del Perú, dan cuenta de las preocupaciones y las tendencias que se

derivan de la globalización, así como de las restricciones que ésta representa para la frágil soberanía estatal. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, las coaliciones nacionales-internacionales que se han formado alrededor de dichos propósitos, entran en contradicción en función de sus propios intereses y perspectivas, abriendo paso a desenlaces inesperados.

El Perú enfrentó en los años ochenta una crisis que amenazó disolver los lazos de su fragmentada sociedad y destruir su precaria organización estatal; en tales circunstancias, el gobierno elegido en 1990 se vio precisado a demandar el concurso de actores externos para equilibrar la economía, debelar la subversión, perseguir el narcotráfico y reducir la producción de estupefacientes. El relativo éxito alcanzado en esos cometidos determinó una cierta recuperación de la autoridad estatal, del equilibrio social y de la credibilidad externa del país; en suma, dicha colaboración propició el restablecimiento de la gobernabilidad que, de acuerdo a la clásica definición de Huntington, consiste en la capacidad de la autoridad política para organizar y dirigir efectivamente, sino legítimamente, los asuntos públicos.

Pero para lograr tal propósito, el Ejecutivo y los militares destruyeron el desacreditado orden constitucional y fundaron un régimen autoritario, aduciendo que esas decisiones respondían a la necesidad perentoria de reducir, o hasta eliminar, las presiones sociales, de un lado, y de promover la estabilidad política y económica, del otro, tal como lo han venido pregonando especialistas, organizaciones económicas y aparatos castrenses.

Ante la manifiesta ineficacia del precario régimen democrático para encarar la hiperinflación, la subversión y la violación de los derechos humanos, los resultados relativamente positivos de las acciones gubernamentales propiciaron que el empresariado y los tecnócratas se aliaran con el gobierno y que la mayoría de

la población diera pasivamente su respaldo a esa resolución. De otro lado, este generalizado apoyo a la decisión gubernamental contribuyó a que diversos actores externos convalidaran tal determinación, asumiendo que el régimen autoritario daría paso al restablecimiento de eficaces mecanismos democráticos en un futuro indeterminado. De tal modo, el régimen logró armar un amplio y diferenciado sustento fundado en una red de alianzas internas y externas, al igual que en la inercia de las desarticuladas masas populares.

Sin embargo, la resistencia política externa a esas medidas determinó que el autoritarismo pretendiera adoptar una fachada legal; y el gobierno, en su afán de asegurar los fundamentos y la duración indefinida del régimen autoritario, formalizó la captura de los aparatos estatales y propició la transformación del régimen en una autocracia regida por una mafia de militares y civiles. Como era previsible, la restricción de las libertades civiles y políticas, al igual que el control y la represión de los opositores al gobierno, se produjeron a la par que se extendía la corrupción y se recurría continuamente a la difamación, la extorsión, la mentira y el cinismo, afectando seriamente la moral política.

A pesar de las crecientes críticas que formulaban diversos sectores de la sociedad, así como gobiernos extranjeros y organismos internacionales, los aliados del fujimorismo aceptaron abiertamente, o pretendieron no percibir, esos procedimientos arbitrarios, siempre que las autoridades cumplieran eficazmente sus requerimientos militares y económicos en nombre de la gobernabilidad. Pero una vez que el régimen asumió características mafiosas, las acciones de los gobernantes re vertieron en contra de los intereses de sus aliados estratégicos, determinando su distanciamiento y el fortalecimiento de quienes defendían los derechos humanos y la democracia, al tiempo que crecía una cada vez mayor protesta social.

En resumen, en tanto se formaba una constelación de poderes internos y externos para sustentar el autoritarismo, la ruptura de dicha coalición ocasionó la descomposición del régimen y la apertura de un largo proceso de transición con la manifiesta intervención externa, así como el desarrollo de una nueva crisis de gobernabilidad que pone al descubierto la precariedad estatal.

A pesar de la modesta importancia económica y política del Perú en el escenario mundial, el insólito rechazo internacional a sus autoridades gubernamentales constituye una evidencia del valor que se concede a la vigencia de los principios y las prácticas democráticas en la constitución del orden político y la economía de mercado. Del mismo modo, el apoyo que obtiene el régimen autoritario constituye también una manifestación del interés que se deposita en la permanencia de dicho sistema para preservar la gobernabilidad política y económica, acorde con los intereses dominantes. En consecuencia, el restablecimiento de normas y prácticas democráticas o, en su defecto, la continuidad de mecanismos autoritarios será resultado de las tensiones y las transacciones que se desarrollen entre actores y coaliciones internas y externas (inter-mestic).

En este sentido, el presente documento se propone analizar *grosso modo*: (i.) las circunstancias que propiciaron en el Perú la formación y los cambios de la participación política de diferentes tipos de actores y coaliciones internas y externas durante la última década del siglo, al igual que (ii) las consecuencias que ha producido tal situación en varios planos del escenario nacional y los desenlaces que se vislumbran.

Por último, (iii) esperamos que este análisis sobre el desarrollo y tratamiento de los problemas relativos a la gobernabilidad, en las nuevas condiciones internacionales, contribuya a señalar algunos problemas y posibilidades de la transición y con-

solidación democrática en el Perú y, tal vez, en aquellos países de la región andina que atraviesan por situaciones similares a las del nuestro.

1. La crisis de gobernabilidad durante los años ochenta.

Después de doce años de régimen militar (1968-1980) la elección de un gobierno constitucional en 1980 culminó la accidentada transición a la democracia iniciada tres años antes, mientras en otros países latinoamericanos se desarrollaban procesos semejantes. Sin embargo, las elevadas expectativas puestas por las movilizadas masas populares en el nuevo régimen se vieron frustradas por la confluencia de factores internos y externos.

Además de los difíciles problemas legados por el gobierno militar, las acciones subversivas surgidas a partir de 1980, la crisis internacional de la deuda externa desencadenada en 1982 y los efectos de la corriente marina del Niño, aparecida en 1983, determinaron que el gobierno presidido por Fernando Belaunde (1980-1985) enfrentara una crisis particularmente severa en el marco de la "década perdida" de América Latina. A estas dificultades se agregaron los históricos enfrentamientos entre los partidos políticos y los contrastados sectores de la sociedad, así como la clásica debilidad del Estado para formular, organizar y ejecutar decisiones coherentes. De ahí que este primer gobierno democrático acabara envuelto en una ola de contradicciones que agudizaron los problemas acumulados desde la década de los años setenta, al punto que originaron dudas sobre las posibilidades futuras del país.

Esa situación propició que las propuestas "nacionales, populares y democráticas", presentadas en 1985 por el candidato

presidencial del Partido Aprista, y los pretendientes de las listas apristas al Parlamento Nacional, concitaran el apoyo mayoritario del electorado, porque prometían hacerse cargo de las contrapuestas demandas colectivas y avanzar en la integración nacional. El resonante éxito electoral de Alan García (1985-1990) y los amplios poderes que le concedió el Congreso acentuaron el carácter presidencialista del régimen, lo cual llevó al flamante Presidente a adoptar comportamientos caudillistas y voluntaristas que se tradujeron en decisiones de tipo nacionalista y estatista. Dentro de la nueva coyuntura internacional, este estilo de gobierno condujo a niveles insospechados la crisis que el país arrastraba desde mediados de los años setenta, y a una nueva situación de ingobernabilidad.

En efecto, el presidente García no sólo impugnó las condiciones del pago de la deuda externa y rechazó dictar las políticas de ajuste y de estabilización económica que exigían los organismos multilaterales para brindarle su concurso, sino que además atacó al gobierno norteamericano por sus pretensiones hegemónicas. Estos hechos determinaron entonces el aislamiento del Perú de los círculos financieros internacionales, en circunstancias que, después de un breve interludio, la política "heterodoxa" de García agudizaba la inflación y los problemas fiscales. Por último, su intento de estatizar el sistema financiero para resolver los problemas existentes agravaron los enfrentamientos políticos y sociales.

De otro lado, el uso patrimonial de los recursos del Estado y las prácticas clientelistas a que recurrían el presidente García y el Apra, incrementaron el desorden económico e intensificaron la corrupción generada por dicho comportamiento, al tiempo que la política de "tierra arrasada" adoptada por las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión, granjeó al gobierno la hostilidad de vastos sectores ciudadanos.

Como resultado de ello, el Perú se vio afectado por una grave hiperinflación, calificada como la segunda más larga de la historia mundial, y los ingresos fiscales cayeron a tal punto que el precario aparato estatal dejó de funcionar por completo. La bancarrota del aparato productivo generó la eclosión del sector informal y dio lugar a que amplios sectores sociales desconocieran y desacataran las normas oficiales y convencionales. Por otra parte, al sumarse el crecimiento combinado de la subversión y el tráfico ilícito de drogas con la indiscriminada represión militar, se generó un clima de desorden, de temor e incertidumbre generales. De ahí que la dramática situación que afectaba al país fuera calificada indistintamente de "libanización", en referencia a la guerra civil en el Líbano, o de "anomia".

A pesar de estas circunstancias, los divididos actores políticos y sociales legales persistieron (¿racionalmente?) en sus enfrentamientos sin reparar en los riesgos que corrían, al tiempo que anulaban los esfuerzos destinados al logro de acuerdos para encarar conjuntamente los diversos aspectos de la crisis nacional. Mientras las organizaciones izquierdistas, para alcanzar sus objetivos y lograr salidas revolucionarias, procuraban la radicalización política y estimulaban el enfrentamiento cotidiano de las masas populares con los organismos gubernamentales y las fuerzas de seguridad, empresarios y militares, por su lado, proponían rescatar la autoridad estatal y poner en marcha la represión, como condiciones indispensables para establecer el orden público y el progreso social.

Para tal propósito, además de exigir la eliminación de la subversión sin concesión alguna, estos últimos plantearon en el "Plan Verde" anular las organizaciones políticas y sociales porque exacerbaban las demandas sociales "populistas" erosionantes del Estado, haciéndose así eco de la ideología de las dictaduras militares del cono sur. En tal contexto, las Fuerzas Armadas retomaron

los conceptos sobre seguridad nacional, adquirieron una desmedida independencia de los debilitados poderes públicos, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y se apresta, ron a intervenir en la conducción política del país.

En tanto, las cancillerías y los estados mayores castrenses de los países vecinos y de los Estados Unidos de Norteamérica no ocultaban su preocupación por la situación peruana y, ante la manifiesta impotencia de sus autoridades para impedir la inminente bancarrota estatal y la propagación de sus consecuencias en la región, se prepararon para intervenir en la política del país.

La conjugación de estos graves problemas propició transformaciones políticas e ideológicas que fueron restándole legitimidad al gobierno: la frustración que ocasionaba en la mayoría de la población la conducta de las representaciones sociales y políticas, incapaces de encarar y resolver los dramáticos problemas del país, determinó el descrédito de las organizaciones que conectaban a la sociedad con el Estado, y desprestigió el frágil régimen democrático. Así, paralelamente al resquebrajamiento de los lazos institucionales de articulación social y política, el Estado se desvanecía para todos los efectos prácticos.

Simultáneamente, las formulaciones mesiánicas y las acciones terroristas de los movimientos subversivos, los planteamientos sobre la "utopía andina" y el "desborde popular", se conjugaron para desacreditar al Estado "criollo", pero sin proponer plataformas políticas realistas; en tanto que la crítica de Hernando de Soto al "mercantilismo" sentaba las bases de un movimiento liberal liderado por empresarios, profesionales e intelectuales entre los que destacaba la presencia de Mario Vargas Llosa. El renombre internacional de esas figuras, la enérgica crítica al régimen social, así como el carácter de sus propuestas, acorde con los nuevos intereses hegemónicos, merecieron el

apoyo de diferentes sectores sociales y de influyentes círculos internacionales.

Los mencionados autores achacaron la responsabilidad de los males del país a los partidos políticos, por haber propiciado la colonización del Estado mediante prácticas "mercantilistas", que privilegiaban a determinados empresarios y trabajadores, a costa del libre desenvolvimiento de la sociedad. Pero Hernando de Soto se distanció de las críticas liberales de filiación oligárquica al estigmatizar el mercantilismo por las restricciones que éste imponía a los esfuerzos empresariales de los "informales", impidiendo de esta manera la incorporación de las capas populares en el sistema capitalista.

De ahí que, al desvirtuar las naturales bondades de los agentes y de las reglas del mercado, el ejercicio mercantilista de los políticos propiciara el estancamiento económico del país y la falta de integración social, contribuyendo así a la mayor fragilidad de las instituciones democráticas y de la conciencia ciudadana.

En medio de la crisis nacional y la quiebra de los clásicos paradigmas, este diagnóstico contribuyó con eficacia a redefinir la problemática nacional y las soluciones para resolverla, por lo que concitó el apoyo de diferentes sectores sociales. En efecto, dado que las prácticas mercantilistas que procesaban los partidos políticos y el Estado constituían la raíz del problema histórico del país, aquéllas debían ser erradicadas y reemplazadas por la liberalización de los mercados y la reducción de las funciones estatales, permitiendo la reinserción del país en las corrientes hegemónicas y el florecimiento de las energías populares dispuestas a impulsar el desarrollo capitalista y la democracia.

A pesar de que la crítica hecha al mercantilismo involucraba el comportamiento tradicional de los empresarios, éstos no dudaron en apoyar resueltamente las tesis propuestas por los

líderes del movimiento liberal para enfrentar la crisis económica y procesar la modernización del país. Así también los militares se sumaron a la prédica liberal después de constatar el fracaso del modelo nacionalista que habían apoyado durante el gobierno castrense.

Pero en contra de los postulados de Hernando de Soto y de Vargas Llosa, sectores empresariales y militares inscribieron el liberalismo económico en el marco de los criterios realistas de "la razón de Estado", aduciendo que la recuperación de la autoidad estatal y del orden institucional, logrados por la dictadura chilena, era requisito indispensable para promover la economía de mercado. De tal modo, militares y empresarios adoptaron una estrategia autoritaria para encarrilar por la senda de la economía de mercado a esta sociedad que había perdido el rumbo.

En suma, la desarticulación social, el descrédito de las instituciones y la cuasi bancarrota estatal propiciaron el desgaste de los movimientos y las ideologías nacionalistas, simultáneamente con el nacimiento de contrastadas corrientes de opinión que promovían tanto la liberalización económica y política cuanto el autoritarismo político, como medio para estabilizar el orden social y desarrollar el aparato productivo; en resumen, la democracia y el autoritarismo se constituyeron en opciones antagónicas para alcanzar la gobernabilidad del país.

2. La gobernabilidad contra la democracia.

Durante los años ochenta, el panorama extremadamente conflictivo y el desprestigio de los partidos determinaron que el Perú mostrara el índice más alto de volatilidad electoral de América Latina y que, al final de la década, la mayoría ciudadana se inclinara en favor de candidatos "independientes"; de ahí que

Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori concentraron la atención pública en los comicios presidenciales de 1990.

El rechazo que en las capas medias y populares generaban el entorno y los postulados liberales de Vargas Llosa, en contraposición al apoyo que brindaron a los independientes y a las propuestas heterodoxas que planteaba Fujimori, determinaron que, inesperadamente, éste resultara preferido por el voto ciudadano en la segunda vuelta electoral.

Tal desenlace fue recibido con airado repudio por los empresarios y por la cúpula militar que habían puesto sus esperanzas en Vargas Llosa: en atención al origen social de Fujimori, a su apelación a los sectores informales y a la defensa que hacía de las medidas heterodoxas, así como por su carácter de *outsider* de los círculos políticos y económicos dominantes, empresarios, militares y profesionales creyeron que el flamante Presidente era ajeno a los sentimientos y preocupaciones nacionales y que, por tanto, no representaba los intereses hegemónicos ni contaba con la experiencia ni el respaldo necesarios para enfrentar los difíciles problemas del país.

Fujimori, sin embargo, despejó tales aprensiones y logró revertir esa visión al asociarse con personajes claves que le permitieron forjar una exitosa política de alianzas con poderes fácticos nacionales e internacionales que contribuyó a estabilizar la economía y el orden social, al igual que a conquistar el apoyo pasivo de las masas populares; en una palabra, mediante dicha asociación el Presidente creó una amplia base de consenso que permitió establecer las condiciones de gobernabilidad del Perú.

En primer lugar, mediante la participación de Vladimiro Montesinos, designado asesor presidencial en cuestiones de seguridad, Fujimori estableció una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, al tiempo que se hacía cargo del proyecto político de aquéllas, por lo que su jefatura cesó de criticar a

Fujimori en razón de sus orígenes asiáticos; además, por los contactos que el mencionado asesor mantenía con agencias de inteligencia norteamericanas, el gobierno peruano y sus comandos militares lograron vincularse entre sí y obtener el respaldo de sus equivalentes en los Estados Unidos.

La identificación de Fujimori con los intereses y los proyectos militares se concretó en la reorganización de los aparatos castrenses y en la revisión de los planes de lucha contra la subversión. Esta revisión motivó que los aparatos y las actividades de "inteligencia" asumieran un papel destacado, reclamado por la asesoría norteamericana durante los años ochenta, contribuyendo al incremento de la importancia central de Montesinos en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. Además, Fujimori se hizo eco de los intereses militares al poner en marcha una sistemática campaña que responsabilizaba a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a las instituciones estatales por el caos del país, crítica que extendió a la democracia representativa. Esta consigna le granjeó al Presidente un halo de renovación que auguraba la modificación de los obsoletos organismos y prácticas gubernamentales, así como la de las relaciones de la sociedad con el Estado, lo cual incrementó las simpatías con que contaba entre las desorientadas y fatigadas masas populares.

En segundo lugar, gracias a la intervención de Hernando de Soto, el presidente Fujimori logró el respaldo de los organismos multilaterales y del sistema financiero nacional e internacional. A pesar del declarado rechazo al programa liberal postulado por Vargas Llosa, el Presidente se vio precisado a acatar las condiciones de las instituciones financieras internacionales a fin de obtener los indispensables recursos económicos y el apoyo político necesario para sacar el país del hoyo.

En efecto, en el marco de la aplicación de la política de ajuste y estabilización, las contribuciones del "Grupo de Apoyo"

liderado por Estados Unidos y Japón, al igual que las de los organismos multilaterales, facilitaron el equilibrio de las variables macro-económicas y la reducción sistemática de la inflación en el curso de los dos primeros años de gobierno. Así también, la apertura de la economía, la flexibilización de las relaciones laborales, el inicio de la privatización de las empresas públicas, el rescate del sistema financiero y la negociación del pago de la abultada deuda externa, promovieron la confianza empresarial en Fujimori y favorecieron el repunte de las inversiones y del crecimiento económico, después de quince años de crisis económica intermitente. Estas reformas se vieron también acompañadas por el fortalecimiento del aparato estatal y, en consecuencia, por la mejora de sus capacidades para organizar y dirigir los asuntos públicos, y de controlar y penetrar la sociedad y el territorio.

La adopción de tales medidas y los resultados que de ellas se derivaron llevaron a los gobiernos de los principales países, los sectores financieros y los organismos multilaterales, así como a los medios de comunicación internacionales, a alabar incesantemente la firme decisión de Fujimori y a presentarlo como modelo a los países "emergentes", a la vez que las mismas circunstancias lograron que el Presidente obtuviera también el respaldo de empresarios, intelectuales y congresistas liberales. Finalmente, el Opus Dei aportó igualmente su apoyo al gobierno, concretamente al presidente Fujimori. Es así como, a pesar de que pretendía proyectar una imagen de independencia ante los poderes fácticos para confirmar su aserto relativo a que "no se casaba con nadie" y que sólo respondía a "intereses nacionales", el Presidente no pudo ocultar las alianzas celebradas y el sustento que dichos poderes le otorgaban.

Sin embargo, la relación del Ejecutivo con militares, empresarios y tecnócratas se vio plagada de tensiones, pero sin que éstas llegaran a comprometer los fundamentos de la relación

establecida. En efecto, las intermitentes fricciones entre el Ejecutivo y los militares respondían a los intereses contrapuestos de las jefaturas de las diferentes armas entre sí, y con el Presidente, respecto al papel político que debían cumplir sus respectivas instituciones en la conducción del Estado. Igualmente eran fruto de las diferencias que se presentaban entre los comandos peruanos y los norteamericanos acerca de la estrategia y la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas; así como de los desacuerdos entre las planas mayores castrenses por la creciente participación de Montesinos en la organización y despliegue de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas tensiones se fueron eliminando en razón de la creciente importancia que el Presidente concedió al "asesor", permitiéndole a éste y sus allegados adquirir un papel decisivo en la dirección de las Fuerzas Armadas y, a partir de esa instancia, en la de los poderes estatales.

De otro lado, los conflictos entre el Ejecutivo, los tecnócratas y los empresarios fueron el resultado de la resistencia del Presidente a ejecutar determinadas reformas, por los efectos políticos que ellas podían acarrear en los sectores medios y populares, circunstancia que muchas veces llevó a esos mismos tecnócratas y empresarios a dudar de la vocación liberal del presidente Fujimori. A ello se agregaban las quejas de los empresarios contra la indiscriminada apertura comercial y la elevada carga impositiva; así como contra la dificultad que se les oponía para acceder a las altas esferas del gobierno, a diferencia de las facilidades que para lo mismo se brindaba a los privilegiados inversionistas extranjeros; y finalmente contra el trato despectivo de "mercantilistas" que les infligían los tecnócratas y el Ejecutivo; razones todas estas que fueron motivo de la permanente tirantez existente entre ellos.

Sin embargo, tal como los empresarios repetían sin descanso, ellos apoyaban la implantación de la economía libre de mercado

aunque disintían de algunas medidas concretas que para tal efecto el gobierno adoptaba inconsultamente. No podía ser de otro modo, porque la aplicación total de las recomendaciones del "consenso de Washington" amenazaba la existencia de amplios sectores empresariales, marginales al proceso de internacionalización de la economía peruana, en tanto que la precariedad económica e institucional de dichos empresarios determinaba su incapacidad para enfrentar con éxito el robustecido aparato gubernamental y el respaldo con que éste contaba en los organismos multilaterales de crédito.

Por último, la participación de los representantes evangélicos en el gobierno y las expresiones ofensivas del Presidente con respecto a la jerarquía eclesiástica por su oposición al control de la natalidad, crisparon las relaciones entre Fujimori y la Iglesia Católica. Para resolver esta situación, el Presidente retiró a los evangélicos de las funciones ejecutivas y cesó en dicha campaña. Sin embargo, la mayoría de los religiosos peruanos acusaban al gobierno de desentenderse de los pobres al poner en marcha un "liberalismo salvaje", en contraste con el apoyo militante que el Opus Dei otorgaba a las reformas económicas.

Por otro lado, las relaciones entre el gobierno y las masas populares también sufrieron importantes cambios. En un primer momento, el abandono que hizo Fujimori de sus promesas electorales, sumado a los estragos que produjo el ajuste económico en las debilitadas capas trabajadoras, acarrió el desconcierto así como el rechazo de la mayoría de la sociedad al gobierno; pero, al igual que en otros casos, la reducción de la inflación y el restablecimiento del orden económico contribuyeron a que dicha mayoría cambiara de opinión y brindara su apoyo a la eficacia de las decisiones presidenciales.

Las mencionadas alianzas, el respaldo social y las atribuciones extraordinarias que el Congreso otorgó al Presidente

para resolver los apremiantes problemas económicos determinaron la concentración del poder en el Presidente. Influyeron asimismo en la afirmación del estilo tecnocrático de su gobierno y su aislamiento de las presiones sociales, tal como recomiendan los organismos multilaterales para asegurar la eficacia de sus medidas.

Estos rasgos exacerbaron el presidencialismo político, por lo que algunos analistas identificaron al gobierno de Fujimori en la categoría que O'Donnell denomina "democracias delegativas", representadas por Menem y Collor en Argentina y Brasil, respectivamente, puesto que las amplias atribuciones del Ejecutivo, en contraste con la debilidad de las instituciones estatales, lo autorizaban a ejercer el "decretismo" y a eludir el rendimiento de cuentas de sus actos de gobierno.

En este contexto, la campaña del Presidente se concentró en el ataque a las desgastadas organizaciones políticas, acusándolas de impedirle avanzar en las reformas económicas y en la reorganización del Estado. Así el Ejecutivo se hacía eco de los militares al rechazar las censuras a las impunes violaciones a los derechos humanos, aduciendo que eran falsas o que socavaban la moral del personal castrense en guerra contra la subversión, y que reforzaban además el rechazo de los congresistas a la propuesta militar de suspender los derechos constitucionales a fin de facilitar un ataque eficaz contra los movimientos subversivos. En resumen, para el Ejecutivo y los militares el sistema político constituía un obstáculo en la búsqueda de la reestructuración y la pacificación; o sea, para alcanzar la gobernabilidad del país.

A pesar de los esfuerzos de la oposición para alcanzar un acuerdo político a fin de vencer los escollos a su gestión, Fujimori y los comandos militares decidieron resolver ese *impasse* mediante el denominado "autogolpe" de abril de 1992, que definió la

naturaleza castrense y autoritaria del régimen. Pero, a diferencia de los regímenes "burocrático-autoritarios" del cono sur, las presiones externas obligaron al gobierno que resultó del golpe de Estado a asumir una fachada legal ya aprovechar diversas contingencias para decantar la naturaleza castrense y autoritaria del régimen, personalizado en Fujimori y Montesinos. Este sinuoso proceso de cambios fue motivo de confusión, incluso entre analistas y políticos experimentados, nacionales o extranjeros.

Aparentemente, la decisión golpista respondía a la necesidad coyuntural del gobierno de avanzar en los planes de reestructuración económica y de lucha contra la subversión, pero pronto se vio que dicha resolución respondía también a propósitos de mayores y largos alcances.

En efecto, esa decisión encontraba origen en la manifiesta hostilidad contra la "partidocracia" del Presidente y de los militares, compartida por empresarios y algunos intelectuales, porque en dicho sistema se percibía a "politiqueros, populistas y mercantilistas" como figuras que perseguían la satisfacción de sus intereses personales, en tanto impedían la ejecución del "proyecto nacional" que los primeros se sentían llamados a cumplir. Por tal motivo, el golpe de Estado respondió a la convicción del Ejecutivo y los militares acerca de la necesidad de usar métodos autoritarios para modificar la legislación y reorganizar los aparatos estatales para la puesta en marcha de dicho proyecto.

Pero, aún más, dicha decisión respondía a la profunda convicción con respecto a que se requería de una "mano dura", a la manera de Singapur, que disciplinara a la sociedad y condujera al país a buen puerto, por lo que Fujimori y los militares hicieron pública su intención de gobernar por lo menos otros veinte años.

Por último, dicha decisión anticonstitucional respondió también al particular interés militar por eliminar la injerencia de los dirigentes políticos sobre el gobierno del país, en modo de facilitar

su propia participación legítima en las decisiones gubernamentales para adecuadas a sus planes de recuperación de la autoridad estatal y el mantenimiento del orden público.

Fujimori y los militares estimaron acertadamente que una vasta gama de sectores sociales apoyarían sacrificar la democracia a cambio de rescatar el orden y la estabilidad —la gobernabilidad— mediante la imposición de las reformas económicas y la erradicación de la subversión. De ahí que ciertos ideólogos del liberalismo y de otras canteras defendieran la decisión golpista, aduciendo que la situación excepcional del país requería de soluciones igualmente extremas para consolidar el poder estatal, el orden público y el fomento del mercado, para construir una efectiva democracia política en un futuro lejano.

El Ejecutivo y el aparato castrense coincidieron igualmente en que los partidos políticos se opondrían a la decisión golpista, puesto que los inhabilitaba en sus funciones mediadoras con la sociedad. Fue así que el gobierno cerró el Congreso, censuró los medios de comunicación, cesó a miembros de los tribunales judiciales y del servicio diplomático, intervino las universidades públicas y persiguió a los dirigentes políticos. Entre éstos, persiguió de manera especial al expresidente Alan García porque su liderazgo en el debilitado partido aprista podía constituir un obstáculo a los planes militares y empresariales. Ello determinó que el expresidente García debiera refugiarse en la Embajada de Colombia, en la que solicitó asilo político para escapar a las amenazas contra su persona.

Pero con excepción del caso de García, la persecución a los dirigentes políticos y la censura a la prensa se suspendieron porque, para sorpresa general, la mayoría de la población aprobó la decisión anticonstitucional, en tanto los partidos políticos se veían huérfanos de apoyo a pesar de haber organizado y movido a la ciudadanía a lo largo de seis décadas.

Como se ha dicho, ello ocurrió por el desprestigio que afectaba a los partidos políticos, pero también por su incapacidad para enfrentar unidos la decisión golpista. En consecuencia, el contraste que se apreciaba entre la dividida oposición, en comparación con la exitosa coalición que representaba Fujimori, reforzó el descrédito de esas organizaciones, al tiempo que propiciaba que el fujimorismo fuera percibido como la única alternativa de gobierno y de gobernabilidad.

Al decretar el golpe de Estado, Fujimori y los militares no se percataron sin embargo de los riesgos que corrían en el ámbito internacional a causa de las transformaciones que se habían ido produciendo, tanto en el escenario mundial como en el latinoamericano: de un lado, la caída del muro de Berlín y la eliminación de la amenaza comunista de la agenda política norteamericana y, del otro, la globalización y los procesos de transición democrática en Europa Oriental, que dieron lugar a la aparición de un clima liberal en los círculos políticos, empresariales e intelectuales, así como en los medios de comunicación internacionales.

Del mismo modo, el restablecimiento de la democracia en América del Sur contribuyó a reforzar esta tendencia mediante la suscripción de una sucesiva serie de acuerdos internacionales en consonancia con dicho propósito: además de la resolución 1080 suscrita en Santiago de Chile en el año 1991, por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), para condenar y excluir de esta organización a gobiernos originados en actos ilegítimos, este tipo de acuerdo fue ratificado en cuantas reuniones participan los jefes de Estado latinoamericanos y en las cumbres presidenciales a nivel mundial.

Dichos factores contribuyeron a que el "auto-golpe" desatara una sorpresiva reacción externa; más aún porque los gobernantes de Bolivia, Brasil y Guatemala pretendieron seguir

el ejemplo peruano para resolver sus problemas internos, con la consiguiente amenaza a una "tercera ola" democrática en América Latina y por tanto a la gobernabilidad regional. Para cerrarle el paso a Fujimori y, de paso, a los intentos golpistas en otros países, Estados Unidos movilizó el rechazo de los gobiernos latino americanos y presionó por el restablecimiento del orden constitucional; amenazó con abandonar el Grupo de Apoyo, suspender la ayuda económica al Perú y vetar los préstamos de los organismos multilaterales en caso de que las autoridades peruanas desoyeran estas demandas. Por último, como condición para reanudar su colaboración, exigió al Perú sumarse a la estrategia bélica norteamericana contra el narcotráfico.

Esta inesperada reacción de Washington produjo confusión en el gobierno fujimorista puesto que desmentía su tradicional complacencia con los golpes militares que se ceñían a sus intereses estratégicos; pero, asimismo, desconcertó a los opositores del golpe militar, porque al asumir la defensa del pluralismo político amparó incluso a organizaciones y líderes políticos que sostenían posturas no antiliberales sino antinorteamericanas.

Las insólitas presiones de Washington sobre el Perú anulaban las tentaciones golpistas en Bolivia y Brasil, en tanto que el encuentro de la movilización social con las presiones externas contribuyó a deponer al presidente Serrano en Guatemala; pero, de manera sorprendente, los apremios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre Fujimori no lograron sus propósitos a pesar de la vulnerabilidad del Perú frente a Estados Unidos.

Este insólito resultado fue consecuencia de la combinación de diversos factores: el respaldo de la mayoría de la población a la decisión golpista permitió a Fujimori ya los militares mantenerse firmes ante las presiones de la Casa Blanca, así como acusar al gobierno norteamericano de ignorar tanto los graves problemas del Perú como la perentoria necesidad que se apreciaba en el

sentido de interrumpir la democracia para resolverlos, a fin de evitar el peligro de que el país cayera en una situación de ingobernabilidad. De ahí que los militares y la "comunidad de inteligencia" norteamericanos prestaran su decidido apoyo al auto-golpe en contra del Departamento de Estado, porque permitiría a los militares reprimir la subversión sin cortapisas legales, recuperar la autoridad estatal y asegurar la estabilidad regional. En cuanto a las instituciones financieras internacionales públicas y privadas, ellas vieron con buenos ojos la decisión golpista, porque ésta otorgaba al gobierno peruano facultades para impulsar las reformas y el crecimiento económico, permitiendo así al país honrar su deuda externa. De otro lado, el rechazo de los gobiernos de la región a apoyar la unilateral intervención norteamericana en los asuntos internos de uno de los países miembros de la OEA desembocó en el incumplimiento por parte de ésta de los compromisos suscritos en favor de la democracia. Esta situación determinó que la Casa Blanca desistiera de sus amenazas a Fujimori. No obstante, sus presiones lograron mediatizar los propósitos del "gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional" al lograr que el Presidente se comprometiera con los cancilleres de la OEA a restablecer el orden constitucional. Paradójicamente, este compromiso condujo al gobierno civil-militar a adoptar una fachada democrática que le permitió legitimar su ejercicio arbitrario a nivel nacional e internacional.

En efecto, a fines de 1992 el Ejecutivo convocó a la población a elegir sus representantes al Congreso Constituyente Democrático (sic). Los resultados de los comicios eran previsibles, puesto que el Ejecutivo, al no encontrar cortapisas legales ni contrapesos políticos, concentró e hizo uso arbitrariamente de los recursos fiscales y de la administración pública, en tanto que las Fuerzas Armadas operaban abiertamente para asegurar el triunfo del gobierno. Los resultados electorales eran además

previsibles en razón de la abierta división con que los dirigentes políticos enfrentaron esta convocatoria ilegal, al igual que por la abstención adoptada por los principales partidos de la oposición para evitar que se hiciera evidente su debilidad electoral. En consecuencia, esta situación favoreció a los candidatos reclutados por el entorno presidencial, así como a los autotitulados "independientes", dispuestos a ofrecer su apoyo al gobierno a cambio de futuras recompensas oficiales.

La fortuna acompañó a Fujimori en sus esfuerzos por consolidarse en el poder, gracias a la captura de los dirigentes subversivos y al inicio del desmantelamiento de sus agrupaciones en las vísperas electorales: la sensación de alivio y de optimismo general que produjeron estos hechos fue capitalizada electoralmente por el gobierno. Pero, además, el éxito logrado contra la subversión sirvió para justificar la decisión golpista y reforzar el apoyo social, en tanto que las posiciones de los militares norteamericanos y de los inversionistas extranjeros se veían fortalecidas ante el Departamento de Estado.

Como era de esperar, la mayoría del Congreso Constituyente consagró la concentración de poderes que usufructuaba el Ejecutivo, al formalizar la figura ya extremadamente presidencialista de Fujimori, y consagró la reelección presidencial a fin de asegurar su permanencia en el poder al menos por otros diez años. Por su parte, mientras la opinión pública impugnaba la amnistía decretada por el Congreso a favor de los uniformados por las violaciones a los derechos humanos, las Fuerzas Armadas ampliaron y consolidaron su autonomía funcional, lo cual les permitió confirmar el control político-militar del territorio, que ya detentaban, extender la jurisdicción castrense a los civiles en los casos de terrorismo y narcotráfico, al igual que, según se les atribuyó posteriormente, en los casos de delincuencia "agravada". Así también, el asesor Montesinos, en razón del control que

ejercía dentro del Servicio de Inteligencia (SIN), ampliaba considerablemente su grado de influencia política, al concentrar la información y el análisis de los movimientos subversivos, del tráfico ilícito de drogas y, particularmente, de las actividades de la oposición mediante un ampliado servicio de espionaje.

Estos recursos hicieron que creciera significativamente el ascendiente que Montesinos ejercía sobre Fujimori, hasta el extremo que controlaba y organizaba su agenda política y su existencia cotidiana; y así fue consolidando su posición clave en el entorno presidencial con el consiguiente desplazamiento de familiares y amigos del Presidente. Por estos motivos, no es de extrañar que Montesinos fuera calificado de "Rasputín" y que se dijera que compartía el poder tanto con Fujimori como con el jefe de las Fuerzas Armadas.

Entonces, los tecnócratas de la administración fujimorista aceleraron las reformas económicas sin encontrar mayores dificultades, en tanto que la modificada composición de las funciones gubernamentales determinó la definitiva quiebra de las tradicionales relaciones entre sociedad y Estado. Dentro de las favorables condiciones externas presentes durante el periodo 1993-1997, estas medidas contribuyeron al flujo de capitales y de las inversiones extranjeras que avalaron las medidas económicas del gobierno; en consecuencia, el horizonte de progreso económico favoreció la aprobación de la mayoría de la población a la gestión presidencial.

3. Las bases institucionales y sociales del régimen autoritario.

No obstante contar el gobierno con todas las cartas a su favor y sin que mediara una oposición organizada, el nuevo texto constitucional fue aprobado por un margen muy ajustado en el

referéndum de 1993; sorprendente resultado que permitió comprobar que el gobierno no tenía suficiente control sobre la sociedad, y particularmente, sobre los abandonados sectores populares a los que se les atribuía una natural predisposición de sometimiento al ejercicio autoritario del poder.

Ante este resultado, el entorno civil-militar de Fujimori aceleró la reorganización de la composición y funcionamiento de los organismos estatales a fin de reglamentar el desempeño y controlar la lealtad de su personal al régimen, neutralizar a la oposición y ganarse a las capas populares, de manera de ejercer el firme control político sobre el "frente interno" como condición para obtener el apoyo de actores estratégicos del "frente externo".

Para tales efectos, la sustancial ampliación de las atribuciones del SIN le permitió extender la vigilancia a la jerarquía militar en tanto se independizaba de las Fuerzas Armadas, al punto de constituirse en un arma aparte, en modo tal que Montesinos lograba controlar la jerarquía militar colocando a sus allegados en la cúpula del aparato castrense. Esta ampliación de las funciones del SIN abarcó también la vigilancia sobre el Ejecutivo—incluso sobre Fujimori— sobre los congresistas del régimen, los miembros de la administración de justicia y, en general, el personal de la administración pública. Montesinos adquirió entonces una influencia decisiva en el reclutamiento, promoción, marginación o remoción de la jerarquía militar, del gabinete presidencial, de los parlamentarios, jueces y funcionarios.

Además, el SIN extendió sus atribuciones a fin de auscultar a la opinión pública, acechar a los opositores al régimen, ejecutar operativos psico-sociales y soterradas medidas represivas destinadas a anular las tendencias contrarias al régimen, y favorecer las que se ajustaban a los propósitos particulares de esa dependencia oficial y los objetivos generales del gobierno cívico-militar.

De esta manera el SIN bajo el comando de Montesinos se constituyó en el custodio de los intereses y las necesidades del "proyecto" político que encarnaban Fujimori, el general Hermoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el propio Montesinos. Es así como el SIN actuando como brazo político del gobierno capturó las instituciones estatales y pasó a ser las veces del "partido del Estado". Por este motivo rechazó la creación de una organización política que aglutinara a los fujimoristas, por la competencia que podría originar, y sólo en los momentos electorales permitió la creación de movimientos ad-hoc para recabar el apoyo social al gobierno.

En segundo lugar, para consolidar el régimen autoritario la camarilla gobernante decidió darle peso a las políticas sociales y ganarse así el respaldo de las masas indigentes, que constituyen alrededor de la mitad de la población del país, y particularmente de las mujeres de estos sectores sociales, lo que coincidió con el interés de los organismos multilaterales de crédito para impulsar la lucha contra la pobreza. Para ello, el gobierno concedió especial interés a la canalización de la asistencia estatal a las mujeres de dichos sectores sociales, promovió la participación de las profesionales en la administración pública y en las posiciones políticas, y en general decretó dispositivos favorables a las mujeres.

Como se dijo anteriormente, después de la debacle del Estado durante los años ochenta, la restauración de la autoridad y el crecimiento de los ingresos fiscales fortalecieron la capacidad de las instituciones oficiales, lo que les permitió expandir su presencia en la sociedad. Así, la concentración del poder y el incremento sustantivo del gasto social facilitaron el control y la ejecución de las políticas sociales, en detrimento de otras dependencias gubernamentales. En efecto, el 25% del presupuesto del país se destina al Ministerio de la Presidencia, que ya cuenta con los recursos externos destinados a combatir la pobre-

za, mientras la asignación a los gobiernos locales equivale al 3% del mismo.

Los alimentos que permiten sobrevivir al 40% de la población y otro tipo de "donaciones" oficiales, así como la retórica que privilegia la "democracia social" por encima de la "democracia política", han contribuido a que Fujimori establezca una relación directa con los sectores populares y que éstos lo perciban como su representante personal. Esta relación se vio reforzada por la cooptación que lleva a cabo el gobierno de dirigentes locales, muchas veces provenientes de las debilitadas organizaciones populistas y de extrema izquierda, a fin de canalizar las demandas populares y los intereses del régimen; asimismo, dicha relación de Fujimori se refuerza con el control que ejerce el SIN sobre los canales de televisión y otros medios de comunicación, al tiempo que hostiga a los que informan o emiten opiniones contrarias al régimen, con el deliberado propósito de que las capas populares accedan sólo a los testimonios oficiales.

De tal modo, a pesar de los estragos que las políticas liberales producen en las masas populares, el asistencialismo y el control de los medios de comunicación permitieron que Fujimori consolidara sus bases de apoyo entre la población indigente.

Por la extrema personalización del poder y el uso patrimonial que Fujimori hizo de los recursos públicos, por la dependencia de las masas populares al Estado, y la retórica antipolítica, algunos analistas han catalogado al fujimorismo en la cuestionable especie de "neo-populista", lo que, en el mejor de los casos, parece dar cuenta de la confusión que producen los comportamientos y las alianzas del régimen autoritario.

En tercer lugar, el Ejecutivo persiguió reforzar y ampliar las alianzas con poderes externos para fortalecer el régimen y acallar, sino doblegar, las críticas internacionales. Para apuntalar esa relación, Fujimori no sólo siguió las recomendaciones, sino que inclu-

so proclamó su firme adhesión a los organismos multilaterales de crédito, por lo que la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional declaró que esas manifestaciones constituían "música celestial" a los oídos de los sectores financieros internacionales.

En el mismo sentido Fujimori estableció una fórmula de colaboración con Washington en la lucha contra el narcotráfico: mientras que la producción de la droga se trasladaba a Colombia, la interdicción aérea logró reducir significativamente el cultivo de las hojas de coca y la comercialización de cocaína, en circunstancias que el consumo de estupefacientes y el crimen concentraban la atención pública en Estados Unidos. Estos resultados, además de renovar los vínculos entre las Fuerzas Armadas y sus equivalentes norteamericanos, contribuyeron a afianzar las antiguas relaciones que Montesinos mantenía con las agencias de seguridad de Estados Unidos y los organismos dedicados a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; pero no por ello ha desaparecido la sospecha de que el asesor participa en esta actividad ilegal.

De otro lado, Fujimori estrechó relaciones con países del Asia, en la esperanza de atraer capitales de esa región, a la vez que proclamaba su simpatía por los "valores asiáticos", concretamente con el modelo de Singapur. Pero la sostenida ayuda de Japón no se vio acompañada con el flujo de inversiones que el Presidente alentaba para desligarse de la dependencia económica y de las requisitorias liberales del gobierno norteamericano.

Es así como la restauración de la gobernabilidad y la consolidación del "frente interno" otorgaron a Fujimori importantes créditos políticos en determinados centros de poder en Washington y en otras capitales, que contribuyeron a justificar la naturaleza autoritaria del régimen y a aplacar los efectos de las denuncias por los atropellos a los derechos humanos y la destrucción de la democracia.

En suma, las alianzas políticas y la eficacia del autoritarismo para resolver los aspectos más evidentes de la crisis orgánica del país condicionaron el apoyo interno y externo al fujimorismo, en tanto sus contrincantes seguían apegados a sus estrategias individuales. No obstante esas evidencias, ideólogos del régimen, ciertos círculos de la oposición, así como algunos analistas extranjeros recurrieron a la difundida creencia de que la "cultura autoritaria" enraizada en la sociedad peruana explicaba el respaldo al gobierno. Pero no pasaría mucho tiempo para que los hechos desautorizaran esta pretendida caracterización de la idiosincrasia nacional.

4. El nuevo ciclo de participación pública.

En vísperas de las elecciones de 1995 el gobierno no tuvo reparos en usar discrecionalmente los recursos con que contaba para que la candidatura de Fujimori se impusiera a la de Javier Pérez de Cuéllar. De esta forma, el reelecto presidente pudo ufanarse de haber derrotado a dos encumbrados personajes de escala internacional —Vargas Llosa y el ex-secretario general de las Naciones Unidas— representantes ambos de las capas sociales que tradicionalmente habían regido el país, y que este resultado debía atribuirse a que él representaba los intereses de los sectores postergados de la sociedad y, en esa medida, favorecía la promoción social y política de las mayorías populares.

Sin embargo, a poco de haberse iniciado el segundo periodo presidencial de Fujimori (1995-2000), una serie de atropellos gubernamentales, así como los magros resultados de la política económica, originaron un proceso de movilización ciudadana que culminó con masivas demostraciones en contra del fujimorismo, acompañadas con múltiples críticas insólitamente enérgicas

precedentes de gobiernos, organismos y medios de comunicación internacionales, que desembocaron en el resquebrajamiento de las bases del régimen autoritario.

Paradójicamente, después de la reelección presidencial y en la cúspide de la popularidad del Presidente, los resultados de las elecciones municipales de 1996 fueron adversos a los candidatos oficiales en importantes ciudades, al tiempo que el delfín de Fujimori era derrotado por Alberto Andrade en Lima, principal plaza electoral del país. Este candidato, aunque simpatizante de las medidas económicas y del estilo autoritario del Presidente, pretendía emular su ascenso político fulgurante, manteniendo su independencia del fujimorismo.

Este sorprendente fracaso del régimen y del Presidente tuvo importantes consecuencias para fijar el curso de acción de la camarilla palaciega. En efecto, ese resultado llevó a que el entorno de Fujimori concluyera que era preciso controlar más los estrechos marcos de libertad, puesto que constituían obstáculos a la consolidación del régimen en el largo plazo. Asimismo, dicho entorno llegó a aceptar que los votos a Fujimori no eran endosables a otro candidato, en razón del elevado grado de personalización del poder, por lo que él era indispensable para mantener la continuidad indefinida del régimen autoritario. De ahí que el problema de la sucesión, típico de los regímenes autoritarios, pasara a constituir el eje de las preocupaciones y de las decisiones gubernamentales: cómo lograr mantener a Fujimori en el poder durante los próximos veinte años.

Para enfrentar el desafío que constituía Andrade, la digitada mayoría parlamentaria restringió las atribuciones y los recursos municipales a fin de impedir que el flamante Alcalde de Lima, y otras figuras similares, pudieran erigirse en alternativas a Fujimori, al tiempo que, alegando la necesidad de modernizar la judicatura, el Ejecutivo intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y

el Consejo de la Magistratura, por lo que logró obtener una influencia decisiva también en el Poder Electoral.

En este contexto, la controlada mayoría parlamentaria dictó en 1996 una "interpretación auténtica" de la Constitución que facultaba la segunda reelección presidencial de Fujimori en el 2000 y, para convalidar esta decisión, el Congreso destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional que habían dictaminado en contra de dicha interpretación.

Luego, mediante artificios legales, el gobierno intervino uno de los principales canales de televisión y persiguió a su propietario, al igual que a su familia, por las denuncias que aquél había formulado contra Montesinos y altos oficiales de las fuerzas armadas por su participación en el narcotráfico y por las torturas y asesinatos de agentes del SIN que, supuestamente, habían filtrado informaciones a la prensa sobre acciones violentas contra los derechos humanos. Realizó además actos de espionaje y de hostigamiento contra opositores del gobierno, concretamente contra la candidatura de Pérez de Cuéllar.

El rechazo de los controlados tribunales a anular estas decisiones motivó que opositores al régimen denunciaran al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tales actos; en tanto las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y varios gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, elevaron sus voces de protesta contra esas disposiciones y mantienen hasta el presente sus cerradas críticas a los sucesivos atropellos gubernamentales.

La falta de escrúpulos de los gobernantes, y los torpes o cínicos argumentos de los voceros oficiales para justificar esas violaciones de los derechos ciudadanos, produjeron un sentimiento de indignación general que alentó la emergencia del primer movimiento social de envergadura que congregaba a figuras re-

presentativas de distintos sectores de la sociedad en defensa de la libertad de expresión y por la democracia. Este movimiento se concretó en la recolección de un millón y medio de firmas, equivalentes al 10% del padrón electoral, que llevó a cabo el Foro Democrático para solicitar al Congreso la convocatoria a un referéndum a fin de que la ciudadanía diera su veredicto sobre la legalidad de la interpretación constitucional. Pero, una vez más, las consabidas artimañas legales de la mayoría de congresistas frustraron la realización de la consulta popular.

Además de esos agravios, la extorsión y las amenazas practicadas por los agentes de Montesinos en contra de empresarios y opositores al régimen propiciaron que sectores de la sociedad, incluso los que aprobaban la gestión presidencial, descubrieran los vicios del autoritarismo y las virtudes de la legalidad democrática para defender sus intereses y principios. De ahí que cada vez más se escucharan voces reclamando la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática.

En efecto, como se ha visto, la mayoría de la población justificaba el desempeño autoritario por su eficacia para estabilizar económica y políticamente el país, más que por supuestas características culturales de la sociedad; pero, logrado este objetivo, la continuidad de tal comportamiento llegó a ser percibido como un peligro para la gobernabilidad. Esta situación fue percibida así porque evidenciaba que la falta de transparencia de los actos de gobierno y el rechazo a rendir cuenta de los mismos daban lugar al fomento de la corrupción y a la existencia de continuas arbitrariedades gubernamentales, lo cual, a su vez, estimulaba la polarización política, inhibía las inversiones y alentaba el malestar social.

En efecto, la concentración de las decisiones en manos de la camarilla gobernante y su desatención de los distintos intereses sociales, el secreto control político de Montesinos sobre los

aparatos estatales y la sociedad, la red de corrupción que logró tejer para favorecer a sus allegados y penalizar a sus adversarios, la persecución gubernamental a los medios de comunicación que censuran el espionaje, la extorsión y la corrupción, en tanto privilegiaba a la prensa adicta al régimen, despertaron la hostilidad y la desconfianza frente al gobierno y al presidente Fujimori, tanto en el país como en el exterior.

De tal modo, al igual que en otros casos semejantes, la cotidiana experiencia autoritaria propició el descubrimiento, por parte de capas medias y empresariales, de las virtudes de los principios y de las reglas democráticas, fenómeno que se extendió a las capas populares urbanas, al tiempo que el nuevo clima internacional favorecía que el fujimorismo fuese censurado por gobiernos y medios de comunicación; e incluso que inversionistas y organismos multilaterales expresaran veladamente su desazón ante el comportamiento "irregular" del gobierno peruano.

A la protesta por tales tropelías políticas, se sumó la desaprobación social por el pobre desempeño del programa económico del gobierno: mientras en el periodo 1993-1995 el promedio anual del crecimiento económico se acercaba al 8%, entre 1996,2000 ese porcentaje fue sólo del 3%, equivalente al del crecimiento anual de la población. Este declive se debió principalmente a factores políticos y reforzó la insatisfacción de diversos sectores sociales con el gobierno.

Después de la reelección presidencial, en 1996 el Ejecutivo se vio precisado a frenar el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales por los excesos cometidos durante la campaña electoral, los cuales, aparentemente, habían contado con el consentimiento del Fondo Monetario Internacional, ya que éste no objetó el incumplimiento de los acuerdos que había establecido con el gobierno. La recesión económica que produjo dicha medida determinó que ese año el crecimiento económico

cayera al 2.4%, conforme a las controladas y discutibles fuentes oficiales.

Para aplacar el descontento a que dio lugar tal situación, el Ejecutivo designó un gabinete ministerial que dictó algunas tímidas medidas heterodoxas destinadas a re activar el aparato productivo, las cuales fueron interpretadas como un eventual cambio en la orientación del gobierno; de allí que esas medidas y la supuesta desviación del modelo económico fueran paralizadas por la tenaz oposición de los organismos multilaterales, de los tecnócratas y los empresarios.

No obstante, los problemas fiscales originados por el gasto de los organismos estatales para confirmar la reelección de Fujimori en 1995, el intento frustrado del Ejecutivo de reproducir las estigmatizadas políticas de Alan García para reactivar la producción, las esporádicas declaraciones del Presidente contra el "neoliberalismo", para ponerse a tono con las críticas al consenso de Washington, la paralización de las reformas económicas para mantener la popularidad del Presidente y asegurar su re-reelección en el 2000, contribuyeron a crear una sensación de inseguridad entre los sectores empresariales y los tecnócratas nacionales e internacionales. En efecto, todos esos actos parecían indicar que el pragmático presidente Fujimori estaría dispuesto a abandonar la economía de mercado y a hacer uso de procedimientos "populistas" si ello le aseguraba su consolidación indefinida en el poder, aunque fuera a costa de la salud económica del país.

Esta sospecha contribuyó a que empresarios y tecnócratas comenzaran a tomar distancias del Ejecutivo y manifestaran su rechazo a la dependencia de la economía frente a la política que (ingenuamente) habían creído superada con la implantación de las reglas de la economía de mercado. Ello dio lugar a que esos sectores estratégicos, que hasta entonces habían otorgado su firme respaldo al gobierno, comenzaran a percibirlo críticamente

dando inicio a un lento proceso de resquebrajamiento de la coalición fujimorista.

Sin embargo, en circunstancias que el descontento político y económico crecía en diferentes sectores, la fortuna nuevamente vino en ayuda de Fujimori para despejar las tensiones acumuladas. En diciembre de 1996 un grupo remanente de los movimientos insurgentes ocupó la Embajada de Japón y secuestró a altos funcionarios del gobierno, a diplomáticos, así como a ciudadanos peruanos y japoneses, después de varios meses en que la atención nacional e internacional estuvo concentrada en dicho evento, los militares eliminaron a los subversivos y rescataron a los retenidos, con el consiguiente alivio general. La decidida y exitosa actuación de Fujimori y los militares concitó el aplauso y la admiración de gobiernos y de organismos castrenses extranjeros.

Luego, en 1997, el conflicto bélico con el Ecuador contribuyó a que la sociedad otorgara su respaldo patriótico al Presidente y a las Fuerzas Armadas, por lo que, al igual que en la ocasión anterior, fue puesto de lado el debate sobre las pendientes cuestiones políticas y económicas. Las intensas presiones internacionales que ejercían los países garantes del Tratado de Río de Janeiro sobre Ecuador y Perú para que solucionaran pacífica y definitivamente sus diferencias fronterizas determinaron que Fujimori otorgara ciertas concesiones al Ecuador, a pesar de la oposición manifestada al respecto por buena parte de la opinión pública, decisión que propició la resolución del problema que ambos países arrastraban desde tiempo atrás.

Pero, para lograr tal acuerdo, los países garantes del Tratado de Río se vieron precisados a exigir la eliminación de las resistencias que presentaban en ese sentido los comandos militares de ambos países, lo cual culminó con la deposición del general Hermoza Ríos, jefe de las Fuerzas Armadas peruanas, y simultáneamente con la de su contraparte ecuatoriano.

Desaparecida la competencia del general Hermoza, Montesinos culminó el proceso de concentración del poder en las Fuerzas Armadas al depurar a los oficiales "hermocistas" de los altos mandos y reemplazados por sus allegados. A partir de esa posición, invadió y conquistó los predios estatales que se mantenían libres de su influencia, consolidando la red "montesinista" en el gobierno, por lo que pasó a compartir el poder con Fujimori. De ahí que se elevaran críticas al carácter despótico del régimen autoritario y que ellas se concentraran en ambos personajes, al tiempo que la mayoría de la población desaprobaba la participación de Montesinos en el gobierno.

La firme decisión demostrada por el presidente para solucionar exitosamente el secuestro en la Embajada del Japón, al igual que para lograr los acuerdos con el Ecuador y, luego, para arreglar las cuestiones fronterizas pendientes con Chile, contribuyó a reforzar la posición de Fujimori, en tanto que, una vez más, acentuaba la percepción interna y externa en el sentido de que el Presidente era imprescindible para consolidar la paz del país y la seguridad regional.

Pero poco después de que Fujimori alcanzara los altos índices de aprobación por los mencionados éxitos, diversas cuestiones económicas contribuyeron a agudizar las tensiones políticas entre variados sectores sociales y el régimen autoritario. El efecto-tequila en 1997, el fenómeno marino del Niño y las contradictorias medidas que adoptó el gobierno para encarar las crisis económicas de Asia, Rusia y Brasil, produjeron en 1998 una aguda recesión de la que el país no logra salir hasta hoy, sin que se perciban visos de recuperación.

Dicho contexto, y el rechazo al carácter autoritario del régimen, contribuyeron a que la opinión pública desaprobara mayoritariamente la gestión económica del gobierno y a que descendiera la popularidad de Fujimori. Mientras en el período

1991,1996 el promedio de aprobación al Presidente rondaba el 65%, entre 1996,1998 descendió a 39%; proporción relativamente alta que se explica por el apoyo que sectores de la población menesterosa otorgaban al Presidente por las razones antes mencionadas. Estos cambios se reflejaron en las elecciones municipales de 1998 en las que el alcalde de Lima, Alberto Andrade, presunto candidato presidencial del año 2000, derrotó nuevamente al candidato oficial, mientras que opositores al régimen fueron elegidos para dirigir las principales ciudades del país.

En estas circunstancias el gobierno se encontró bajo el fuego cruzado de diferentes sectores sociales: por un lado, las capas urbanas medias y trabajadoras criticaban al gobierno por la falta de empleo y de ingresos adecuados, por lo que le exigían la adopción de medidas que incentivarán la demanda para corregir la deprimente situación por la que atravesaban, coincidiendo así con las peticiones que formulaban los propietarios de las pequeñas y medianas empresas; por otro lado, los propietarios de las grandes empresas y los tecnócratas no ocultaban su contrariedad por la paralización de las reformas de primera y segunda "generación".

En efecto, estos últimos consideraban que dichas reformas eran indispensables para incentivar las necesarias inversiones extranjeras, elevar la eficiencia económica, promover la seguridad jurídica y la transparencia de las acciones gubernamentales, condiciones necesarias para generar confianza en el ámbito empresarial e impulsar el crecimiento económico. Es decir, los empresarios incorporaron los factores políticos, de naturaleza democrática, en el tratamiento de las cuestiones económicas.

Pero si por una parte el gobierno trataba de satisfacer las demandas de los microempresarios a través de las políticas asistencialistas, por otro lado desestimaba las solicitudes de empresarios y tecnócratas en el sentido de avanzar en las reformas

estructurales, pues ellas resultaban incompatibles con la naturaleza del régimen político. En efecto, se vio entonces que la demanda de privatizar ciertos servicios públicos era rechazada porque sus consecuencias políticas podían afectar el respaldo popular al Jefe de Estado; que la solicitud de iniciar la "reforma del Estado" era ignorada en razón de que la autonomía del Poder Judicial, la descentralización, la transparencia y el rendimiento de cuentas del gobierno, entre otras exigencias, comprometían la estructura cerrada y concentrada del régimen que, secreta e ilegalmente, buscaba controlar los aparatos de la administración pública y de las organizaciones de la sociedad.

Además, para el gobierno, las objeciones y las críticas de los empresarios y los tecnócratas no encontraban asidero porque las decisiones adoptadas por Fujimori y su entorno se veían convalidadas por la apología que aquéllos habían hecho anteriormente de la concentración del poder y la eficacia de sus decisiones, razón por la que los organismos multilaterales de crédito habían contribuido generosamente a sustentar la gobernabilidad del país.

Las violaciones a los derechos humanos y el rechazo del gobierno a ratificar su validez universal —posición que lo llevó a votar con China y Cuba a fin de que se reconociera la relatividad cultural de los derechos humanos en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas— constituían aparentemente motivos de preocupación en algunos sectores económicos internacionales, no obstante lo cual connotados voceros de la banca transnacional se apresuraron a desmentir que la conducta del gobierno peruano a ese respecto influyera en las decisiones de los inversionistas, tal como era en efecto.

En este contexto de estancamiento económico y de creciente tirantez política, la contraposición de los planteamientos para reactivar la economía se proyectó en el gobierno y desem-

bocó en el cambio del equipo que había realizado las reformas y pugnado infructuosamente en los últimos años para impulsarlas, por otros colaboradores a los que se les atribuía condiciones para proyectar y ejecutar políticas alternativas para sacar al país del atolladero. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que las esperanzas depositadas en el nuevo equipo se desvanecieran, sin pena ni gloria.

Y así, en tanto empresarios y tecnócratas debatían sesudamente sobre las distintas medidas que debía adoptarse y las consecuencias que ellas podían acarrear, parecían no percatarse de que el principal foco de interés del dúo Fujimori-Montesinos y la camarilla gobernante que dependía de ellos era asegurar el tercer triunfo electoral de Fujimori a como diera lugar, postergando todo otro tipo de consideración para después de las elecciones.

Para tal efecto, el Ejecutivo decidió impulsar las políticas asistenciales y desarrollar una intensa campaña a fin de conquistar el voto popular, por lo que elevó el gasto público en 1999 y el primer semestre del siguiente muy por encima de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, sin que éste se inmutara, y de los límites fijados por la ley de "prudencia fiscal" del Congreso, sin que sus miembros formularan alguna observación, lo que auguraba un duro ajuste post-electoral, al igual que en 1996. Para ello el gobierno estimaba que podía usar discrecionalmente las elevadas reservas internacionales provenientes de las privatizaciones y contaba con la tolerancia, sino con el respaldo, de los organismos multilaterales de crédito para llevar adelante sus planes, en razón de que se imponía como la única alternativa real de gobernabilidad.

No obstante el crecimiento de las protestas y de los movimientos sociales alrededor de las cuestiones políticas y económicas, no se logró socavar las bases internas y externas del

régimen; sobre todo porque los dirigentes del abanico opositorista persistieron en sus estrategias individuales que alientan la competencia en vez de la cooperación mutua. Por tanto, las fuerzas opositoras no lograban presentarse como alternativa de gobernabilidad, a diferencia del sólido autoritarismo fujimorista.

Esta situación responde a que dichos dirigentes comandan movimientos electorales y exánimes partidos que no tienen existencia orgánica, por lo que en general las lealtades políticas de sus miembros son efímeras y, asimismo, porque la representación que asumen y las credenciales democráticas que presentan son dudosas, en el mejor de los casos. De allí que esas figuras aparezcan como eventuales caudillos antifujimoristas que, paradójicamente, reproducen muchas veces el estilo de conducción autoritario de su contrincante.

A esto se suma el pesado legado de desconfianza mutua que cargan esos dirigentes, tanto por las posiciones antagónicas que adoptaron en diversas circunstancias históricas, como por la heterogeneidad de sus concepciones económicas y políticas. Por último, las características del sistema electoral también contribuyen a mantener divididos a los dirigentes de la oposición; de allí que, a pesar del clamor por la constitución de un frente de oposición que presentara una candidatura única, surgieran varios aspirantes a la presidencia en competencia con Fujimori, que esperaban congregarse en una eventual segunda vuelta electoral a la mayoría de los electores opuestos al Presidente.

Cada uno de esos postulantes competía por el mismo electorado, sin contar con bases organizadas ni planes concretos para enfrentar a Fujimori, por lo que se contentaron con adoptar posiciones defensivas ante la "guerra sucia" emprendida por el Estado, y siguieron en campaña con la ilusión de que las elecciones se realizarían en un marco relativamente libre y justo. En suma, tales condiciones confluían para inhibir la construcción

de nuevas identidades políticas que representaran la pluralidad de intereses sociales alrededor de alternativas convincentes de gobernabilidad democrática.

Por otro lado, las dificultades que confrontaba la integración de la oposición se agravaban por las amenazas, la persecución y los operativos "psico sociales" de los organismos estatales para amedrentar, desacreditar y dividir a sus rivales. El temor a las distintas formas de coacción del gobierno, las continuas acusaciones lanzadas contra sus contrincantes por su incapacidad para constituir una fuerza sustentatoria de la gobernabilidad contribuían a que empresarios y capas medias se mostraran renuentes a involucrarse en la política; al tiempo que el asistencialismo estatal y el control de los medios de comunicación propician la despolitización de las desorganizadas masas indigentes y su dependencia del Estado.

Asimismo, la cooptación gubernamental ha incentivado la proliferación de tráfugas provenientes de diferentes sectores y actividades sociales en las disciplinadas filas oficialistas; quienes dan así muestras de evidente deslealtad política y falta de respeto a principios convencionales, lo que también contribuye a fortalecer el descrédito de la política.

A pesar del crecimiento del descontento económico y el rechazo político al gobierno, esos factores propiciaron que en amplios sectores de la sociedad se percibiera al régimen autoritario de Fujimori y Montesinos como la única opción válida y que ella se proyectara al exterior como la sola elección capaz de asegurar la gobernabilidad y el progreso del país. En esta medida, la creencia en que sólo con el gobierno y en el gobierno es posible adelantar los intereses individuales y colectivos lleva a compartir la consigna del jefe de Sendero Luminoso cuando dice que "salvo el poder todo es ilusión".

5. Entre el autoritarismo y la democracia.

A despecho del descontento social, la resuelta voluntad del gobierno a forzar la segunda reelección de Fujimori en el 2000 para mantener la estructura de dominación, asegurar la impunidad a la corrupción de la camarilla mafiosa en nombre de la gobernabilidad —en circunstancias que Pinochet era retenido en Londres— determinaron que, con la estrecha colaboración de las Fuerzas Armadas, el SIN organizara una ofensiva en el "frente interno" para doblegar a sus enemigos por todos los medios a su alcance, y lograr el triunfo electoral a cualquier precio. Así el dúo Fujimori-Montesinos inauguró una "guerra sucia" contra la oposición; pero, contrariamente a lo que esperaban, sus consecuencias revertieron en contra de ellos y de la red mafiosa que habían tejido en los poderes del Estado.

El control de la prensa amarilla ("prensa chicha") por el SIN y el hostigamiento obscuro a los rivales de Fujimori, que redundó en la difusión de un estilo político y cultural perverso, así como el monopolio de la información con que contaba el régimen en los canales de televisión de señal abierta, contribuyeron a que la mayoría de la población tuviera una información parcial y distorsionada acerca de los candidatos y del proceso electoral. Estas acciones se vieron coronadas por el éxito, puesto que produjeron el descenso de las intenciones de voto de algunos de los diferentes contrincantes de Fujimori.

Sin embargo, a pesar de las amenazas y las acusaciones a la prensa que no se alineaba con el gobierno, y que desde el autogolpe de 1992 ha mantenido consistentemente sus críticas a los abusos del régimen, esos medios no dejaron de dar muestras del fraude electoral en marcha, motivo por el que han sido elementos claves para que la oposición siguiera viva y para que creciera cada vez más en distintos sectores de la sociedad. A este respecto,

el caso más sonado y que puso en evidencia la catadura del régimen, fue la denuncia de la falsificación de un millón de firmas para inscribir la candidatura de Fujimori, denuncia hecha por el diario *El Comercio*, al que la opinión pública singulariza por su objetividad y ponderación.

A pesar del escándalo nacional e internacional que se originó, los poderes públicos no dudaron en acatar la voluntad de la coalición gobernante: además de las amenazas del SIN a los propietarios de dicho diario, el Congreso hizo la finta de investigar la acusación sin obtener resultados concretos; el Jurado Nacional de Elecciones dictaminó que la falsificación no invalidaba la inscripción electoral de la candidatura oficialista y el tribunal encargado del caso no encontró motivos para acusar a los autores; en cambio, de acuerdo a una conocida práctica adoptada por la Fiscalía de la Nación, ésta culpó a los testigos que habían denunciado el fraude por tal delito.

Además de la descarada intervención de las Fuerzas Armadas a favor de Fujimori y de los candidatos al Congreso seleccionados por Montesinos, éste logró copar totalmente los órganos electorales con personal adicto a los intereses del SIN y, en esa medida, del régimen. Pero, por otro lado, el presidente Fujimori encargó a Absalón Vásquez, uno de sus leales y fieles servidores, la organización de un movimiento electoral mediante el uso discrecional de los dineros públicos, y de las dependencias encargadas del asistencialismo estatal, para fomentar la cooptación de dirigentes rurales y de barrios populares con el objeto de asegurarse los votos de dichos sectores.

Estas atribuciones que el Presidente concedió a Vásquez le permitieron a éste designar e incorporar a candidatos al Parlamento en la lista oficialista, por lo que apareció como un nuevo polo en la constelación del poder, y pretendió confirmado así mediante la constitución del partido político del régimen. De

esta manera, la rivalidad entre Montesinos y Vásquez se trasladó a una sorda pugna entre "montesinistas" y "absalonistas", en la que ambos bandos se esmeraban en exaltar su lealtad a Fujimori.

Además de la guerra sucia, Fujimori hizo gala de ser el representante auténtico de los intereses populares, tal como lo mostraba con las continuas "donaciones" que realizaba entre la población pobre gracias al uso discrecional de los recursos y de las instituciones públicas, al tiempo que no perdía ocasión para recordar, en el país y en el extranjero, que bajo su dirección, y con la eficaz asesoría de Montesinos, de las Fuerzas Armadas y del SIN, había derrotado la subversión y reducido el tráfico ilícito de drogas, publicidad que tantos réditos le había otorgado hasta entonces.

Así, al presentarse como el garante del orden y la seguridad públicas, vale decir, de la gobernabilidad del país y, por extensión, de la región sudamericana, Fujimori procuraba concitar el apoyo de actores estratégicos nacionales e internacionales y rearmar la coalición interna y externa que lo había sostenido, al igual que precaverse de los efectos de los ataques que dentro y fuera del país se sucedían cada vez con mayor frecuencia e intensidad contra su gobierno por los sucesivos atropellos que cometía para asegurarse la re-reelección.

Pero no fue posible concretar con facilidad esas intenciones a causa del nudo de contradicciones que había creado el gobierno peruano. En circunstancias en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aprestaba a dictaminar sobre el despojo del canal de televisión y de la nacionalidad de su propietario, Fujimori aprovechó la oportunidad para relevar su propia figura como custodio de la gobernabilidad mediante la decisión de excluir al Perú de la jurisdicción de la Corte, a raíz de que ésta fallara en el sentido que unos ciudadanos chilenos, condenados por "traición a la patria" por haber participado en actos sub-

versivos, debían ser juzgados por el fuero ordinario; sentencia que se sumaba a la demanda del gobierno norteamericano para que una rea de terrorismo de su país quedara sometida también a dicho fuero.

Esta decisión de Fujimori fue duramente criticada en el exterior, pero la mayoría de la población la aprobó como resultado de la defensa cerrada que hizo de las expeditivas sentencias dictadas por los jueces militares "sin rostro", así como porque tergiversó el contenido de la resolución de la Corte al señalar que ésta mandaba liberar a los condenados por terrorismo, y afirmar que la demanda de Washington tenía el mismo propósito. Además de subrayar el carácter nacionalista de la decisión presidencial, los voceros del oficialismo aplaudieron la decisión de Fujimori al acusar a los miembros de la Corte de extremistas y "viejos decrépitos", en tanto que denunciaban a los opositores que criticaban tal medida por favorecer la libertad de los terroristas y auspiciar el renacimiento de los movimientos subversivos, conforme al libreto preparado por el SIN que groseramente la prensa amarilla reproducía.

Fue así como el entorno palaciego aprovechó el dictamen de la Corte Interamericana para curarse en salud, puesto que al dejar de estar sometido a su jurisdicción podía ignorar la probable resolución en favor de la devolución del canal de televisión y de la nacionalidad a su propietario legítimo; pero, además, esta circunstancia dio ocasión al gobierno para multiplicar los vejámenes a los opositores al régimen y para erigir a Fujimori como defensor de la autonomía nacional y protector de la paz y el orden.

Pero, de otro lado, Fujimori criticó, ante los jefes militares reunidos en el Colegio de Defensa de Washington, las negociaciones entabladas por el gobierno colombiano con las guerrillas y, sin tomar en consideración la situación peculiar que enfrenta ese país, propuso que se siguiera el ejemplo dado por el Perú en

la lucha contra los movimientos subversivos y el narcotráfico llevada a cabo por el SIN y las Fuerzas Armadas, procurando así presentar a Montesinos como un valioso producto de exportación no-tradicional.

Sin embargo, la publicidad de esa insólita intervención y en ese tipo de auditorio crispó las relaciones entre Perú y Colombia, en tanto que los principales gobiernos sudamericanos no ocultaron su disgusto con el gobernante peruano por inmiscuirse en asuntos ajenos, lo que se agregaba a los resquemores que producía su manifiesto desdén a los derechos humanos ya la democracia.

Pero como ya para entonces era sabido que el presidente Fujimori no daba puntada sin hilo, se hizo evidente que el propósito de su exhortación a los militares norteamericanos estaba destinado a obtener la renovación de su apoyo, a fin de contrarrestar las crecientes protestas internas y externas surgidas por la descarada manipulación del proceso electoral peruano.

Simultáneamente, los medios de comunicación internacionales intensificaron las críticas al carácter autoritario del régimen político y a la falta de justicia, equidad y transparencia en que se desarrollaba la campaña electoral, lo que auguraba la manipulación de sus resultados. Estos insólitos comentarios fueron recogidos por diversos gobiernos y organizaciones defensoras de los derechos humanos y la democracia, lo que contribuyó a que éstos se articularan con instituciones políticas y de la sociedad civil peruanas que persiguen los mismos objetivos, contribuyendo a su relativo fortalecimiento. Así, la coalición nacional-internacional favorable a la democracia logró desarrollarse y contraponerse a la que seguía sosteniendo a Fujimori.

Las reiteradas muestras de la falta de reparos del entorno palaciego para lograr extender su presencia en el poder propiciaron que dicha coalición planteara la necesidad de restaurar

las instituciones democráticas para la realización de elecciones libres y justas; al tiempo que para contrarrestar las acusaciones del fujimorismo los voceros de esa alianza propusieron a los candidatos suscribir un "acuerdo de gobernabilidad", como efectivamente sucedió. Sintomáticamente, este desenlace motivó que el gobierno reaccionara agresivamente, puesto que ese acuerdo desmentía las acusaciones que aquél lanzaba a los opositores acerca de su incapacidad para ponerse de acuerdo, así como de ser incompetentes para garantizar la gobernabilidad del país, en tanto pretendía competir y despojar al gobierno de la bandera que había servido para recibir el apoyo interno y externo.

Pero estos esfuerzos no lograron superar la dispersión de la oposición, en tanto las intenciones de voto de los contendientes de Fujimori cayeron abruptamente como producto de la guerra sucia emprendida por el gobierno, lo que contribuyó a que se difundiera una sensación de fatalismo con respecto al resultado de los comicios. Pero súbitamente, a los pocos meses de las elecciones, la candidatura de Alejandro Toledo tomó vuelo y congregó una vasta gama social y política de ciudadanos opuestos al fujimorismo.

Una vez más, esta situación dejaba ver que la emergencia de movimientos electorales respondía al vacío dejado por la quiebra de los partidos políticos; pero, asimismo, daba cuenta del cambio de actitud que se había llevado a cabo con respecto al liderazgo político: Toledo, por su origen popular, por su exitosa trayectoria profesional y su ánimo combativo representaba aparentemente las aspiraciones de los sectores sociales postergados, como habría sido el caso de Fujimori en 1990. De allí que en pocos meses lograra convocar a vastos sectores populares.

Como era previsible, los resultados de los comicios otorgaron ventaja a Fujimori sobre Toledo, aun cuando sólo por algunos puntos, lo que motivó que el candidato opositor los desconociera y acusara al Presidente de haber usado ilegalmente los recursos

estatales para amañar el fraude electoral. El apoyo que Toledo recibió del conjunto de los dirigentes de la oposición al régimen confirmó su liderazgo, y las masivas demostraciones que convocó a lo largo del país para repudiar dichos resultados determinaron la transformación del escenario político.

Así las cosas, el Perú atravesó por una experiencia inédita en América del Sur que puso en evidencia las consecuencias contradictorias de la globalización en países cuya fragmentación social y política dificulta el desarrollo autónomo del orden institucional, y faculta la intervención externa para instaurar la democracia.

A las protestas contra la participación ilegal de las Fuerzas Armadas y del SIN en el proceso electoral, a las denuncias por el uso patrimonial de los recursos públicos hecho por Fujimori, a las críticas de los opositores por la imposibilidad de acceder a los canales de televisión y por las infamias de la prensa amarilla contra los antagonistas del Presidente, se sumaron las acusaciones al gobierno por las irregularidades cometidas durante la campaña que hicieron las misiones de observación electoral de la OEA, del Centro Carter y del National Democratic Institute.

Asimismo, la pretensión del gobierno de avalar el fraude de los comicios del 9 de abril produjo enérgicas protestas de dichas instituciones, de gobiernos, de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión, y de los medios de comunicación internacionales. Por tal razón, el domesticado Jurado Nacional de Elecciones se vio obligado a reconocer que Fujimori no había alcanzado en la primera vuelta los votos necesarios para ser llevado a la presidencia, y debió convocar a la segunda vuelta para fines de mayo, al tiempo que sí reconocía como válidos los fraudulentos resultados de las elecciones parlamentarias, en las que los candidatos del oficialismo se acreditaron la mayoría de los escaños.

En estas circunstancias, la misión de la OEA exigió el cambio de las arbitrarias condiciones en que se había desarrollado el proceso electoral como requisito para aceptar los resultados de la segunda vuelta, y a medida que los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de la democracia siguieron presionando a los principales gobiernos para lograr tales modificaciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las dos cámaras legislativas de dicho país amenazaron con la aplicación de severas restricciones al Perú en caso de que su gobierno no las llevara a cabo. Asimismo, la Unión Europea, conjuntamente con las cancillerías y los parlamentos de los gobiernos miembros, al igual que el gobierno del Japón se sumaron a la exigencia de la OEA, y, para sorpresa de muchos, incluso algunos gobiernos latinoamericanos se manifestaron en favor de esa exigencia. Simultáneamente, los principales medios de comunicación internacionales denunciaron en sus primeras planas el carácter autocrático del régimen y la falta de equidad, libertad y transparencia en que se habían realizado los comicios.

En este sorprendente contexto, algunos destacados voceros oficialistas pretendieron erigirse en abanderados del nacionalismo para contrarrestar esa ofensiva que, al decir de uno de ellos, respondía a "una conspiración internacional de poderes neocoloniales para imponer sus valores liberales". ¿Opus Dei dixit?

A pesar de las insólitas presiones internacionales, el temor de Montesinos por las consecuencias que podían acarrear los cambios de las condiciones electorales, llevó al gobierno a desentenderse de las exigencias de la OEA, por lo que la misión de observación electoral de esta organización tomó la decisión sin precedentes de retirarse del país y desconocer la legitimidad de las elecciones, a la que se sumaron otros observadores nacionales e internacionales. Por su parte, Toledo decidió también retirarse de la contienda y solicitar a la ciudadanía de abstenerse o de

anular el voto, tal como sucedió con alrededor del 30% del electorado, por lo que Fujimori resultó vencedor por *walk-over*.

A las continuas manifestaciones que siguieron en contra del fraude electoral se agregaron adversas reacciones internacionales; pero de nada valieron todas esas demostraciones para detener la voluntad de la coalición civil-militar de proclamar el triunfo de Fujimori. Fue así que, en un flagrante acto anticonstitucional, los altos mandos de las Fuerzas Armadas reconocieron públicamente a Fujimori como Presidente y comandante en jefe de las instituciones castrenses aun antes de que lo hiciera el Congreso, dando por sentado que la decisión militar era la definitiva.

La camarilla gobernante contaba con que ante los hechos consumados, las soterradas campañas psico-sociales del SIN contribuirían a que los opositores siguieran dispersos y sus dirigentes se contentarían con incorporarse en el controlado juego parlamentario, hecho que debía acallar las protestas sociales, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores. Dicha camarilla contaba también con que algunos representantes elegidos por los movimientos opositores podían ser chantajeados por el SIN, o con que, en razón de sus débiles lealtades con los organizadores de esos movimientos, estarían dispuestos a vender su posición y plegarse al gobierno.

En efecto, por diferentes medios el gobierno logró cooptar a representantes elegidos en listas de la oposición, lo que le permitió al oficialismo contar con una cómoda mayoría en el Congreso; esto colmó de indignación a la ciudadanía y contribuyó a devaluar el papel de los tráfugas como meros figurantes del gobierno pero, por otro lado, dejaba ver la característica fragmentación y debilidad de la oposición. De allí que el gobierno se esforzara por hacer ver que, mal que bien, la regimentada coalición fujimorista era capaz de mantener la gobernabilidad

del país, en tanto que sus contrarios no sólo no tenían la capacidad para asegurar la estabilidad sino que eran promotores del desorden y la violencia.

Para confirmar este aserto, las manifestaciones de protesta contra el fraude electoral desembocaron en actos de violencia claramente provocados por el SIN y por diversos grupos marginales dispuestos a pasar a "la acción directa" contra el régimen. A pesar de las evidencias en contra, el gobierno y los medios de comunicación controlados por el régimen culparon a los organizadores de la "Marcha de los Cuatro Suyos", concretamente a Alejandro Toledo, por los desmanes y las muertes que produjeron dichas manifestaciones. Tal como esperaba el gobierno, esas acusaciones le restaron respaldo a Toledo y contribuyeron a que vastos sectores se replegaran a la esfera privada por temor a las represalias oficiales y a la creación de situaciones de quebranto de la tranquilidad pública. Por su parte los actores externos, incluso aquéllos que habían dado muestras de simpatía a su candidatura, se mostraron escépticos acerca de la capacidad de Toledo para controlar a sus huéspedes.

La coalición cívico-militar peruana contaba también con que los gobiernos de los países desarrollados, al igual que los de América Latina y en especial sus aparatos militares, los sectores económicos nacionales e internacionales y los organismos multilaterales de crédito aceptarían con agrado o, en su defecto se verían obligados a acatar la consumación del fraude electoral y a reconocer la vigencia del tercer gobierno de Fujimori.

Efectivamente, los representantes de las organizaciones empresariales exhortaron al gobierno y a la oposición a llegar a un acuerdo que eliminara la polarización política a fin de impedir que la situación económica se deteriorara aún más. Sin embargo, sus pasadas simpatías por Fujimori se disiparon a raíz de que, el mismo día que éste inauguraba su tercer periodo de gobierno,

planteó un plan económico francamente heterodoxo de "sustitución de importaciones competitivas" (¿?), lo que venía a confirmar las sospechas que se tenía acerca de sus secretas simpatías populistas, propias de la corriente "absalonista". Entretanto, los inversionistas extranjeros y los organismos multilaterales se mantenían atentos al desenlace de los acontecimientos políticos antes de adoptar alguna decisión.

Por su parte, gobiernos de la región, de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa se apresuraron a reconocer al nuevo régimen a fin de evitar el peligro de que el Perú cayera en situaciones de ingobernabilidad, con la consiguiente expansión y agravamiento de la crisis por la que atraviesa la sub-región andina, concretamente, Ecuador, Colombia y Venezuela, a cambio de la promesa de Fujimori de iniciar cambios democratizadores que, una vez más, no se proponía cumplir.

Con la sola excepción de los presidentes de Bolivia y Ecuador, la ausencia de los restantes jefes de Estado de América Latina en la juramentación del tercer periodo presidencial de Fujimori, así como la falta de altos dignatarios de los Estados Unidos y de Europa, constituyeron una clara demostración de la contrariedad de sus gobiernos con la forma y los resultados del proceso político peruano.

Ello determinó que, no obstante la oposición del gobierno peruano, el crítico informe de la misión de observadores de la OEA motivara la reunión de los cancilleres de los países miembros de esa organización a fin de examinarlo y, si bien no objetaron los fraudulentos resultados electorales, concluyeron en la necesidad de enviar a Lima una misión de alto nivel para promover "el fortalecimiento de la democracia", encabezada por Eduardo Latorre, ex-canciller de la República Dominicana. Este debía cumplir las funciones de "facilitador" de las negociaciones que debían realizarse entre los representantes del gobierno, de la oposición y

de la sociedad civil para resolver 29 problemas contenciosos. Los cancilleres acordaron también reunirse nuevamente para examinar el desarrollo y los resultados de dichas negociaciones.

Al mismo tiempo, por recomendación expresa de sus comisiones de Relaciones Exteriores, las dos Cámaras Legislativas norteamericanas emitieron la resolución N° 93, que fue ratificada por su Ejecutivo, en el sentido de que éste debía "certificar" a su Congreso el hecho de que el gobierno peruano colaboraba efectivamente en la solución de tales cuestiones, como condición para que Washington continúe con su apoyo económico y político para la aprobación de la provisión de créditos de los organismos multilaterales. Por su parte, la Unión Europea manifestaba su interés por el desarrollo del procedimiento señalado por la OEA a fin de evaluar su cooperación con el gobierno peruano.

En suma, la manifiesta incapacidad de la débil y fragmentada oposición para forzar la transición democrática ocasionó que las presiones políticas externas impusieran condiciones al autoritarismo fujimorista para que procesara su transformación y abriera paso a dicha transición, de lo contrario el Perú corría el riesgo de ser aislado de la comunidad internacional y de pasar a ser considerado como un paria más.

El conjunto de esas resoluciones políticas neutralizó la acción de aquellos actores que podían seguir simpatizando con Fujimori tanto en el país como en el extranjero, es decir, inversionistas y agencias de inteligencia, lo cual a su vez determinó el aislamiento político de la camarilla gobernante peruana. Por lo tanto, paradójicamente, la formación y las consecuencias del autoritarismo de la fórmula Fujimori-Montesinos contribuyeron a resquebrajar la coalición nacional-internacional constituida para sostener e impulsar al régimen.

La oposición se vio frustrada ante la resolución de la OEA porque ésta no desconoció los resultados electorales y eludió

aplicar al Perú la resolución 1080, por lo que a regañadientes aceptó la mediación de Eduardo Latorre, a pesar de sus fundadas dudas sobre el interés y la capacidad de la OEA para presionar a favor de la re-democratización del país. La insólita decisión de la OEA desconcertó e irritó también al gobierno porque, a diferencia de lo ocurrido en 1992, constituye una inédita intervención puntual en asuntos internos del Perú, la cual, a su vez, propicia el despliegue de la mencionada serie de presiones y condicionamientos políticos y económicos.

Además, las exigencias de la OEA pusieron en serios aprietos al Ejecutivo, debido a que las 29 cuestiones problemáticas que deben ser negociadas y resueltas entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil comprometen aspectos cruciales de la dominación autoritaria y del funcionamiento de la camarilla mafiosa, tales como la eliminación de la injerencia política y la desactivación del SIN, la reincorporación en sus funciones de los miembros destituidos del Tribunal Constitucional, la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación, la devolución de la nacionalidad y del canal de televisión a su propietario; la reorganización del Poder Electoral; la apertura de los medios televisivos a todas las organizaciones políticas; y así sucesivamente. Es decir, la solución de esas cuestiones atacaba y erradicaba la red mafiosa y el poder de Montesinos; eliminaba las excesivas y arbitrarias atribuciones del Ejecutivo, a la par que restituía las funciones y la independencia del Poder Judicial, creaba las condiciones para que las acciones de gobierno fueran públicas y pudieran ser fiscalizadas. En suma, la resolución de esos problemas daría pie al desarrollo de las instituciones democráticas.

Frente a tales peligros, los representantes del gobierno procedieron a dilatar la constitución de la Mesa de Negociaciones y a poner impedimentos para definir los procedimientos que debía

seguir; a debatir sobre la agenda de discusión y el orden en que debía revisarse los diferentes puntos, y por último, con el cinismo que los caracteriza, culparon a los interlocutores por la falta de resultados concretos de las negociaciones.

Entretanto, el Ejecutivo hacía esfuerzos para recomponer la resquebrajada coalición que hasta poco antes lo había acompañado. Para tal efecto, designó un gabinete ministerial en el que civiles y militares "montesinistas" tenían un papel crucial, entre los que se destacaba Carlos Boloña. Este constituye la pieza clave de la mencionada recomposición política, puesto que por su orientación ortodoxa y su exitoso desempeño en el Ministerio de Economía durante los primeros años del régimen, gozaba de la estima tanto empresarial como la de los medios internacionales.

En su primer acto de gobierno ministerial, Boloña dejó en claro que estaba dispuesto a seguir rigurosamente las reglas de la economía de mercado y se refirió desdeñosamente a las concepciones heterodoxas vertidas en el programa económico presentado por el presidente Fujimori pocos días antes, evidenciando así la marginación de la fracción "absalonista" de la conducción económica.

Por otro lado, Boloña dictó una serie de medidas destinadas a reducir el elevado déficit fiscal, las cuales agudizaron aún más las difíciles condiciones que atraviesan los empresarios, por lo que se granjeó su desconfianza y enemistad, al tiempo que elevaba el presupuesto destinado a Defensa. Es decir, en vez de afianzar las alianzas del fujimorismo, Boloña ha contribuido a resquebrajarlas, al alejar por una parte a los "absalonistas", y por otra al forzar a los hostigados empresarios a tomar mayores distancias del gobierno.

En tal circunstancia, la red política de Montesinos y de los militares constituye el pilar seguro que le resta al gobierno, en

tanto que en el exterior las posiciones de los actores políticos favorables a la democratización del país han ganado fuerza por encima de las que propugnan el mantenimiento del autoritarismo encarnado por Fujimori y Montesinos.

La torcida trayectoria del régimen ha dado lugar a que la mayoría de la opinión pública desconfíe de la voluntad de los gobernantes para llevar a cabo las medidas democratizadoras, por lo que se espera que den largas a la solución de los 29 puntos de la Mesa de Negociación, a la vez que procuran recomponer la coalición fujimorista y mantener la división de los opositores para así maquillar democráticamente al régimen autoritario y acallar las protestas del exterior.

Por su parte, para contrarrestar esta posibilidad la oposición sigue manifestando su déficit tradicional: carecer de organizaciones políticas con convincentes alternativas económicas y políticas que cimenten las bases de la gobernabilidad democrática.

6. Algunas observaciones finales.

Como se dijo al inicio, y como se ha podido ver a lo largo de la esquemática presentación que antecede, durante la década que concluye el Perú ha constituido un claro ejemplo de la contradictoria articulación y participación de agentes y de intereses nacionales e internacionales alrededor de la cuestión de gobernabilidad; por lo que el desenlace que pueda tener la actual situación

responderá, igualmente, al comportamiento que asuman los diferentes actores con respecto a ese problema.

En este sentido, las complejas relaciones que se han ido elaborando entre instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, para reinstaurar el Estado de Derecho en el Perú constituyen una experiencia singular que puede tener importantes consecuencias en el futuro del país y de la región, puesto que ella da muestras del valor que se confiere a la "cláusula democrática" como fundamento del orden interno y de las relaciones internacionales, al tiempo que anticipa el rechazo a eventuales quiebras constitucionales para resolver crisis de gobernabilidad.

Sin embargo, como se señala en el texto que antecede, el resultado final será responsabilidad de lo que hagamos o dejemos de hacer los peruanos. De ahí que corresponda preguntarse si los opositores al régimen autoritario lograrán superar su tradicional déficit, en términos de organización y programas económicos y políticos que propicien la participación ciudadana para enfrentar eficazmente al fujimorismo, con la colaboración de agentes externos que propugnan el restablecimiento y consolidación del Estado de Derecho en el Perú; o si, por el contrario, el resultado final habrá de ser más de lo mismo, o peor.

Setiembre 2000

Post-Scriptum.

Cuando parecía que la política de hechos consumados consentiría a Fujimori gozar de un tercer periodo, durante el cual tendría que enfrentar la crisis económica y política que había originado para que el régimen permaneciera indefinidamente en el poder,

una serie de inesperados eventos produjeron en el curso de dos meses la ruptura de la coalición fujimorista y, en consecuencia, tanto la quiebra del gobierno como la desintegración del régimen autoritario, dando paso a la constitución de un gobierno de transición.

En tanto era evidente que el gobierno dilataba por todos los medios la resolución de los problemas planteados en la Mesa de Negociación auspiciada por la OEA, que había sido motivo de continuas e intensas críticas internas y externas, el Ejecutivo acudió al expediente de la gobernabilidad para reconquistar el favor nacional e internacional. Después de mostrar a Alejandro Toledo y al conjunto de la oposición como fuente de desorden, Fujimori volvió a presentar a su gobierno como guardián del orden y de la paz en el país y en la región, debido a su interés y dedicación personales como la habilidad de Montesinos y la esforzada colaboración de la Fuerza Armada.

Para tal efecto, en compañía de su asesor de inteligencia y rodeado del alto mando militar, en el mes de agosto convocó a una conferencia de prensa para exponer el éxito que su gobierno había tenido en desbaratar el tráfico de armas provenientes de Jordania y destinadas a las guerrillas colombianas, en circunstancias que Washington y Bogotá organizaban el "Plan Colombia". Pero entonces ocurrió lo inesperado, pues el gobierno jordano presentó pruebas de que la venta de las armas se había realizado por conducto oficial con el Perú y puso como testigo de ello a los Estados Unidos, país con el que tiene una relación especial en los asuntos del Medio Oriente. Ello motivó que el presidente colombiano exigiera explicaciones a Fujimori y que los gobiernos de la región, los medios de comunicación y la opinión pública nacionales e internacionales, repudiaran esta nueva manifestación de la inescrupulosidad del mandatario peruano y de los miembros de su gobierno.

La noticia vino a apoyar la sospecha general relativa a que Montesinos y altos oficiales de las Fuerzas Armadas estaban involucrados desde mucho tiempo atrás en este tipo de actos delictivos, así como en el tráfico ilícito de drogas; y, además, esa información sugería que las intenciones reales de dicha operación estaban destinadas a sabotear las negociaciones del gobierno colombiano con las guerrillas y el mencionado Plan Colombia, con propósitos inconfesables.

Fujimori y su entorno palaciego trataron de esquivar las críticas y los negativos comentarios que merecieron esas noticias, interna y externamente, en tanto que día a día sus representantes se esforzaban por postergar la solución de los problemas planteados en la Mesa de Negociación, y la crisis económica al igual que el conflicto entre empresarios y el ministro de economía se agudizaban. Es decir que Fujimori y Montesinos, y su corte de seguidores, se encontraban cada vez más aislados, dentro y fuera del país; pero, como acontece en circunstancias similares con los dirigentes de regímenes cerrados y autocráticos, parecían desconocer esa situación pues habían perdido el sentido de la realidad.

A mediados de setiembre, la oposición lanzó un torpedo en la línea de flotación de la estructura fujimorista transformando las condiciones políticas del país, al divulgar un video del archivo secreto del SIN en el que se veía a Montesinos en dicha dependencia comprar, literalmente, a uno de los parlamentarios tráfugas. De inmediato surgieron las preguntas relativas a ¿quién y cómo se obtuvo esta información secreta?, en momentos en que se rumoreaba que Montesinos a lo largo de diez años había coleccionado y guardado celosamente entre dos y tres mil videos de la misma naturaleza, en los que aparecían involucrados empresarios, políticos, militares, periodistas y hasta el mismo Fujimori.

La respuesta más verosímil que se obtuvo fue que altos mandos de la Marina, contrariados con Montesinos por sus ince-

santes manipulaciones en las Fuerzas Armadas, en conexión con la CIA, habían encargado a uno de sus agentes obtener y difundir esa prueba de corrupción para desplazar a aquél del gobierno. Aparentemente, la participación de la CIA en esa operación se explicaría porque, no obstante que Montesinos había mantenido una relación estrecha con la Agencia a lo largo de muchos años, había traicionado a la comunidad de inteligencia norteamericana con el asunto del tráfico de armas, así como porque su conocida pero tolerada participación en el narcotráfico había sido puesta al descubierto.

Además de la irritación que ello ocasionó en las altas esferas norteamericanas, porque las enérgicas presiones de su Congreso y del Ejecutivo para que el Perú emprendiera la redemocratización estaban siendo bloqueadas por Fujimori-Montesinos, la mencionada traición y la decisión de las agencias de seguridad habrían sido determinantes para sacar a Montesinos del gobierno. Cualquiera sea la verdad, el caso es que las agencias de seguridad norteamericanas dejaron de ser los aliados estratégicos de la coalición fujimorista, tal como lo confirmarían los hechos que se sucedieron.

Para que la coalición fujimorista entrara en descomposición, a dicha desertión se agregó el enfrentamiento de los empresarios con el gobierno, así como el distanciamiento de los inversionistas extranjeros, que luego se agudizó por la fragmentación política de la representación parlamentaria oficialista a raíz del escándalo que produjo la divulgación del mencionado video.

Pero la nota final de este proceso fue que, a los pocos días de la difusión del video, Fujimori declaró sorpresivamente su intención de acortar su período presidencial y dirigir ordenadamente la transición democrática mediante la convocatoria a elecciones generales en abril de 2001, en las que se abstendría de participar para evitar suspicacias.

Esta decisión, probablemente resultado de las presiones norteamericanas, determinó la rápida desintegración del "bloque en el poder" del gobierno y del régimen autoritario, con el consiguiente aislamiento de Montesinos y la transformación del panorama político.

Al "asesor" no le quedó otra salida que la de refugiarse en los cuarteles con sus protegidos y preparar su fuga; para lo cual se difundió la noticia que los generales montesinistas preparaban un golpe militar y que, supuestamente, para evitar tal desenlace el gobierno le había proporcionado facilidades para huir a Panamá, país en el que solicitó asilo político. Sorprendentemente, diferentes Presidentes de los más importantes países latinoamericanos, así como Washington, insistieron ante el Ejecutivo de aquel país para que concediera el asilo solicitado, a fin de impedir el supuesto golpe militar y que la situación política del Perú desembocara en la ingobernabilidad, en tanto cundían las protestas sociales por tan insólita solicitud en favor de un delincuente que huía del país.

Mientras el gobierno panameño dudaba y la opinión pública de ese país rechazaba dicho pedido, Montesinos encontró bloqueadas las cuentas que había depositado en algunos de los conocidos paraísos fiscales del mundo y se declaró amenazado, probablemente, por los narcotraficantes que había traicionado, por la CIA y por la DEA. Así, parecía tomarse realidad el pronóstico formulado tiempo atrás por el norteamericano Elliot Abrams, ex-subsecretario de Estado, en el sentido de que el destino de Montesinos era seguirle los pasos al general Noriega.

Sin embargo, con el concurso de Fujimori, quien confesara sentirse preocupado por la seguridad personal de su asesor, con quien seguía manteniéndose en contacto, éste retornó al Perú y en vez de presentarse ante la justicia buscó refugio en las

dependencias militares, en tanto el presidente Fujimori pretendía hacer creer que lo buscaba afanosa e infructuosamente, ante la burla general que suscitaba el sainete que protagonizaba.

Esta situación bochornosa culminó cuando el embajador de Suiza en el Perú informó que en bancos de su país se había comprobado la existencia de varias cuentas de Montesinos por un total de alrededor de 50 millones de dólares, por lo que la opinión pública no vaciló en suponer que sería también propietario de muchos millones más, conjuntamente con el Presidente. Nuevamente, se especuló que dicha información sólo podía provenir de una solicitud del gobierno norteamericano para atacar a Montesinos y desbaratar la red mafiosa que había tejido a lo largo de los años, y seguía controlando en la clandestinidad, obstaculizando así la transición a la democracia.

Como era previsible, los sucesivos escándalos producidos por la difusión del video, la información sobre las secretas cuentas bancarias y la referente a la participación de Montesinos y altos oficiales en el tráfico de armas y de drogas estallaron en la cara de Fujimori, y aunque los personajes de su entorno afirmaron cínicamente que el Presidente no estaba enterado de los sucios manejos de Montesinos, a pesar de haber contado con su asesoría y confianza personal a lo largo de diez años, la mayoría de la opinión pública consideró que, como no podía ser de otra manera, ambos eran cómplices de los mismos delitos.

Para tratar de salvarse de esta acusación, Fujimori hizo algunos pocos cambios en las filas castrenses y designó a un procurador independiente para investigar a Montesinos, a quien el magistrado no tardó en acusar y convertir en delincuente buscado a escala internacional, en tanto éste pasaba a la clandestinidad.

Al mismo tiempo se hizo patente el desconcierto y la incapacidad del Presidente para seguir gobernando: más que su propio desprestigio en el país y en el extranjero, la persecución a Monte-

sinos determinó el aislamiento de Fujimori y la posterior desintegración del sofisticado sistema de control del Estado y de la sociedad que había organizado y manejado personalmente el que hasta poco antes era su poderoso asesor.

En un corto espacio de tiempo el primer vice-presidente de la República renunció a su cargo, como muestra de su rechazo a la demanda planteada a la Mesa de Negociación de la OEA por los jefes militares para que se amnistiara a los involucrados en violaciones de los derechos humanos y en tráfico de drogas, como condición para aceptar la transición política, petición que fue rechazada por los integrantes de dicha mesa; los tráfugas renunciaron a seguir perteneciendo a la bancada parlamentaria oficialista, al tiempo que este ex disciplinado bloque se fragmentaba entre fujimoristas, propiamente dichos, montesinistas y absalonistas.

Este cambio en la "correlación de fuerzas" contribuyó a que el Congreso iniciara el desmantelamiento del aparato montesinista mediante sucesivos cambios de los puestos claves en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, al igual que en el Jurado Nacional de Elecciones, lo que culminó con la censura de la presidenta del Congreso y su reemplazo por un connotado miembro de la oposición, al tiempo que se restituía en sus funciones a los destituidos miembros del Tribunal Constitucional.

El final de esta historia tragi-cómica fue que, después de varios intentos de salir del territorio nacional aduciendo motivos personales, Fujimori prácticamente fugó del país y anunció en Japón su renuncia a seguir desempeñando la presidencia de la República, la cual no fue aceptada por el Congreso que acordó en cambio destituirlo por "incapacidad moral". Acto seguido, también el sorprendido gabinete ministerial y el segundo vicepresidente presentaron sus respectivas renunciaciones.

Este vacío permitió que, de acuerdo a las normas constitucionales, Valentín Paniagua, que había sido designado presidente del Congreso, asumiera la primera magistratura del país y designara un nuevo cuerpo ministerial con la participación plural de independientes y representantes de la oposición.

En resumen, el último capítulo del fujimorismo se inició con el distanciamiento y enfrentamiento de los que habían sido sus aliados estratégicos durante diez años, y termina con la incorporación de figuras democráticas en el gobierno y el inicio del desmantelamiento de la red mafiosa que dominó el país a lo largo de la "segunda década perdida"; por lo que el gobierno transitorio tiene por delante la difícil tarea de avanzar en la eliminación de los muchos "enclaves" autoritarios, que se mantienen incólumes, a la vez que construir las bases institucionales democráticas.

Si la quiebra del sistema económico, social y político propició el surgimiento y auge del fujimorismo, su caída encuentra al país en situación parecida; queda por ver si la reciente experiencia nos ha vacunado contra situaciones similares y nos ha convencido, finalmente, de que el autoritarismo es incompatible con la gobernabilidad, *tout court*. Tal vez, así podamos remontar democráticamente los múltiples y difíciles problemas que habremos de enfrentar en el futuro cercano. Hacemos votos por ello.

Noviembre 2000

AL DÍA SIGUIENTE: EL FUJIMORISMO COMO PROYECTO INCONCLUSO DE TRANSFORMACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ¹

ROMERO GROMPONE

EL COMIENZO DE UN RÉGIMEN democrático de transición deja la sensación de que el país está saliendo de una pesadilla. Y si bien es justificado dejarse llevar por fáciles optimismos y abrirse a la ilusión y a la esperanza, lo cierto es que se debe transitar por varias líneas a la vez. Ellas no convergen fácilmente: la recuperación de las instituciones democráticas, el desmantelamiento del sistema autoritario, tarea más compleja que la de sustituir personas y realizar reformas políticas en corto plazo, llevar a cabo elecciones transparentes y competitivas asumiendo con realismo la debilidad de nuestros partidos políticos y superar el personalismo de los movimientos independientes, en quienes se cuelga un cierto nivel del propio estilo fujimorista.

Es necesario indagar las razones por las que el fujimorismo logró una extendida vigencia social, como los motivos por los que

1. Una primera versión de este documento ha sido discutida con Julio Cotler, cuyas sugerencias he procurado recoger. Algunas ideas de este artículo fueron discutidas con Rolando Ames, Carlos Franco y Sinesio López.

no llegó a establecer un régimen autoritario consolidado, opinión que sosteníamos ante posiciones diferentes de algunos colegas .

A veces es bueno hacer una interpretación en el momento mismo en que se producen los hechos, aunque el análisis pierda parte de rigurosidad. Se siente que se está intentando dar respuestas a preguntas válidas y apremiantes. Nos proponemos aquí tratar de comprender lo ocurrido, sabiendo que el caso peruano no se presta a fáciles interpretaciones y se hace necesario innovar el análisis.

El tramo final que recorrió el gobierno de Alberto Fujimori y que terminó con su renuncia tomó la forma de un relato de espionaje y de redes de corrupción que van mucho más lejos que las iniciativas y los designios de los actores nacionales. Es una historia apasionante para quien no padece sus consecuencias. Poco tiene que ver con los escenarios conocidos de salida de un gobierno autoritario; los criterios de interpretación política convencionales parecen estar así fuera de lugar. Quienes de una u otra manera se preocuparon por hacer análisis comparados con otras situaciones de América Latina vivieron, por lo menos en los últimos tres años, en el engaño o en el espejismo. Incluso la propia idea de régimen político se encontraba en cuestión en el caso peruano, si por tal entendemos una trama de instituciones y normas jurídicas vigentes y consentidas, a los procedimientos ordinarios y a los usos existentes en la formación y en la ejecución de las decisiones y el control de todas ellas y a la identificación de reglas y pautas de selección e incorporación y circulación del personal político, directivo y sus instituciones.

Esta urdimbre de instituciones y normas permite predecir conductas y comportamientos de los ciudadanos que saben a qué atenerse, tanto en un régimen democrático como en uno autoritario aunque en éste el precio sean las limitaciones e impedimentos en el ejercicio de sus derechos. La aspiración de la

política es la emergencia de una esfera de decisiones públicas claramente delimitadas. En países que aspiran haber llegado a una etapa definida de modernidad, aun cuando se sitúen en la periferia del sistema, y hasta las dictaduras más desembozadas se preocupan por defender una noción de interés general, aunque sea perversa, distorsionada e intolerable para quienes tengan que soportada.

Hasta 1996 y 1997 algunos autores podían sostener con fundamento, una teoría que no comparto: que se trataba de un régimen autoritario con rasgos híbridos en el que al mismo tiempo que se desconocían las instituciones del Estado de Derecho se toleraba la oposición, se realizaban procesos electorales por más irregulares que fueran y se contemplaban algunos componentes de los derechos ciudadanos.

Estamos enfrentados ahora a las consecuencias del furor antiinstitucional del gobierno y la privatización del poder. En los últimos años se desmantelaron el Poder Judicial, se asistió a los puntillazos finales contra cualquier criterio de orden corporativo en las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República no se preocupaba por guardar siquiera las formas ejerciendo atribuciones de control. En la seducción del control por parte del Ejecutivo, el Servicio de Inteligencia y la cúpula de las Fuerzas Armadas, el sistema iba perdiendo condiciones de gobernabilidad ya que el respeto de criterios mínimos de estabilidad requiere poner algún límite a lo que se puede hacer. La discrecionalidad no invadía solamente la esfera pública, se introducía incluso en el ámbito de las relaciones sociales y los conflictos que tienen que ver con el derecho privado donde no existían seguridades jurídicas y yendo al otro extremo se inmiscuía en el escenario internacional pretendiendo imponer criterios contra los poderes dominantes sin darse cuenta de sus reducidos niveles de influencia. Las instituciones políticas, aun las más deleznable

ayudan a que quienes ejercen el poder se ordenen, su falta introduce el desborde y la desmesura.

Como veremos en este trabajo, una creciente oposición ciudadana, el liderazgo probablemente circunstancial, pero no por ello menos valioso, de Toledo en una coyuntura crítica y, sobre todo, una corrupción que no se conformaba con actos ilícitos nacionales e internacionales para beneficio de un reducido grupo sino que entraba de lleno en un complejo juego geopolítico, alterando las propuestas de Washington, no dejaron en definitiva otra alternativa a Fujimori que el adelanto de elecciones y finalmente su renuncia.

El gobierno fujimorista, por lo menos explícitamente desde el golpe de estado de abril de 1992, y en sus propósitos iniciales, ha procurado establecer un régimen autoritario basado en el control social, restricciones a la movilización y pluralismo limitado. Para cumplir con estos propósitos, se sustenta en una camarilla que establece nexos con una reducida coalición social, sacando partido de la falta de alternativas políticas y de iniciativas de la sociedad civil. Si bien puede identificarse etapas que van de una demacracia vigente en 1990 al autoritarismo reconocido por la mayoría de los intérpretes en los últimos tres años, ha sido imperturbable el pensamiento y los designios del grupo que controla el poder. Lo que ha ocurrido es una afirmación de las intenciones primeras ayudada por un conjunto de condiciones favorables que comienza desde principios de la década como el desenlace de la guerra interna y la hiperinflación y la debilidad de la clase política desplazada.

En este trabajo se analiza en primer lugar las razones por las que este régimen autoritario se implanta, entre ellas, además de la ya mencionada debilidad de la oposición política y social, la precariedad del aparato del Estado que abre espacios para la innovación por parte de quienes ocupan el Ejecutivo para recreado en lo organizativo.

Se crean nuevas identidades que vinculan la labor del gobierno con el reconocimiento de la población y el control social. Posteriormente se da cuenta de cómo se van construyendo los aliados de la camarilla, la cúpula de las Fuerzas Armadas, sectores del empresariado y en sus primeras etapas el consentimiento de los organismos internacionales de crédito. Se explicará con algún detenimiento el funcionamiento de este autoritarismo, en tanto régimen, ubicándose en un nivel analítico y sin detenerse en la historia del conjunto del proceso.

La política de ajuste estructural es considerada tomando en cuenta que en el caso peruano no se ha acompañado por un proceso de desarrollo institucional en medio de condiciones económicas extremas como en otros países de la región sino que se ha utilizado como instrumento de control social. Se asumió en el primer período la ortodoxia neoliberal no sólo por razones económicas sino porque además permitía afirmar la preeminencia del Ejecutivo, recurriendo a medidas inconsultas y tratando de hacer irrelevante o irrealista cualquier forma de oposición partidaria o gremial. No ha supuesto, por otro lado, cambios institucionales orientados a la reforma de las instituciones jurídicas y la rendición de cuentas, como recomiendan, por lo menos formalmente, los organismos internacionales preconizando las llamadas reformas de segunda generación. El gobierno no sólo no estuvo interesado en realizadas. Simplemente no se encontraba en condiciones de cumplidas sin perder algunos instrumentos sustantivos para el ejercicio de su dominio político y social. La ausencia de un proyecto de país en las élites empresariales favoreció el logro de este objetivo.

El gobierno de Fujimori ha buscado el apoyo de los sectores de menores ingresos urbanos y rurales. Esta política ha pasado del consenso pasivo a relaciones de clientelismo y en el último período al intento de crear una maquinaria política de apoyo al

gobernante. Más allá de esta descripción somera se trata de un vínculo complejo en el que combinan relaciones de subordinación con aceptación de hechos consumados y búsqueda de logros personales, por lo que utilizar una explicación unidimensional distorsiona el análisis de este proceso. En este estudio se reconoce la importancia en las tareas de intermediación de un grupo de operadores políticos que realizan cada vez más sistemáticamente las tareas de vincular gobierno con sociedad.

Uno de los logros del autoritarismo ha sido que la oposición se haya manifestado hasta ahora en instancias carentes de organicidad y en las que no existen criterios y estructuras de vinculación que permitan afirmar las lealtades, haciendo volátiles tanto las adhesiones del electorado como las propias opciones de las personas elegidas en cargos de responsabilidad política. La llegada de Valentín Paniagua a la presidencia de la República no garantiza a este respecto una situación de cambio pero abre, sin duda, situaciones más auspiciosas.

El estudio analiza las razones y orientaciones que explican esta fragilidad. A nuestro criterio, este régimen autoritario tenía una condición de extrema precariedad por su falta de instituciones estables y sus redes de corrupción que producían desbalances cada vez más difíciles de sobrellevar. Interpretamos las complejas condiciones internacionales que precipitan su caída. Las condiciones de negociación en la OEA, por ser los aspectos más conocidos y encontrarse en pleno proceso, serán objeto de un análisis posterior.

Interesa más pensar en esta coyuntura en las perspectivas de transformación del régimen político, las posibilidades abiertas para la renovación de la sociedad civil y la vigencia de los partidos políticos, así como las condiciones de desmantelamiento del autoritarismo. La preocupación final serán las vías para renovar la vida democrática que requiere tanto de voluntad polí-

tica como claridad en la identificación de potencialidades y obstáculos.

1. Las condiciones favorables para la afirmación del régimen

Este gobierno, que llevaba más de diez años antes de su precipitado colapso, surgió en un contexto económico donde no se percibían salidas razonables a corto plazo y el país estaba afectado por una guerra interna que no tenía cómo llegar a su fin. Aunque vistos en perspectiva suenan ahora como pronósticos desatinados, buena parte de la población tenía previsiones sombrías sobre el desenlace del enfrentamiento con los grupos terroristas. El clima cultural impregnaba los razonamientos de pesimismo y fatalidad. Recordemos que en el año que precedió a las elecciones de 1990 se registró una hiperinflación de 2.773%, un crecimiento negativo de -11,0 %, el mayor número de muertos en la guerra interna (3,148 personas) y el número de desaparecidos llegó a 1,528. Los salarios privados descendieron al 36,5%, los sueldos privados al 27,3%, y los sueldos públicos al 27,4%.²

La exigencia de una nueva política presionada por las circunstancias no siempre lleva a las soluciones más lúcidas. Precipita con frecuencia una cultura de confrontación sin parámetros y proclive al autoritarismo. La idea en apariencia asistida por buenas razones de una drástica transformación y recambio de las élites políticas desgastadas y derrotadas, sacrifica en el mismo movimiento la idea del pluralismo de los intereses y hace que se imponga un ambiente en el que predomina la desconfianza y a veces

2. Lynch, Nicolás. *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980 - 1992*. Lima: Fondo Editorial Universidad Mayor de San Marcos, 1999.

situaciones sin salida. La competencia política tiene inscrita entonces la diferencia entre amigo y enemigo. Un enemigo que no se limita a los integrantes de los grupos alzados en armas sino que se extiende a quienes no comparten los mismos pareceres del gobierno, creando un ambiente corrosivo para los vínculos personales saturados de sospechas por una atmósfera de extrema polarización atenazada por el miedo.

El autogolpe de 1992 seguido por la captura de Abimael Guzmán inicia un período de transformaciones en que se violentó el Estado de Derecho con una amplia aceptación por parte de la sociedad. Las formalidades democráticas perdían importancia ante sentimientos desbordados tanto por el temor como por la desesperanza. Ganaba espacio la idea de tomar decisiones rápidas, eficaces, sin consulta y transformadoras que desconocían el marco representativo y donde las instituciones reguladoras del Estado de Derecho para el gobierno y buena parte de la población, se las consideraba como trabas que dadas las urgencias con las que se vivía era conveniente pasar por alto. Lo que había que hacer era dinamitar el Congreso para usar una imagen que literalmente expresa lo que la gente esperaba, dicho en el desolado lenguaje de este período. La pacificación social no fue un momento de respiro que favoreciera un acuerdo de amplio espectro en el país. La idea de una reconciliación nacional, sentimiento de algunas élites intelectuales y de parte de la sociedad, no llegaba a entender que la implacable lógica de vencedores y vencidos no la utilizaba el gobierno en lo relativo a la subversión sino que la extendía al conjunto de sus opositores políticos. Constituía la oportunidad buscada por Fujimori con posterioridad al golpe para desacreditar la idea de los consensos como si ellos fueran contrapuestos a la eficacia. En el gobierno quedó vigente un clima de crispación política y de beligerancia. Ocho años después encontramos, como veremos, un régimen autoritario que

no pudo terminar de consolidarse sin coaliciones estables y una incipiente oposición social y política.

Si se miran los acontecimientos con algún grado de distanciamiento es razonable pensar que el gobierno disponía de condiciones favorables para establecer este régimen autoritario de control sostenido en un amplio apoyo de la opinión pública. Contaba para ello con un conjunto de aliados estratégicos que si parecen restringidos en la presente coyuntura no lo eran cuando el proyecto comienza a delinearse. Tenía las puertas abiertas en primer lugar en el frente militar. No existen experiencias en América Latina en donde las Fuerzas Armadas inmersas en una guerra civil, y obtenido luego un triunfo militar, no hayan procurado aumentar sus prerrogativas en términos de decisiones políticas. La particularidad del Perú en todo caso es que la presión castrense es coherente con las intenciones del poder civil que entonces estaba en condiciones de realizar políticas de cooptación en actores claves de la oficialidad. En las políticas económicas no había mucho que elegir. La mayoría de las élites tecnocráticas con audiencia, pensando incluso en sociedades que no vivieron circunstancias tan graves como las del Perú, enlazaban medidas de ajuste con lineamientos de política, tomando sin márgenes de discusión las primeras como inevitables.

La recurrente imagen del *outsider* que irrumpe por fuera del sistema, explicación de los politólogos para dar cuenta de los nuevos liderazgos personalizados, tiene a su favor, en el caso de Fujimori, que aparentemente no le debía nada a nadie ni tampoco, tiempo después, tenía con quién competir. No se apoyó en sus inicios en grupos económicos ni en la intervención mediática como Collor, opuesto a fuerzas políticas relativamente poderosas que lo sometían a prueba. No sucedió como en Bolivia que estos *outsiders* tuvieran una vigencia importante pero limitada a lo regional, y los movimientos de Palenque y Max Fernández,

aún antes de la muerte de sus líderes, ya fueron absorbidos por el sistema de partidos existente. No es Fujimori tampoco el *outsider*, personaje menor dentro de la organización mayoritaria como el Partido Justicialista y el liderazgo de Menem en Argentina, que le fija los grandes lineamientos a seguir a Ortega y Reuteman. Fujimori no tenía lista de agradecimientos, personas a quien complimentar ni enemigos de consideración en frente. Y accedía al poder desde una situación de indeterminación que le dejaba libre las iniciativas con la seguridad de que cualquiera de ellas, por lo menos en el corto plazo, iba a tener un tono distinto al de los gobiernos democráticos anteriores.

Es un momento de nuevos alineamientos porque todos los actores sociales y políticos se estaban redefiniendo, explorando a tientas pero intuyendo que en una situación extrema las prácticas políticas tradicionales dejaban de tener vigencia y hasta el discurso bien articulado perdía parte de su atracción. Quizás la explicación de Mayorga respecto a ciertas características de la sociedad boliviana ayude a la comprensión de lo que estaban enfrentando en el período otros países andinos. El autor se refiere a una sociedad dominada por un sistema pobre e incapaz de establecer mediaciones sociales y a un Estado suspendido sin un centro hegemónico.³ Falta una oposición política y social razonablemente organizada y las coaliciones tienden a ser inestables por ser cada movimiento autorreferencial, encerrado en sus propios intereses y poco dispuesto a la apertura. Por lo que los vínculos ya no siguen reglas ordenadoras atadas a una tradición histórica sino que todo está por fundarse o pareciera que

3. La referencia a René Mayorga es tomada de Alain Touraine. *La parole et le sango Politique et société en Amérique Latine*. París: Editions Odile Jacob, 1988.

así lo fuera, que se improvisa siguiendo la corriente y que esa corriente vale en la medida de lo cercano que se puede estar con quienes ejercen el poder, en lo nacional y en el contexto internacional. Es un momento político que parece más propicio para un autoritarismo fuertemente personalizado que para la afirmación de un régimen institucional democrático.

La ausencia de agrupamientos de clases más o menos estables, a diferencia de lo que ocurría como clave para entender América Latina en la década de los años sesenta y setenta hace que la historia política en el Perú y en otros países de la región se explique y simplifique a la vez en estos tiempos, recurriendo a la biografía de las personas, como si se necesitara de una indagación extrapolítica para saber quién es quién y comprender así el sentido de sus decisiones. En estas nuevas élites los conocimientos no van por el acopio de información de una trayectoria que se explica siguiendo a las personas en instituciones sino que el relato es contado en una inevitable clave personal. Así, no se trata del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en una determinada etapa sino de Vladimiro Montesinos; no se indaga sobre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como institución sino sobre las más veleidosas opciones de Hermoza mientras permanece en el cargo y luego las iniciativas y aparentes irregularidades en la gestión de su sucesor Villanueva Ruesta; no es un Presidente conduciendo el país sino el secreto designio de Fujimori que quiere desengancharse del marco jurídico establecido para su mandato. Este estilo de presentación es, como veremos, más apropiado para una camarilla que para el personal político de un régimen estable. Personalizar al extremo es someter a los involucrados a la exposición abierta e indeseada y vuelve al grupo más peligroso ya que así —exhibidos antecedentes e intenciones— no puede retroceder, simplemente porque no se imaginan ni saben hacerlo.

2. La debilidad del Estado

Una situación de estas características ocurre en parte por las dificultades de pensar en la unidad del poder del Estado como organización independiente y de actuación de la cooperación en una sociedad definida territorialmente y que superordena la economía, en la clásica formulación jurídica de Hermann Heller.⁴ Es cierto que en sociedades desarrolladas no se puede tener esta concepción monolítica por la misma complejidad del sistema administrativo cuyas instancias se separan y adquieren dinámicas, autónomas y complejas, más allá de lo que puede controlarse desde el poder. Esta situación exige para conocerla elaborados análisis institucionales en los que se toman en cuenta niveles de autonomía y cooperaciones normadas e informales en redes que se han establecido durante años. En el Perú no se ha llegado a una mínima aproximación a este nivel. Skocpol toma como referencia a Weber, quien entiende que el Estado para reivindicar el control de los territorios necesita enraizar organizaciones jurídicas, administrativas, recaudatorias y coercitivas que van más allá de los gobiernos y que no sólo estructuran las relaciones entre sociedad civil y autoridad pública sino también muchas relaciones cruciales dentro de la misma sociedad civil.⁵

Un Estado que haya afirmado su vigencia requiere una efectiva y amplia extensión del ámbito regulado por la ley, lo que supone procedimientos establecidos entre instituciones y

4. La referencia al pensamiento de este autor ha sido tomada de Claus *Offe Modernity and the State. East, West*. Massachusetts: MIT Press, 1996.

5. Skocpol, Theda. «El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual». En: *Política, teoría y métodos*, Edelberto Torres (comp.), Editorial Universidad Centroamericana Educa Flacso, Costa Rica.

personas con un amplio reconocimiento por la autoridad y los ciudadanos. Exige un aprendizaje que establezca relaciones cognoscibles entre criterios de comportamiento y consecuencia de los actos, apoyados en una juridicidad estable y relativamente conocida para el ciudadano. En este contexto el sistema legal satisface su pretensión de lograr comportamientos previsibles diferentes al de las relaciones que se van improvisando y cambiando desde el gobierno, en las que coexisten controles arbitrarios con conductas aleatorias, porque no se identifican las pautas a seguir tal como ocurre en nuestros países.

En el Perú se ha vivido en sociedad de extendidas diferencias que restringen el marco de la aplicación universal de la ley y zonas donde los ciudadanos sienten que existe un vacío legal o que esta misma ley, finalmente, no importa. Los esfuerzos de reforma de las últimas décadas, tanto por parte del gobierno militar de Juan Velasco como de los gobiernos democráticos, no han conseguido alterar esta situación. La persistente crisis económica, la generalización de la violencia política y social y la rápida deslegitimación de los sucesivos gobiernos no han hecho sino agudizar esta sensación de fragilidad del sistema. El régimen establecido por Fujimori saca partido de esta situación de debilidad del Estado que es también de falta de incidencia de la condición de las personas como ciudadanos.

Los regímenes autoritarios y los democráticos consolidados requieren de una maquinaria burocrática estable responsable de las decisiones técnicas que establecen rutinas en la labor del Estado. Es lo contrario de la idea del Estado politizado del que habla Chalmers para el caso de América Latina, en donde los actores políticos y sociales antes que polemizar sobre un modelo de sociedad se enfrentan por conquistar el aparato estatal para maximizar intereses de corto plazo y disponer arbitrariamente de recursos orientados a sectores particularizados de la

sociedad.⁶ En muchos de los países más desarrollados estos funcionarios son reclutados en universidades de élite. En sectores como relaciones exteriores, hacienda, salud y educación sería posible seguir una trayectoria de políticas, iniciativas y personas que permanecieran relativamente estables en sus líneas fundamentales al margen de la orientación de cada gobierno. Los cambios no deben suponer una ruptura radical con formas precedentes de gestión y de rutinas administrativas. En el Perú ingresamos en cambio en el terreno de las preguntas absurdas y pertinentes. ¿Existen funcionarios de carrera con cargos de responsabilidad? La respuesta no sale a boca de jarro. Acaso puede ubicarse allí al viceministro de Hacienda Alfredo Jalillie con una larga trayectoria en el Ministerio de Economía y custodio exclusivo de saberes profesionales de un documento tan sofisticado y tan abierto a arbitrariedades controladas como el manejo del presupuesto. Quizás podamos agregar dos o tres nombres más de estos burócratas de linaje.

Esta debilidad del Estado como estructura burocrática coexiste con la idea de que éste, según indica Cotler, es el que haya tenido probablemente mayor penetración social en la historia del Perú en estos últimos años, extendiendo la realización de obras de infraestructura, apoyo alimentario y de expansión de una estructura de comunicaciones en zonas que a lo largo de la historia no fueron atendidas por los sucesivos gobiernos. En su gestión puede innovar sin estar atado a usos previos que tanto lo limitarían en sus iniciativas como le impedirían los desbordes de autoridad. Esta tarea la cumple desde una red de instituciones creadas por

6. Douglas Chalmers. «Parties and Society in Latin America» en Steffen Schmidt, James C. Scott, Carl Landé y Laura Giusti (eds.): *Friends, followers and factions. A reader in political clientelism*. Berkeley: University of California Press, 1977.

la actual administración, dependientes del Ministerio de la Presidencia, también surgido del actual gobierno. En esta situación, se pone en contacto a grupos hasta entonces excluidos con las autoridades pero sin que se afirmen vínculos institucionalizados. La ayuda prestada surge entonces más como consecuencia de la voluntad discrecional del gobernante que por el reconocimiento de un derecho. No se puede separar Estado de gobierno y no existe entonces un concepto de obligaciones que deben prestarse a la población que se separen de la iniciativa presidencial. A la debilidad del Estado se agrega la sensación de precariedad de los actores sociales. La crisis económica de fines de los años ochenta debilitó al movimiento obrero, al barrial, al campesino y al estudiantil aun antes de que llegara un gobierno con orientaciones represivas como el saliente. Hubo una encarnizada guerra militar pero no un sostenido conflicto con el movimiento social. Fujimori no necesitó entonces asumir en su integridad los aspectos más característicos de lo que O'Donnell identifica como los estados burocrático, autoritarios de la región en la década de 1970.⁷ En efecto, no requería imponer una dominación que subordinara intereses a una coalición dominante. La debilidad de los actores sociales que se opusieran al proyecto, su desmantelamiento en la práctica daba campo libre al autoritarismo sin un principio de resistencia que se le enfrentara. Es más, se apoyaba en un extendido consentimiento social. Tampoco necesitaba suprimir reivindicaciones nacionales que, como señala O'Donnell, apelaran a nociones más o menos definidas de justicia sustantiva. El descrédito del gobierno de Alan García le había quitado

7. Guillermo O'Donnell. "Tensiones en el estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia". En: O'Donnell, Guillermo. *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Argentina: Paidós, 1997.

relevancia a cualquier reivindicación que se orientara hacia este tipo de reclamo. El Estado podía sustentarse en la reivindicación de su autoridad en tanto presentaba su doble rostro de organizador de la dominación y supuesto legitimador del interés del conjunto de la sociedad.

Fujimori pudo exonerarse de darle en sus primeros años una definición enfáticamente restringida y represiva a su política por la falta de patrones sociales de clases y organizaciones político partidarias a los cuales enfrentarse. La sociedad se volvía crecientemente difícil de representar y en este sentido un autor tan perceptivo como Sinesio López, cuando en su reflexión sobre ciudadanía y política ubica a los informales a fines de los años ochenta desbordando antiguos alineamientos sociales e investidos de pretensiones hegemónicas, parece estar sobreestimando la capacidad de estos actores de definir una propuesta más o menos articulada.⁸ Al margen del alcance que se le ha dado a ese empresario emergente, como expresión de un cambio decisivo, lo cierto es que no estaban disputando una hegemonía en el sentido político del término. Sus prácticas y proyectos iban por otra dirección, lo que no le quita o agrega méritos.

La exclusión popular propia de un Estado autoritario podía hacerse sin mayores costos. Y en el plano político, como se sabe y no vale la pena insistir, los partidos habían perdido convocatoria y capacidad de iniciativa. No existía un marco estable de relaciones entre fuerzas políticas propias de un sistema de partidos en el que las probables alternancias se imponen a los juegos suma cero de todo o nada entre las organizaciones. El politólogo que a principios de los años noventa fuera consultado acerca de esta situación, ilustraría meticulosamente las razones que explican

8. Sinesio López. *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS, 1997.

el fin de los partidos, pero sólo diría vaguedades sobre los caminos para su reconstrucción. Podría criticar la falta de visión de los dirigentes de estas organizaciones, mas le costaría establecer las vías que ellos deberían seguir para lograr una convocatoria que le diera a las organizaciones una relativa vigencia. Ciertamente, esa no es su tarea, pero indicaba un problema de creación de estructuras de mediación y de participación que afectaba al conjunto de la sociedad, actores e intérpretes.

Puestos en un imaginario punto de largada y partiendo desde cero, en aquel período Fujimori tenía mayores probabilidades de conquistar voluntades desde el gobierno que los opositores desde el campo social, aun antes de que el primero desplegara masivamente sus políticas sociales y recurriera abiertamente a la manipulación o cooptación. Fujimori podía desde el vacío político actuar sin coaliciones, confiar en su reducido grupo de poder y resistirse a la alianza y a la negociación.

3. La construcción del autoritarismo

Tanto los regímenes autoritarios como los democráticos necesitan para consolidarse la creación de una sociedad económica —en el sentido que señalan Stepan y Linz—, de un conjunto de normas, instituciones, regulaciones y políticas que organizan la economía.⁹ Esta exigencia se mantiene aún en el marco de una orientación neoliberal, ya que ella precisa de un Estado que garantice una economía de mercado con estándares jurídicos regularizados, la superación de imperfecciones y rigideces y el

9. Juan J. Linz y Alfred Stepan. *Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Londres: Hopkins University Press, 1996.

otorgamiento de seguridades para la producción de bienes y políticas en relación a la educación, la seguridad y la salud.

El discurso antipolítico y autoritario podía ser en el contexto de los primeros años de la década del noventa una estrategia para fortalecer alianzas cortando amarras con un pasado reciente en el que se tomaba cuentas por el presunto fracaso de la democracia en un país donde no había tenido tiempo de afirmarse como experiencia histórica. Fujimori podía ser visto como improvisado pero estaba libre de ataduras respecto a algún grupo social específico.

La afirmación que hace Paramio para contextos de ajuste con sistema de partidos toma una significación quizás más radical cuando el escenario es copado por un liderazgo personalizado. Señala que si los gobernantes reformadores se enfrentan a una realidad social magmática de grupos más o menos desestructurados por la crisis, se encuentran en las mejores condiciones para hacer o deshacer coaliciones.¹⁰ Lo que explica el hiperpresidencialismo, añade, no es el carácter dramático de las reformas económicas sino más bien la extrema descomposición creada por la crisis económica inflacionaria anterior.

En este caso, la combinación de la creación de una sociedad económica, el presidencialismo y el autoritarismo orientaban la estrategia con la que Fujimori buscaba la alianza con los poderes fácticos. El gobernante podía encontrar referentes en la sociedad para rechazar el ejercicio de un presidencialismo pluralista que atendiera al juego de la competencia ya relaciones de colaboración con los actores parlamentarios, una vez advertida la decadencia de los partidos. Se trataba de élites sin representación social o en una afirmación más radical aún, esa misma condición

10. Ludolfio Paramio. "Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina". En: *Zona Abierta* N°88/89, Madrid, 1999.

de élites estaba cuestionada. Resultaban momentos propicios, en cambio, para un presidencialismo mayoritario de iniciativas plebiscitarias, facultades amplias que se convertían en discrecionales, como en el conjunto de decretos de urgencia de 1992 que actuando dentro de los límites de la legalidad apuntaba a crear desde el interior del propio régimen político situaciones de ingobernabilidad que justificaban una interrupción del orden constitucional.¹¹ El gobierno podía invocar razones de Estado para terminar con el ya precario andamiaje institucional y dar el autogolpe. Y precipitar la toma de casilleros en las Fuerzas Armadas y dentro de los empresarios.

La toma de casilleros no requería la constitución de un bloque de poder en el que se comprometiera a las Fuerzas Armadas como institución articulada en un proyecto común como en el Estado burocrático autoritario sino llegar a un acuerdo con las cúpulas. Planteada de esta manera la situación, podían atarse varios cabos al mismo tiempo para controlar la situación. El primero era obtener un compromiso con los mandos para emprender en lo inmediato una estrategia autoritaria y al mismo tiempo involucrarse en conjunto en un proyecto de largo plazo. La segunda atadura era garantizar la estabilidad convirtiendo a esos mismos mandos en una cúpula que se debía lealtades recíprocas y favores al gobernante, con lo que el presidente y los oficiales estaban condenados a seguir juntos ya que perdían ambas partes si se respetaban los criterios institucionales. La tercera movida era más audaz ya que ubicaba un intermediario que tenía además facultades decisorias entre el bloque civil y militar que fuera

11. La distinción entre presidencialismo mayoritario y presidencialismo pluralista, aunque pensada para un contexto diferente, ha sido tomada de Jorge Lanzaro. "Uruguay: las alternativas de un presidencialismo pluralista". En: *Revista mexicana de sociología*. N° 2, abril-junio: 1998.

confiable para el Presidente y que identificara movimientos y opiniones contrarias al estado de cosas que se imponía. Montesinos era el operador del pacto no únicamente por la capacidad y audacia que hay que reconocerle sino porque se necesitaba una persona que procediera minuciosamente al desmantelamiento de las Fuerzas Armadas planificando ascensos y postergaciones. Se hacía indispensable emprender una tarea de ingeniería política que promoviera cambios en la corporación castrense de acuerdo a las intenciones del gobierno. Montesinos tenía para el caso la virtud de estar por fuera del sistema para actuar con libertad y al mismo tiempo conocerlo en sus mínimos detalles. Distante para no moverse con fidelidades institucionales, cercano como para permitirse sondear intenciones y hacer razonadamente los juegos de la cooptación y el desplazamiento. Asume entonces una tarea de arbitraje aunque sus decisiones no se basaran en criterios generales y despersonalizados. Forma parte entonces del mismo operativo la preocupación por definir proyectos de largo plazo de la sociedad combinando represión, protagonismo militar y economía de mercado, recogiendo lo que era el balance de la experiencia chilena antes del retorno a la democracia; la prerrogativa presidencial que era también de los mandos, de prolongar el retiro de los jefes más allá de los 35 años de permanencia en la institución y un régimen de ascensos que recortaba las ventajas a aquellos que habían estado en el 5% de calificación superior en su promoción y, finalmente, el fortalecimiento del SIN cuya autoridad real era Montesinos.

4. El control de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas en América Latina han demandado su intervención activa en la vida política en un escenario de lucha contra

los movimientos subversivos y prolongan su permanencia en el poder una vez obtenido el triunfo militar.

La habilidad de Fujimori fue la de establecer prestamente una alianza con ella convirtiendo la carencia de una organización política propia en una virtud porque la corporación castrense le otorgaba la estructura que le faltaba, sin crearse situaciones de competencia entre cuadros políticos y oficiales. La mencionada alianza permitía salvaguardar, en teoría, las formalidades democráticas ya que en el imaginario del sistema presidencialista en la mayoría de los países de América Latina la legalidad se sustenta en el hecho de que el titular del Ejecutivo haya llegado a su cargo por elecciones. El Presidente podía darle paso a un espacio de intervención militar en un período histórico en que los golpes de Estado estaban desacreditados, reclamar por ello reconocimiento y libertades y permitirse un grado de intromisión aceptada en el nombramiento de los mandos.

En esta situación de extrema flexibilidad Fujimori podía recurrir a un operador político concededor de la institución como Montesinos, para que le ayudara a organizar su estrategia. El hecho de que el asesor viniera por fuera del sistema le garantizaba una obligada lealtad, no contaban sus opiniones en el inicio del proceso sin el asentimiento explícito del Presidente. La continuidad de esta línea de acción llevaba a privilegiar en los lazos que se establecían con los oficiales las relaciones de cooptación, un vínculo directo por el cual quien ocupaba un cargo estaba sujeto al albedrío del Presidente. Un nuevo engranaje que se fue ajustando progresivamente hasta dirigir el conjunto del movimiento en los años finales del régimen fue sustituyendo a las rutinas de funcionamiento de la corporación.

Fernando Rospigliosi sostiene que Fujimori se apropia de un Plan de Golpe que ya estaba previsto desde 1988 y 1989 con

el propósito de derrocar a García.¹² El proyecto suponía la permanencia en el poder de los militares en el largo plazo siguiendo una política neoliberal en lo económico recogida de la experiencia chilena. Es cierto que en determinados momentos de extrema incertidumbre en la década del ochenta, particularmente con el shock económico del que se responsabiliza al ministro aprista Abel Salinas, se temió por la continuidad del gobierno de Alan García. Aun reconociendo este hecho no puede menos que advertirse que la elaboración de esquemas ambiciosos de alternativas de desarrollo, manejando distintas hipótesis de conflicto, forma parte de las prácticas habituales de las Fuerzas Armadas, ya que se supone que ellas deben estar en capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes.

En lo que inequívocamente existía una disposición compartida entre los militares y el Presidente era en la interpretación que los estados de emergencia no constituyen una situación prevista en el Estado de Derecho sino que lleva a transitar por una vía alternativa la dispuesta constitucionalmente. Los decretos legislativos de 1991 que procuraron orientar la estrategia antisubversiva precipitaron el autogolpe; en buena parte se había previsto el rechazo del Congreso como pretexto válido para disolverlo.

De modo inevitable esta situación plantea una línea divisoria entre leales al régimen que se instaura y oficiales institucionalistas. El Presidente, asesorado por Montesinos, en una línea de ofensiva pasa a retiro a generales que le parecían poco confiables, privilegiando a otros que por su llegada inesperada a una posición de influencia iban a seguir las orientaciones y órdenes impartidas por el Presidente y su asesor.

12. Fernando Rospigliosi. *Las fuerzas armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista*. Lima: IEP, 1996.

En esta línea, como anota Obando, resulta de una importancia decisiva la Ley de Situación Militar de noviembre de 1991 que establecía que los comandantes generales serían designados por el Presidente entre los generales de mayor rango y ya no debía elegir necesariamente, como en la disposición anterior, al más antiguo.¹³ Además, el Presidente decidía cuándo pasaban al retiro los candidatos, sin tomar en cuenta los años de permanencia en la institución. El general elegido, Nicolás Hermoza, tiene una condición ambigua, le debe obediencia estricta a Fujimori y dispone de niveles de discrecionalidad con sus subordinadas más amplios que los que se pueden sostener desde una línea regular de mando. Esta lógica de funcionamiento trae como consecuencia probables deserciones de quienes se sienten postergados y exige entonces niveles detallados de información acerca de lo que está ocurriendo en los cuarteles. La consecuencia es que el SIN extiende sus competencias y penetra en el interior mismo de la corporación castrense. Cada militar se siente juzgado por lo que dice y por lo que hace pero no está seguro de lo que debe decir y hacer. Irónicamente las Fuerzas Armadas siguen a su modo el precepto constitucional de no ser deliberantes debido a que no había interlocutores de confianza en la institución.

El sistema enclaustraba a los militares y de este encierro se absorbían las disidencias como las que en su oportunidad expresaron Salinas Sedó, Arciniegas y Robles. Un régimen sustentado casi exclusivamente en mecanismos de control lleva a una decadencia en el quehacer de las Fuerzas Armadas y le otorga oportunidades esperadas a oficiales mediocres. El ejército en particular

13. Enrique Obando. «Las relaciones civiles-militares en el Perú 1980-1996: sobre cómo controlar, cooptar y utilizar a los militares (y las consecuencias de hacerlo)». En: Stern, Steve (ed). *Los senderos insólitos del Perú*. Lima: IEP-Universidad Nacional de Huamanga, 1999

pierde un estilo de liderazgo intelectual como el que ejercieron en su tiempo Morales Bermúdez, Mercado Jarrín y Hoyos Rubio, al margen de las diferentes orientaciones de cada uno de ellos. Los pronunciamientos de los ex comandantes en jefe del ejército preocupados por la suerte de su institución no importaban solamente porque no disponían de tropas bajo su control sino porque ya el ejército dejaba de reconocerse en su historia.

En este contexto no es de extrañar que surjan bandas dentro de los oficiales que operan como paramilitares y formas de resistencia que actúan desde la clandestinidad (los grupos Comaca y León Dormido). Que esta resistencia alcanzó ciertos niveles de efectividad se comprueba en el hecho de que se descubren a los autores de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos y no quedaba otra alternativa que someterlos al fuero militar y condenarlos. El poder de la cúpula no podía tolerar que se introdujera principios de legalidad como resultado de informaciones que no podían evitar que se hicieran conocidas. Se despliegan dos líneas de respuestas, la ley de amnistía y una mayor intervención del servicio de inteligencia. Esta ley, como señala Mauceri, "a diferencia de las amnistías otorgadas en otros países sudamericanos en el Perú ésta no sigue una respuesta institucional destinada a facilitar las condiciones necesarias para una transición política sino, más bien fue una iniciativa impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso a pesar de las protestas públicas, cuyo objetivo fue terminar con las investigaciones del Poder Judicial y de la prensa con relación a los lazos existentes entre las operaciones de los escuadrones de la muerte y los servicios de inteligencia. De haber hecho públicos estos lazos habrían podido implicar a funcionarios de los más altos niveles del Poder Ejecutivo".¹⁴

14. Philip Mauceri "Prerrogativas de las Fuerzas Armadas en alianza cívico-militar en el Perú». En: Tuesta Soldevilla, Fernando (ed). *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1999.

La disciplina se impone también con la creciente intervención del SIN que se hace coextensiva al ejército y la sociedad ejerciendo sus poderes de control y disciplinarios. El SIN vigila a las instituciones militares, se infiltra en los ministerios, examina las implicaciones para la seguridad de cualquier política, se informa sobre las acciones de seguidores y opositores del régimen, pone los titulares de primera plana de la mayor parte de la prensa popular y orienta la programación de algunos canales de televisión de señal abierta entre otros operativos sicosociales; maneja sin rendir cuenta su propio presupuesto, que se asocia cada vez más con el impreciso rubro de operaciones especiales.

Hermoza, que había sido uno de los principales beneficiarios del sistema, es finalmente desplazado. Montesinos al mismo tiempo que aumenta su poder oculto se arriesga a aparecer en público, probablemente siente que se ha suspendido la cláusula de reserva que pendía sobre él.

La alianza con la mayoría de los oficiales de su promoción le permite el control del conjunto del ejército con el consentimiento de Fujimori pero probablemente yendo más allá de lo que éste podía conocer. La institución comienza a ser endeble hasta por su misma omnipresencia. Ya se podía estar en condiciones de seguir algunas de sus redes de corrupción y este conocimiento anticipaba su caída. Una camarilla tiene que ser discreta y conocer el límite de sus fuerzas. Montesinos involucrado en sus múltiples vínculos con el poder perdió reflejos. Fue finalmente desplazado por círculos internacionales más poderosos que lo que él estaba en condiciones de advertir. Una de las tareas impostergables que ha tomado el nuevo gobierno democrático de transición es depurar estos mandos no sólo por sus orientaciones autoritarias sino por su involucramiento evidente en una corrupción generalizada. Es probable que por más concesiva que pueda ser una transición habrá que hacer juzgamien-

tos donde se deslinden responsabilidades vinculadas a la comisión de delitos comunes, asociados muchos de ellos al manejo irregular del presupuesto de la corporación castrense, cuyos lineamientos fueron ocultados durante el autoritarismo y ahora resulta imprescindible conocer por haberse producido un desfaldo de los fondos públicos. Los oficiales a los que Montesinos convenció de que podían hacer lo que se les ocurría en su propio beneficio con el consentimiento del SIN, se encuentran ahora afortunadamente en una situación de extrema debilidad. Resistencias e informaciones a estas formas de proceder surgirán probablemente no sólo de la justicia ordinaria y militar sino de una nueva generación de oficiales de las Fuerzas Armadas.

5. Las posiciones divididas de los empresarios

Los empresarios por su parte practicaron el arte de la negociación prudente y las maneras comedidas hasta en los comunicados de prensa que a veces tomaban un tono radical pero cuidadosamente controlado en aquello que desde el poder podía ser considerado como desborde. Este grupo había adquirido desde fines de la década del ochenta por primera vez en la historia de los últimos años del país un proyecto ideológico —que no siempre iba a seguir con una estricta fidelidad de defensa de una economía de mercado— a la que Hernando de Soto le dio un vibrante tono de transformación del conjunto de la sociedad y no únicamente de las élites. Los empresarios en medio de la debacle del gobierno de García podían contar con un inesperado viento de cambio a su favor y una candidatura comprometida en el proyecto como la de Vargas Llosa. Son tiempos además en que el neoliberalismo aparecía como la única alternativa posible con la inesperada ventaja de que formalmente se podía

invocar al mundo popular y no dirigirse frontalmente contra ellos, superando un estilo confrontacional que era casi una segunda naturaleza en las élites por razones sociales y también étnicas. El cambio de orientación de Fujimori incumpliendo sus promesas electorales permitía, además, una renovación de liderazgos políticos que le daba oportunidad de situarse en el nuevo escenario sin el contrapeso de representaciones sociales que podían tener una dirección opuesta y contestataria.

El régimen, como indica Durand, da señales convincentes de establecer una economía que se inclina por el lado de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, el gran comercio exportador, la banca controlada por los grandes grupos de poder económico.¹⁵ Se constituye así una alianza proexportadora con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y la banca internacional en un contexto de pago escrupuloso de la deuda externa, austeridad fiscal y alta generación de ingresos. La Confiep, creada a mediados de los años ochenta y a la cual no le preocupa sostener credenciales democráticas, apoya el autogolpe de 1992 invocando al restablecimiento del orden y de la moralidad. En su investigación periodística Sally Bowen señala que los indicadores macroeconómicos eran espectaculares, con un crecimiento del PBI en 1994 del 14.3%, el más alto de la región y la inflación más baja registrada en las últimas dos décadas.¹⁶

El apoyo al gobierno, como anota Cotler, no es uniforme sino que tiene que ver con la estratificación de las represen-

15. Francisco Durand. "La democracia, los empresarios y Fujimori". En: Tuesta Soldevilla, Fernando (ed). *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1999.

16. Sally Bowen. *El expediente Fujimori. El Perú y su presidente 1990-2000*. Lima: Perú Monitor, 2000.

taciones gremiales que dependen de grupos económicos de muy diferente capacidad.¹⁷ La Asociación de Bancos, la Asociación de Fondos de Pensiones, la Sociedad de Comercio Exterior y mineros, productores de hidrocarburos y de electricidad que constituyen el sector más poderoso se beneficiarán del modelo y lo promoverán aunque, de acuerdo al autor, tengan la ambigüedad de reconocer el alcance decisivo de las transformaciones que están ocurriendo y su escasa capacidad de influencia para introducir correctivos que se ajusten mejor a sus demandas y requerimientos. Las medianas y pequeñas empresas agrupadas en la asociación de exportadores, Adex, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara Peruana de Construcción articulan intereses de pequeños y medianos empresarios, tienen elevados niveles de fragmentación social, enfrentan problemas de sobrecostos laborales y de competitividad con aquellos de mayor eficiencia tecnológica, y actúan como *lobbys* en los que influyen liderazgos altamente personalizados dada la dispersión del grupo. Ante la incapacidad de integrarse con éxito a la economía de mercado en los años en que el gobierno persiguió esta orientación, enfrentan la acusación de "mercantilistas" de parte de las empresas de mayor poder económico. En las elecciones de la Confiep de 1998 se expresa claramente una división entre, por un lado, los grupos favorecidos por la política económica del gobierno y los empresarios vinculados a la producción y el comercio en el mercado nacional y, por otro, exportadores medianos que manifiestan discrepancias respecto al gobierno y su disposición de no participar en las reuniones del gremio empresarial. El problema se resuelve sólo parcialmente. La Confiep, para reconstituir precariamente su unidad, oscila entre opiniones críticas al gobierno y actitudes

17. Julio Cotler. *La articulación y los mecanismos de representación de las organizaciones empresariales*. Documento de trabajo N° 97. Lima: IEP, 1998.

que manifiestan una presunta comprensión de lo que está ocurriendo en el poder, evitando que las distancias planteadas conduzcan a una inevitable confrontación.

Llama la atención que empresarios con mayor formación académica que sus predecesores y que cuentan además con una densa red de asesores, o de personas que se ofrecen para serio, no tengan una visión de largo plazo sobre el futuro del país. La indiferencia frente al régimen político por anteponer intereses particulares distorsiona la comprensión de esos mismos intereses particulares. Parecen vivir en el día a día, improvisando, sin otra alternativa que las que le propone el gobierno. Su conducta es marcadamente defensiva. Una élite empresarial necesita un proyecto y no armar y desarmar *lobbys*. Desde este punto de vista resulta razonable el mal disimulado desprecio que Fujimori ha sentido por ellas durante todo este período y que los empresarios, sabiéndolo, lo hayan acompañado en su gestión.

En la trama de intereses puestos en juego en el gobierno en diversos episodios, lo que se presenta como una despojada racionalidad económica expresa más bien un sistema de prebendas abiertas que ayuda al sostenimiento del régimen autoritario. El proceso de privatizaciones no ha sido indagado con profundidad pero el monopolio establecido a favor de la empresa telefónica le permite fijar a su albedrío el costo de sus servicios sin que ello necesariamente se exprese en una mejor calidad de los mismos. El ex ministro de Economía Carlos Boloña promueve el régimen de la Administración de Fondo de Pensiones (AFP) y un sistema de enseñanza superior alternativo organizado en un régimen de sociedad anónima y actúa abiertamente, dejado el cargo, en estas dos líneas de actividad. El constructor Camet, también con posterioridad ministro de Economía, hace crecer considerablemente el volumen de negocios de su empresa familiar a través de contratos para realizar obras públicas con el Estado. Se trata

probablemente de casos de corrupción, pero responde a una lógica que la trasciende y afirma apoyos sólidos para el autoritarismo. La reacción de los empresarios que no se benefician del sistema y tienen visibilidad por sus cargos gremiales es presentar en este último período sus candidaturas en listas opositoras. La reacción del empresariado que no se beneficia del sistema tiene que enfrentar la supuesta racionalidad del modelo económico impuesto y la falta de una consistente oposición social y política. Se muestran desconfiados del régimen establecido, más por la política económica que se aplica que por una comprensión de las ventajas de la institucionalidad democrática; no les preocupa o no saben identificar las conexiones que existen entre uno y otro nivel. Durante varios años esbozarán objeciones que se sostienen, la mayoría de las veces desde una posición defensiva. Sólo cuando en las últimas elecciones aparecen alternativas razonables desde los movimientos de independientes asumirán posiciones más nítidamente opositoras, presentándose algunos de ellos como candidatos a congresistas, especialmente los que adquirieron visibilidad ante la opinión pública por su gestión gremial. La demostración de que se trata de un juego de corto alcance es la baja votación obtenida. Algunos, como el ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah, pasan rápidamente del discurso opositor al gobiernista. Él intentaba negociar mejor, pero una vez en el proceso comprende lo precario de la posición obtenida para el logro de sus menguados objetivos.

El gobierno de transición democrática ha elegido en su gabinete a Emilio Navarro, uno de los pocos empresarios que mantuvo en el período un discurso coherente y de principios en materia de política económica, al margen que se pueda estar de acuerdo o no con sus posiciones.

6. Un gobierno de camarilla

La camarilla se sustenta en cúpulas militares y empresarios comprometidos pero tiene que contrarrestar en parte la presión internacional, lo que lograra en el autogolpe de 1992 y encuentra ahora crecientes dificultades para limitada ante la denuncia de nuevas irregularidades. En aquellos años el país vivía dificultades severas por la guerra interna y el desorden económico y si bien Fujimori barrió desde el poder probables consensos con la oposición, podía aducirse una situación extrema y al mismo tiempo un esquema de transición que pasaba por la formación del Congreso Constituyente Democrático y el referéndum de una nueva constitución. El gobierno tomó en aquel entonces la iniciativa en la OEA y disponía a su favor no sólo la condición de excepcionalidad del caso peruano sino también un sostenido apoyo popular y una oposición débil e inconsistente. Los resultados con que se aprueba la nueva constitución en 1993 son en cambio, por lo menos dudosos, pero no fueron objeto de impugnaciones mayores. Se identifican irregularidades pero no se tiene una fuerza social capaz de cambiar lo impuesto. Fujimori tenía el campo libre incluso para sortear algunas derrotas y es claro que el proyecto autoritario no perdía su unidad de propósitos y su dirección. Visto desde esta perspectiva, causa extrañeza la vocación de clasificar al régimen desde la ciencia política identificando momentos a modo de fotos instantáneas e ignorando el proceso. Se le llamará democracia delegativa, híbrida, semidemocracia y se le hará pasar en el corto intervalo de 1992 a 1994 por todas las etapas de la reciente ortodoxia de los modelos de transición en las corrientes más influyentes en la ciencia política, dictablanda, democradura, democracia, cuando no había esbozos de negociación en el plano nacional y poco tiempo después se iban desmantelando una a una las instituciones del Estado de Derecho,

la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, del Consejo Nacional de la Magistratura, agregada a la insostenible argumentación jurídica de la llamada Ley de Interpretación Auténtica que autorizaba una segunda reelección presidencial.

La orientación era imperturbable. Se trataba de consolidar un régimen autoritario sostenido por una camarilla que sacaba partido de la debilidad del Estado. Para saber esto bastaba advertir el recorrido total y no detenerse a observar el paisaje en cada una de sus estaciones. En una sociedad con los actores sociales debilitados hay una suerte de economía del control que no necesita constituir un bloque del poder ni ir más lejos que la represión selectiva.

Es cierto que después del autogolpe el gobierno aparentemente se liberaliza, cediendo en parte a la presión internacional llamando a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático, sometiendo la nueva Constitución a un referéndum y triunfando con claridad, al margen de algunas irregularidades, en las elecciones de 1995, y que en el gabinete dirigido por Dante Córdova en la primera etapa del segundo gobierno de Fujimori hubo cierta disposición de apertura política. Visto el proceso en su conjunto existió en todas las etapas una lectura relativista de la democracia formal entendiendo que no era apropiada para nuestros países. Si los rasgos autoritarios no son tan manifiestos en determinados períodos no se debe a convicciones de Fujimori y su personal político sino porque un sostenido apoyo popular le da un amplio espacio de iniciativa y discrecionalidad, sin que necesite preocuparse de sus opositores.

La camarilla se plasma, entonces, en un grupo limitado de personas que establecen vínculos de lealtad basados en intereses compartidos que se definen en el momento mismo de su surgimiento, que exige manejos de poder de origen extrainstitucional y compromisos que se sostienen en lealtades restringidas asocia-

das a lo que cada uno sabe del otro en temas como la corrupción o las violaciones de los derechos humanos.¹⁸ La mayoría de las decisiones tienen rango de secreto de Estado. Quienes participan en ellas están obligados y condenados a estar juntos. Esta camarilla se afirma desde adentro recurriendo a la amenaza y al chantaje, y desde afuera porque la salida de ella supone la exposición a delitos de los que no puede eximirse porque ya no tienen una retaguardia de protección. Quizás este concepto suene un tanto conspirativo; pienso que sí, que la conspiración no lo explica todo pero es uno de sus rasgos inconfundibles.

Una camarilla necesita establecer alianzas que otorguen estabilidad pero sin permitirle a estos nuevos socios el acceso a la caja negra donde están registradas las principales decisiones. A diferencia de la mayoría de los autoritarismos de América Latina no hay una articulación consistente entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y los grupos de poder oligopólicos vinculados al capital internacional. No puede constituirse un bloque de poder o un grupo relativamente articulado de élites dominantes, como quiera llamarse. Por lo que en lugar de un pacto de dominación establecido en nombre de los intereses generales de los sectores más influyentes, el partido se juega en el terreno chico de las prebendas, otorgadas a las compañías beneficiadas por las privatizaciones en procesos poco transparentes, los beneficios tributarios y coberturas por pérdida para algunos bancos, los contratos amañados para algunas constructoras, las exenciones para la minería. Son vínculos informales que se van redefiniendo en lugar de un acuerdo de largo plazo propio de un autoritarismo que se precie de su condición y no tenga que mirar siempre a los costados.

18. En estos dos párrafos sigo el artículo "¿Dictadura perfecta o autoritarismo inestable?" que he escrito en *Ideele* N°128, junio del 2000.

Un gobierno de camarilla necesita de seguridad interna y jugar a la imprevisibilidad con sus seguidores. No hay eslabonamientos que lleguen desde el poder hacia abajo. O mejor dicho, sólo la camarilla sabe cómo se hace y se deshace el juego. Por esta razón a falta de una hegemonía política y social claramente establecida, las maniobras sicosociales ocupan el mayor campo de la política. Por esto, como señalamos en un trabajo anterior, la muy real presencia de Montesinos y la paranoia sobre Montesinos termina siendo lo mismo. El "doctor", vigilante insomne, tortura, mata, interviene teléfonos, hace "reglaje" de los movimientos de los opositores, digita los nombramientos de las Fuerzas Armadas, organiza la campaña electoral, soborna congresistas.

En un sistema autoritario que quiere asegurarse de modo eficiente condiciones de duración, el SIN ejecuta las tareas sucias manteniendo una relación de subordinación y si llegado el caso emprende acciones con relativa autonomía, ellas son conocidas en sus líneas generales por los centros neurálgicos del poder.

Un autoritarismo que desinstitucionaliza aun sus propias estructuras de poder requiere ampliar las atribuciones del Servicio de Inteligencia que se desborda respecto a cualquier mecanismo de control. Es mucho más que un temible brazo ejecutor. El sistema obrando así obtiene ventajas inmediatas. En efecto se dan señales inequívocas a opositores y aliados pero como ello ha ocurrido a través de un manejo personalizado, se expone a continuas filtraciones de información. Los mecanismos que sólo se sustentan en el privilegio de la obtención de algunos conocimientos estratégicos y en el temor, no aseguran estabilidad. Cualquier régimen debe hablar o convencer de lo que está haciendo por el conjunto de la sociedad y por ese camino se asegura alineamientos estables de sus funcionarios. Fujimori no fue capaz de entenderlo, Montesinos no estaba interesado en hacérselo saber.

El proyecto del fujimorismo es el de un autoritarismo que no consigue afianzarse pero que ha perseguido durante sus años de vigencia el control sobre la sociedad, la previsibilidad en el comportamiento de gobernantes y gobernados, la idea de una continuidad sin alternativas. En su clásica formulación sobre los regímenes autoritarios, Linz señala que éstos no buscan, a diferencia de los populismos históricos de América Latina, una activa y extensa movilización de la población, salvo en algunos momentos claves, por ejemplo el de las elecciones.¹⁹ Lo veremos luego con más detalles. Basta señalar aquí que Fujimori, propagandista incansable, realizaba una miríada de pequeños actos prometiendo e inaugurando obras en los distritos urbanos y rurales. Tenía un extremo cuidado en que se conocieran sus actividades pero era renuente a que hubiera pronunciamientos de adhesión ampliamente difundidos que hiciera visible la articulación de un pacto social de vastos alcances. Hasta poco tiempo atrás manifestaciones de este tipo lo hubieran obligado a establecer una estructura con instancias intermedias llevando a hacer concesiones a liderazgos intermedios. Esta situación, por la debilidad del gobierno, parece haber cambiado en las elecciones del 2000. Si se tratara de opciones podría decirse a modo de imagen que el gobernante prefería ir al pueblo y no que el pueblo llegara hacia él, lo que hubiera sido el reconocimiento esperado de un liderazgo carismático o con pretensiones de serlo. Fujimori tomando la iniciativa, no debía rendir cuentas al mismo tiempo que aparecía investido con la gracia de las concesiones otorgadas a la población. Los grupos más pobres extremando el reconocimiento pueden introducir subrepticamente nuevas

19. Juan Linz. «*Totalitarian and Authoritarian Regimes*», en Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby (eds.), *Handbook of Political Science: Macropolitical Theory*. Massachusetts: Addison-Wesley.

demandas a cumplir, convirtiendo la adhesión incondicionada en la solicitud de beneficios y compromisos que se iban renovando. Fujimori tiene que estar en constante movimiento para renovar adhesiones. No podía cuajar en un autoritarismo apacible, si cabe el término, en el que el sistema pudiera seguir andando por su cuenta y no a renovados empujones.

Los autoritarismos permiten, como indica Linz, un pluralismo limitado. Van a controlar los principales medios de comunicación por la adhesión y el chantaje, amenazarán a quien presente demandas sobre corrupción y cerrarán con siete llaves procesos de investigación, seguirán meticulosamente los pasos de sus adversarios reales y potenciales, crearán cadenas de delación al interior de las Fuerzas Armadas, perseguirán periodistas que llegan a informaciones sobre violaciones de derechos humanos que quisieran dejar en reserva, forzarán exilios. Y al mismo tiempo permitirán un margen de maniobra a los intelectuales que se ilusionarán sobre el presunto ejercicio de sus libertades. El gobierno pudo organizar o colaborar con eventos culturales de una convocatoria plural en la que los participantes están libres de decir lo que se les ocurra, entre otras razones por la inocuidad de sus opiniones. Las ONGs tuvieron oportunidad de hacer convenios con ministerios o gobiernos locales con alcaldes oficialistas, prestar asesoría despojadamente técnica, ser apreciadas en sus logros. Un régimen autoritario no cierra las ventanas sino que las entorna para que el observador siga respirando sin enterarse cuál es el paisaje que lo rodea.

Y este clima se enlaza con otra característica del autoritarismo que es la de crear una mentalidad más que propiciar una ideología. La prédica contra los políticos se sintetiza en unas pocas razones y en contados y repetidos denuos. El neoliberalismo no se plasma en un discurso de acceso a una presunta modernidad sino en la idea de que es inevitable desprender las

iniciativas personales y familiares de lo que está ocurriendo en el conjunto de la sociedad. No se trata tanto de evitar que se piense distinto, se procura más bien quitar espacio a la reflexión. Más que las adhesiones entusiastas se busca que la gente adquiera unas cuantas visiones estereotipadas del orden social, fáciles de resumir porque no están expuestas a la deliberación con otros argumentos.

El proyecto autoritario h1jmorista llegó a estar más cerca de lograr sus propósitos cuando consiguió que predominara un ambiente de desidia. En efecto, adherentes y muchos de sus opositores empezaron a funcionar en la lógica del sistema, inmersos en la rutina de sus actividades, encerrados en ella porque no conseguían visualizar alternativas ni mucho menos comprometerse con construidas. Una ironía de estos tiempos que le tocó vivir al país es que cuanto más atado estaba el individuo a condiciones que no controlaba, mayores eran los discursos que exaltaban la autonomía personal y más extendida la indiferencia hacia los otros, aun cuando se notara la perplejidad acerca de lo que le podía ocurrir a cada uno en el autocentramiento asumido. Fujimori era una paradójica garantía de continuidad de una situación en la que la mayoría de las élites estaba insatisfecha pero no sabía cómo salir ni le interesaba hacerlo. La formulación en boga era la aceptación realista de las circunstancias o el pragmatismo, término que estuvo, como pocas veces en nuestra historia, desprovisto de cualquier intento de densidad conceptual y que daba la pobre seguridad de la falta de pasiones, los intereses poco esclarecidos y la repetición de lo mismo. Fujimori y el conjunto de la sociedad llegaron a estar muy cerca de una coincidencia totalizadora en la devaluación de las palabras.

7. Políticas económicas, reformas institucionales y autoritarismo

En América Latina, las políticas de ajuste y liberalización fueron por lo general, tratadas en términos de la creación de un círculo virtuoso en el cual pasada la etapa de indecisiones políticas seguidas luego por una fuerte direccionalidad económica, se entraría en una etapa de cambios institucionales que otorgaría estabilidad a las nuevas reglas de juego establecidas. Los actores liberados de la presión de la coyuntura buscarían referentes pre- visibles y de largo plazo. El ciudadano informado con capacidad de juzgar gobiernos y partidos, que lleva como probable desenlace a la alternancia en el poder de distintas fuerzas, es también percibido como un agente que comprende cuáles son sus márgenes de intervención, oportunidades y restricciones en el mercado ordenando así sus iniciativas personales. En buena medida ha predominado una lectura normalizadora y optimista de la realidad. Tanto organismos internacionales como economistas y politólogos influyentes pensaban que la liberación de la economía de una matriz centrada en la intervención de un Estado ineficiente conduciría a una etapa posterior de búsquedas de consensos y progresiva estabilidad. Algunos autores incurren en una lectura inmersa de un evolucionismo triunfante y destacan la llegada de una etapa de competencia política en la que gobiernos de orientaciones diferentes a los que aplicaron las medidas de ajuste realizarían reformas institucionales que redefinirían en términos de mayor eficacia la gestión pública y la redistribución. Los ejemplos que sustentan esta posición se limitan por lo general al caso de Chile y a la alternancia en el poder en Argentina. Los problemas de conducción económica que enfrenta el gobierno de De la Rúa, a los que se agregan casos de corrupción, deberían poner coto a este razonamiento triunfalista, pero a al-

gunos grupos de la comunidad académica no les interesa tomar en cuenta sino como incidentales anomalías, sucesos que vayan en contra de su razonamiento prescriptivo acerca de lo que va a ocurrir. Consideraciones menos entusiastas provocan lo que está ocurriendo en Brasil y Bolivia, países con graves dificultades económicas y creciente conflictividad social. Sin embargo, el razonamiento de un proceso de desarrollo reciente de signo positivo en América Latina se sigue manteniendo.

El autoritarismo sería una desviación del tipo ideal, no un orden que puede ser coherentemente explicado a partir de una determinada dirección política de la economía, que en los hechos no se aparta de recomendaciones sugeridas por los organismos internacionales de crédito y por buena parte de la comunidad académica. No han faltado entonces razonamientos deterministas. Así, tuvo marcada influencia una interpretación que preconizaba que al fin del segundo gobierno de Fujimori se entraría en una nueva fase de competencia entre fuerzas democráticas y que los acontecimientos tendían a lograr una estabilidad institucional. Sostener este punto de vista daba certificado de realismo, objetividad y sensatez.

Cabe pensar en un escenario diferente para otros países y en especial para el caso peruano: que del margen de libertad del Ejecutivo impuesto por una determinada situación nacional e internacional se vaya moldeando un modelo de consolidación del poder libre de todo criterio de rendición de cuentas y que el mismo gobierno se encargue de graduar las políticas de ajuste, las de redistribución social y las llamadas reformas de segunda generación para garantizar su control sobre la sociedad.

No puede comprenderse los intentos de consolidación de este autoritarismo si no se asume que las primeras medidas de reforma se tomaban como inevitables y que debían darse señales efectivas de que el Estado dirigía efectivamente la economía, y

esta vez orientado hacia el cambio. Contaba en principio con un consenso previsible ya que, como señala Paramio, a menor confianza social con las viejas reglas, mayor disponibilidad para un discurso reformador, aun para aquellos grupos beneficiarios del antiguo estado de cosas.²⁰ Este discurso reformador no generará resistencias ante medidas que buscan salir de la hiperinflación y crear un horizonte más o menos estable de expectativas en contraste con la incertidumbre anterior.

En el caso de Fujimori parece haberse dado una confluencia entre lo que podía hacer y lo que le convenía. Según Efraín Gonzáles de Olarte, se aplicó un modelo extremo de ajuste estructural caracterizado por la desregularización de los mercados, la privatización de las empresas, la liberalización del comercio exterior y la ausencia de políticas sectoriales y sociales.²¹ Un contexto económico de escasa autonomía ante los organismos internacionales y alta autonomía frente a los grupos de interés externo podía convertirse en un rasgo político en condiciones de continuar por un plazo indefinido. El régimen tenía capacidad de prescindir de coaliciones sociales amplias de respaldo a las reformas que obligan a negociaciones políticas y a apelar en cambio a un consenso pasivo, dirigido desde el poder.

En los hechos se proponía dejar de lado cualquier pacto. Ya antes de la llegada del gobierno de Fujimori los sindicatos no tenían poderes de negociación y la mayoría de sus antiguos afiliados estaban buscando respuestas individuales de salida a la crisis. Las clases medias en un contexto hiperinflacionario y de tensión social hacían un rápido balance de costos y beneficios entre el antiguo modelo y el que se iba a implantar. Necesitaban una plataforma de

20. Ludolfio Paramio. *Ob. cit.*

21. Efraín Gonzáles de Olarte. *El neoliberalismo a la peruana: Economía política del ajuste estructural, 1997-2000*. Lima: IEP.CIES, 1998.

seguridades mínimas en las que apoyarse, por lo que entendían inevitable aceptar el ajuste como requisito indispensable para ordenar sus expectativas, darse tiempo para pensar lo que les esperaba, tener pautas mínimas de inteligibilidad. Sólo ahora en una etapa diferente pueden hacer un balance ordenado de costos y beneficios, evaluar las más de las veces el alcance de sus pérdidas y distanciarse del gobierno. Los empresarios, cualquiera fuera su ámbito de actividad y aun aquellos que estuvieron cercanos tradicionalmente al gobierno, no podían sacar ventajas de un Estado en bancarrota.

Y así como no había necesidad de establecer mecanismos de consulta con actores sociales, tampoco se requería de coaliciones. El conjunto de la clase política y no solamente la que tenía influencia en el gobierno anterior podía ser responsabilizada de la situación existente por parte de alguien que ingresa por fuera del sistema. La marginalidad de los grupos dominantes en una sociedad desestructurada daba campo libre para establecer una política de alianzas rígida y restringida, limitada sólo a organismos internacionales, algunos grupos económicos y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Visto en perspectiva, este estilo encuadraba bien con las prescripciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el sentido que el Presidente y su equipo económico mantuvieran un campo de maniobra sin restricciones, que se impusiera un estilo decretista en iniciativas legislativas tendientes a la reforma económica y que la conducción macroeconómica estuviera en manos de un reducido equipo de técnicos aislados que definieran sus prioridades dejando de lado cualquier presión social.

El proceso de ajuste estructural y de reformas económicas fue exitoso en los términos fijados por los organismos internacionales y los inversionistas extranjeros hasta 1997. Los mayores logros se situaron en el área de las privatizaciones, donde se llegó

a recaudar, según Sally Bowen US\$ 2.62 millones en 1994, y US\$ 1.1 millón en 1995 y US\$ 2.63 millones en 1996.²²

Estas medidas fueron acompañadas por una acelerada redefinición de las relaciones laborales, con una legislación que favorece la flexibilización del mercado de trabajo fomentando la contratación temporal y la subcontratación, a la vez que facilita el despido, regulando las condiciones de negociación colectiva de los sindicatos y el derecho de huelga para debilitar a los gremios, estableciendo políticas salariales destinadas a mantener niveles de remuneraciones bajas y estancadas y, en general, encareciendo los gastos indirectos de planilla, afectando la estabilidad laboral.²³

En 1997 se produce un cambio de política en lo que se refiere a las privatizaciones, ya que la única empresa importante vendida por el Estado es la de Centromin y se postergan otras importantes y ya planificadas. La privatización recibió un nuevo enfoque con la creación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu) a través del cual el Estado ofrece al mercado parte de las acciones que había retenido en la venta de empresas públicas ya privatizadas. Los intereses en teoría se iban a destinar al aumento de las pensiones de los jubilados. Sin embargo, la venta de estas acciones se hizo extremadamente lenta, no modificando significativamente la situación de los eventuales beneficiarios de estos cambios.

Había llegado probablemente el momento político en el que la gente comienza a responsabilizar de su situación económica a la gestión actual y no se lo atribuye a una consecuencia previsible de las crisis heredadas. Fujimori no puede tomar como

22. Sally Bowen. *Ob. cit.*

23. Francisco Verdera. *Cambio en el modelo de relaciones laborales en el Perú, 1970-1996*. Suiza, Osaka: The Japan Center for Area Studies, 2000.

referencia indefinidamente a la clase política desaparecida. De modo que para responder a las crecientes presiones sociales intenta hacer una política de redistribución selectiva del gasto social hacia los más pobres, sin procurar al mismo tiempo institucionalizar los cambios estructurales emprendidos realizando las llamadas reformas de segunda generación. Estas reformas suponen aplicar medidas encaminadas a lo que los técnicos llaman el "buen gobierno", incluyendo normas y organizaciones diseñadas y previsibles en la educación, la administración pública y la justicia.

8. Las idealizadas y distantes reformas de segunda generación

El gobierno no pudo —ni le interesó— hacer este programa de transformaciones. Un cambio en las políticas destinadas a educación obligaría a modificaciones en las asignaciones presupuestales que alteraría la lógica con la que se presta la ayuda social orientada desde el Ministerio de la Presidencia. Esta supone una población beneficiaria de la gestión pública con un mínimo de expectativas, que se van cumpliendo hasta un determinado umbral a través de la asistencia alimentaria y la realización de obras de infraestructura.

La economía de la asignación de recursos se ajusta a una economía del poder. De este modo, el gobierno asigna lo justo a quien lo merece de acuerdo a sus propios criterios de legitimación, en la medida que va a tener como contrapartida un reconocimiento extremo si se le compara con la magnitud de la ayuda prestada.

En cambio, la reforma educativa exigiría trabajar con consensos amplios y expandir un marco general de redefinición de expectativas y de planteamientos de demandas por parte de do-

centes, estudiantes y padres de familia que crearía un cuadro social difícilmente controlable, ya que del reconocimiento se pasaría rápidamente a la exigencia y de hecho permitiría construir referentes estables en nuevos actores de la sociedad civil.

El régimen una vez que define un proyecto autoritario de largo plazo con un reducido bloque en el poder no puede construir lo que para Gustavo Guerra García sería un modelo deseable de objetivos por parte del Ejecutivo, que se expresaría en estrategias de desarrollo que contemplan el mediano plazo, un funcionariado público eficiente comprometido en una carrera pública y una adecuada coordinación multisectorial.²⁴ Por el contrario, al gobierno le resulta más adecuado para sus propósitos formular políticas para un corto período promoviendo una campaña de permanente renovación de adhesiones. En las frecuentes superposiciones de competencia el poder real y, por ello, la última palabra le corresponde al Ministerio de la Presidencia. Se asegura así la lealtad del personal administrativo, no por el progreso ordenado hacia los cargos profesionales más exigentes sino por la inestabilidad y el eventual despido ante señales de desafección con los criterios de regulación predominantes.

Incluso profesionales y académicos que se mueven en la ortodoxia neo liberal y que no parecen cuestionar al régimen, como Mayen Ugarte, señalan que la falta de canales institucionales para negociar metas y políticas, la carencia de un cuerpo estable y competente de funcionarios públicos que se encargue del manejo del Estado y la falta de interés por asegurar la activa par-

24. Gustavo Guerra-García. «La dimensión política del ajuste económico en el Perú». En: Elsa Bardález, Martín Tanaka, Antonio Zapata. *Repensando la política en el Perú*. Lima: Red para el desarrollo de las ciencias sociales, 1999

ticipación ciudadana, han conspirado contra las intenciones de introducir medidas reformistas.²⁵

En esta línea, experiencias relativamente exitosas de las primeras etapas del ajuste y de las reformas estructurales, no sólo pierden su impulso inicial sino que distorsionan su contenido. Ocurre por ejemplo con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) a la que se apoya en las primeras etapas del gobierno, se busca crear una élite tecnocrática con una radical modificación de la estructura y los cuadros administrativos, se fijan metas mensuales de recaudación de impuestos y se procura generar consenso en la sociedad civil acerca de la legitimidad de sus medidas y que ellas efectivamente van a aplicarse, por lo que va a ordenar la conducta de los distintos agentes económicos. De hecho, el cambio deliberado en los cargos de dirección y la comprobación de que la austeridad fiscal no estaba entre las prioridades del gobierno, visto en perspectiva no es sino una etapa previa de pérdida de influencia de la Sunat, que antecede a que se convierta en un instrumento político para chantajear y acosar selectivamente a los opositores al régimen y mantener exonerados de responsabilidad a aquellos que le sean leales, al margen que se haya incurrido o no en infracciones tributarias.

En este proceso los funcionarios comprometidos en los llamados "islotos de eficiencia" de la administración pública, entre otros los que supervisan a las entidades privatizadas de prestación de servicios, con sueldos elevados y reclutados en universidades de élite, pierden el derecho a la inocencia, a separar racionalidad

25. Mayen Ugarte. "La reforma del Estado: alcances y perspectivas". En: Roberto Abusada, Fritz Du Bois, Eduardo Morón y José Valderrama. *La Reforma Incompleta*. Tomo II. Lima: Universidad del Pacífico-CIUP-Instituto Peruano de Economía, 2000.

administrativa de lógica política. Los mecanismos de control del régimen se hacen demasiado contundentes como para pretender mantener una posición neutral.

El gobierno no puede afirmar su régimen autoritario si es que emprende reformas institucionales en el Poder Judicial de acuerdo a las exigencias generalmente contempladas en las llamadas reformas de segunda generación. Las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura de seleccionar nombrar y despedir a jueces y fiscales se menoscaban por la creación de Comisiones Ejecutivas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que se encargan de estas atribuciones. Este mismo Consejo Nacional de la Magistratura es despojado también de la competencia de investigar irregularidades y de destituir, llegado el caso, a vocales supremos entre los que se incluyen miembros de la Corte Suprema y fiscales supremos. Sólo cuando recientemente se precipita la salida del régimen la situación cambia.

Si de crear ilusiones de modernidad se trata, lo cierto es que el gobierno no fue capaz de construir una cultura en la que la gente se apropie del modelo económico y lo haga parte de su comportamiento social y político, de modo que tanto sus beneficiarios directos como el conjunto de los actores sociales se acostumbren a manejarse de acuerdo a las reglas de una economía de mercado, entendiendo que éste es el único marco estable para encontrar las oportunidades e identificar las restricciones. Contra las expectativas de los organismos internacionales, la mayoría de las personas no llega a asumir una cultura posterior al ajuste de acuerdo a criterios de estabilización de expectativas, salvo en los sectores menos dinámicos, que ya no razonan en términos de tomar riesgos ejerciendo autonomía y responsabilidad personales sino que aceptan lo que les toca en suerte sin otra opción. Al mismo tiempo, el gobierno tampoco puede acceder a una etapa de corrección de algunas de las consecuencias de los cambios

impuestos, entre ellos la creación de empleo, un Congreso más vigilante, decisiones más transparentes, un seguimiento de las condiciones y negociaciones en que se realizan los procesos de privatización y controles institucionales ante la eventualidad de una creciente corrupción.

El autoritarismo tiende así a cerrarse en su propio círculo sin poder darle continuidad a los primeros lineamientos de su política económica ni introducir cambios que parte de la comunidad internacional y de la propia sociedad civil considera razonables. Por lo que debe afianzar sus alianzas básicas: las cúpulas de las Fuerzas Armadas custodiadas por su aparato de inteligencia, los empresarios nacionales e internacionales que obtuvieron beneficio de las primeras privatizaciones y los sectores populares en extrema pobreza. Se trata de un cuadro de alianzas precario pero que mantiene vigencia en la medida que todavía no surgen actores que otorguen suficientes garantías de coherencia y de credibilidad.

El sistema comienza a girar erráticamente entre la continuidad de las políticas de ajuste para el pago de la deuda externa, la realización cada vez más intermitente de privatizaciones y los arrestos populistas orientados a la redistribución del gasto social. Esta situación permaneció cuando se iniciaba el tercer período de gobierno. La política de propósitos inmediatos se impone finalmente a lo que parecía una racionalidad económica que caminaba en una sola dirección. Daría la impresión de que en un contexto de incertidumbre jugar en varios campos era un ejercicio que se volvía extremadamente complejo de realizar. Fujimori no podía al mismo tiempo impulsar el modelo y aplicar algunos correctivos de manera ordenada. Las experiencias de Argentina, Chile y, recientemente, México sugieren que la atención a estos diversos frentes requiere coherencia política, una activa discusión y, la mayoría de las veces, la competencia y la alternancia en el

poder. Son precisamente las condiciones que el gobernante no se encontraba dispuesto a cumplir.

9. Maquinarias políticas y sectores populares

El gobierno de Fujimori contaba con un sostenido apoyo en los sectores de menores ingresos del medio urbano y rural. Las explicaciones de esta adhesión se encuentran para algunas interpretaciones en el aumento del gasto social dirigido a obras de infraestructura, electricidad y saneamiento dirigida a caseríos y barrios populares. El Estado ha destinado parte del dinero de las privatizaciones y de la mayor recaudación tributaria a un crecimiento importante del presupuesto nacional ya una masiva ayuda alimentaria por la cual son asistidos el 142% de los hogares peruanos. Un número significativo de obras sociales llega a caseríos hasta entonces olvidados. La ayuda prestada es un paliativo ante situaciones en las que no se percibe un horizonte de cambio. Para un grupo importante de los sectores populares lo que resuelve este gobierno es el límite razonable de lo que puede esperarse y cualquier cambio supone riesgos que no quieren asumirse. Como consecuencia se revitalizan rasgos de clientelismo que ponen en el orden del día interpretaciones tradicionales sobre la sociedad peruana en la que las relaciones entre autoridades y actores sociales desperdigados permite conseguir lealtades y hasta traficar con ellas. Vamos a ver que este proceso no es tan simple. Lo cierto es que este tipo de consideraciones discurre a contracorriente de quienes entendían hasta pocos años atrás que lo más relevante de la sociedad peruana era la emergencia de un mundo popular que desbordaba las instituciones del propio Estado, establecía autónomamente sus propios criterios de legalidad y competencia, promovía relaciones económicas y cultura-

les que prescindían de la referencia a las autoridades; en fin, que había pasado el tiempo de liderazgos controlistas impuestos desde el sistema político. La situación es más desconcertante aún si se toma en cuenta que Fujimori realiza en marzo, abril y mayo del 2000 movilizaciones masivas en medio de una campaña electoral después de diez años de gestión en el gobierno en que no había recurrido en ninguna oportunidad a esta estrategia. Y si bien puede haber interpretaciones encontradas sobre los motivos de esta concurrencia de la población a los actos proselitistas del gobierno, por lo menos existe acuerdo que consiguió una asistencia masiva y que mostraba una bien instrumentada organización.

Quizás este aparente cambio sorprenda porque se tiene una concepción simplificada y homogénea del mundo popular y especialmente de los migrantes a la ciudad. Daría la impresión de que el ciclo de estudios basados en la conquista de la ciudad por las personas provenientes de los pequeños poblados y el campo ya ha llegado a su fin. Y que el desenlace del proceso es tan previsible como trivial. Se ha consolidado un proceso de diferenciación interna en la que un grupo se ha integrado a parte de los sectores medios y otros continúan en condiciones de pobreza en los que la falta de trabajo estable los coloca sin referentes integradores. La exclusión social puede ser consecuencia de la falta de acceso a un proceso de modernización o resultado de este mismo proceso. La ausencia de partidos y de organizaciones de intereses más o menos articulados deja a cada individuo o a cada familia obligadas a hacer su propia síntesis, sin un discurso que provenga desde afuera al que tomar en cuenta, ya sea en su literalidad o a filtrado, distorsionado, o acomodado como sea, para que se convierta en un recurso útil, de modo que las personas tengan un sentido mínimo de ubicación.

Durante los primeros meses del 2000 se asistió al surgimiento de una maquinaria política impulsada por el gobier-

no.²⁶ Se basa en relaciones clientelistas pero que no tiene como en la vieja relación del patrón con sus subordinados un flujo recíproco de beneficios y de favores en las que se aspira a una relación continuada en el tiempo cara a cara y en el que se ofrece crédito, prebendas y asistencia a cambio de reconocimiento y apoyo político. Estos rasgos subsisten en vastos sectores. Es cierto que Fujimori puede establecer una relación directa o simbolizada en su estilo de presentación, pero no se explica el éxito en esta línea por el solo recurso a los medios y el recorrido incesante de todo el país (aunque ambas estrategias importan) sin una organización administrativa que le otorgue sustento a este propósito. Este aparato es el que permite darle continuidad a los vínculos y darle la suficiente flexibilidad, creando así una rutina de funcionamiento que asegura un control cotidiano y que se activa en determinados períodos, tensando sus fuerzas, para convertirse en una instancia movilizadora.

Si bien es notoria la acción del Ministerio de la Presidencia y en particular del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) en este aparato de vigilancia y búsqueda de adhesiones sociales, esta máquina política es difícil de identificar en sus eslabonamientos precisos. Se vuelve un aparato omnipresente pero flexible, con la misma intención de manipulación y diferentes rostros y organizaciones. Los recursos principales pueden provenir del gerente de un Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) como ocurría en Cajamarca, de la Dirección de Agricultura, como en Piura, de algunos alcaldes provinciales y distritales, como en el caso de Lima, o plantearse la competencia entre distintas dependencias del gobierno, como ha ocurrido en

26. El concepto de maquinaria política es tomado de Joan N. Nelson. *Access to power. Politics and the urban poor in developing nations*. New Jersey, Princeton: Princeton University Press, 1979.

la mayor parte del país. La misma intermediación no es un simple engranaje del sistema sino que pasa por negociaciones, manipulaciones, protestas de lealtad, desprestigio a sus competidores, a los que, sin embargo, se les puede convocar con un discurso de solidaridad de ideas y propósitos. Aunque suene contradictorio, la lealtad al vértice del sistema pasa por la desconfianza recíproca entre sus seguidores. Como se ha visto, éste es el recurso para que la camarilla no conceda una apertura relativa, lo que le exigiría dar cuenta de una mínima parte de sus actos.

La maquinaria política cuando crea organizaciones de intereses no entra en competencia con las ya existentes. Simplemente las desplaza porque sus contendores no tienen la fuerza suficiente para establecer una línea de oposición y resistencia. Así, por ejemplo, el alcalde de San Juan de Lurigancho puede crear asociaciones de vecinos divididas por criterios impuestos desde el poder estableciendo quince zonas siguiendo en teoría criterios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), designando directamente a los responsables sin que los dirigentes de las antiguas federaciones puedan hacer algo en contra, aunque sea la opción táctica u oportunista de adaptarse al nuevo esquema. Del mismo modo, los comedores dependientes del Pronaa no se preocupan por desprestigiar a los comedores autogestionarios. Desarrollan su línea de acción sin tomar en cuenta a sus eventuales competidores. En este contexto no puede hablarse de paralelismo como en el tiempo de los gobiernos de Belaunde y Alan García porque con esta formulación se alude a vínculos de competencia que simplemente han dejado de existir.

La maquinaria política está a medio camino entre el clientelismo tradicional y la universalización de un derecho. Establece una dependencia clientelista, es cierto, pero no requiere de una relación directa y personalizada. Toma ciertos rasgos universalistas como la facilidad de entrada a la relación, ya que se ingresa a ella

por la simple condición de vecino de un asentamiento o de un caserío que está viviendo en condición de pobreza. No se basa, sin embargo, en el reconocimiento de un derecho y mantiene un rango de discrecionalidad cuidadosamente medido. No es la dependencia estricta ni una suerte de contrato social, pero perfilar parte de cada uno de estos rasgos le otorga consistencia en el propósito de conseguir adhesiones y en su flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes.

Esta ambigüedad buscada hace que estén vigentes viejas lecturas de dependencia de la organización social pero también nociones de promoción y autoestima. Hacer una interpretación en una sola dirección no sólo no es comprender lo que está sucediendo sino pasar por alto la densa historia social de las últimas décadas. Es cierto que en algunos casos pareciera encontrarse a una población disponible a nuevos vínculos de consentimiento, perdidos como están los referentes articuladores comunes, como los partidos políticos, los grupos de intereses o al menos gobiernos locales que den garantías de eficiencia y de reconocimiento a la comunidad. Es posible que esta situación conduzca a la apatía y al fatalismo. No se limita, no obstante, a esta sola dimensión. En los lazos que se establecen pueden converger la conveniencia inmediata con la recuperación de un sentido de comunidad, aunque esta vez se haga a través del seguimiento a un líder. La gente entrelaza, de esta manera particular, expresión de intereses con formación de identidades.

Quizás pueda aducirse que esta interpretación es tributaria de la teoría de que los individuos en la sociedad de masas atomizados, resentidos, están prestos a ser movilizados por un líder que les permita dar coherencia y cohesión a una identidad social fragmentada. Contra esta corriente de opinión se ha señalado con acierto, la vigencia de lazos familiares y de pertenencia étnica en sociedades de migrantes urbanos que contrarrestaría el aislamien-

to ayudando a que se establezcan lazos de pertenencia y de interpretación comunes. Y que además estos migrantes perciben la vida urbana, más allá de lo que pueda ser su posición en un determinado momento, como una sociedad abierta a renovadas oportunidades de progreso. Quizás estos argumentos ya no son válidos para quienes integran la segunda o la tercera generación urbana, viven en familias desestructuradas o en las que los códigos de comunicación ya no pueden consolidarse en una interpretación común entre las distintas generaciones. Y el medio urbano que es, además, su único punto de referencia parece cerrado en sus oportunidades y ya se ha producido un desfase, claramente asociado a la modernidad, entre las aspiraciones de realización personal y económica, que no están sujetas a principios rígidos de contención y, por otra parte, los medios para conseguidas. Si así están ocurriendo los acontecimientos, no puede rechazarse de plano que estamos viviendo las pulsiones y los callejones sin salida de una sociedad de masas en la que resulta manifiesta la distancia social y la segregación urbana.

Es probable que en una parte minoritaria pero significativa del mundo popular estén viviéndose experiencias de este tipo. El discurso y la misma vivencia de la globalización hacen más evidente las separaciones entre diversos actores sociales, por las disímiles experiencias de integración a través del consumo y de los conocimientos. Los nuevos circuitos de comunicación contienen la promesa, por más vaga e injustificada que sea, que la información y las nuevas oportunidades están al alcance de todos. No obstante esta convicción, el acceso le está negado a muchos que aspiraron a participar en estos renovados espacios sociales.

El cambio decisivo ocurre, sin embargo, en las mismas condiciones en que se da la competencia política. Desestructurados los marcos organizativos las personas depositan su confianza en un liderazgo situado desde el poder que se convierte en la única

realidad tangible y la opción se reduce en adherirse o distanciarse sin que existan otras opciones disponibles.

Situaciones con estas características pueden presentarse en personas que no han tenido experiencia política anterior. No sirve en cambio para explicar la disposición a colaborar con el gobierno de instituciones y líderes con una trayectoria social previa. El régimen autoritario puede establecer un clientelismo que incluya dimensiones de promoción y reconocimiento que actores ahora comprometidos con la democracia no habían sido capaces de presentar. En este sentido no se trataría, como afirman Parodi y Murakami, de una tradición plebiscitaria en la que los sectores populares delegan en los gobernantes la solución de sus problemas e intereses, se despreocupan de los procedimientos para conseguir los resultados y no consideran prioritaria la participación social.²⁷

Lo que ocurre en el movimiento de mujeres, por ejemplo, tiene que ver con una relación de múltiples facetas que las tediosas interpretaciones sobre la existencia o no de un régimen neopopulista se abstienen de explicar. En todo caso está sucediendo una evolución en las organizaciones de comedores, en la cual las mujeres conquistan espacios al margen de una "historia oficial virtuosa" elaborada por promotoras y promotores de ONGs que se encuentran des ubicados para explicar esta adhesión al gobierno después de largos años de una interpretación optimista acerca del progreso de la conciencia cívica de las mujeres de bajos ingresos. En la teoría de estos grupos, la mujer que se integraba con vacilaciones y temores a un comedor, enfrentándose a veces a los prejuicios de su marido o conviviente, le tocaba el turno de ser dirigente, de allí le correspondía la oportunidad de integrar

la federación distrital, y en la fase siguiente, juntando trabajo denodado con mayores conocimientos, llegaba a formar parte de federaciones departamentales, desde esta posición estaba en condiciones de aspirar a algún cargo electivo: regidora de su distrito, regidora provincial, hasta congresista.

El sistema se iba renovando, en el discurso oficial, en la medida que el progreso de estas mujeres a cargos de mayor responsabilidad iba dando oportunidades para el surgimiento de una nueva generación de personas con responsabilidades dirigenciales. Esta evolución positiva tomaba como supuesto, también, que la participación institucional traía consigo otros procesos positivos, como el acostumbramiento a manejarse con reglas que hacían previsibles los comportamientos; de esta manera estructuraba el diálogo y favorecía la distribución de responsabilidades. Se alentaba así una preocupación extendida por mantener el vínculo representativo con la comunidad que la había elegido y que incluía procesos regulares de rendición de cuentas. En buena medida, los eventos de estas asociaciones combinaban la presentación de plataformas y propuestas ante las autoridades generalmente formuladas con asesoramiento profesional externo —lo que resulta razonable siempre que ese apoyo sea transparente y deje en claro los márgenes de libertad de las dirigencias— con discusiones sobre los acercamientos y desvíos respecto a un modelo ideal de asociación que sólo tenía vigencia a nivel de discurso.

En política resulta ingenuo imaginar trayectorias lineales. La afirmación de un liderazgo democrático requiere el reconocimiento de dificultades y bloqueos, y no caer en la ilusión o el simplismo de pasados por alto como si se tratara de ruidos e interferencias ocasionales que no alteran en lo fundamental la claridad del mensaje. Lo que sucede es que las personas interesadas en la participación acumulan cargos en lugar de compartirlos.

27. Yusuke Murakami. *La democracia según C y D*. Lima: IEP, 2000.

En el caso de las dirigentas de los comedores, éstas recorren asociaciones a nivel distrital y provincial, intervienen en todas ellas, manejan vínculos con diversas organizaciones de cooperación nacionales y de fuera del país, participan en eventos, salen a la prensa, expresan opiniones inconsultas, a veces obligadas por las circunstancias, porque los acontecimientos que ocurren en una determinada coyuntura no dan tiempo para propiciar una instancia de deliberación, se especializan y a veces se profesionalizan en su gestión.

El manejo de todos estos frentes e instancias indica un acelerado aprendizaje institucional que las hace más eficaces pero también con mayor conciencia de su ventaja relativa e ingresan a una abierta competencia política con aquellas que pugnan por ocupar posiciones parecidas a las suyas o desplazadas abiertamente. Por lo que son frecuentes las acusaciones de malos manejos administrativos o de irregularidades o transgresiones en el manejo de fondos, a veces ciertas, otras como parte de una disputa en la que se encuentran obligadas a utilizar todos los recursos disponibles para sustentar una posición de poder, incluso recurrir a acusaciones sin fundamento.

En esta dinámica no se puede dejar un cargo y aspirar a un reemplazo ordenado, sino que se ven expuestas a una condición de extrema vulnerabilidad. Por lo que estas dirigentas incurrir en una ambigüedad no siempre advertida: asumen por su propia iniciativa una responsabilidad política y al mismo tiempo, como indica una de ellas, entre otros muchos ejemplos posibles "ha sido forzada a asumir sus cargos" y se siente "enclaustrada" ejerciéndolos. Se entremezcla el lenguaje de las obligaciones y el lenguaje de las oportunidades, el reconocimiento de valores democráticos y un talante poco concesivo y radicalmente dirigista.

Por otro lado, no se va pasando ordenadamente de un estado a otro superior. La historia política de estas dirigentas registra

en muchos casos postulaciones generalmente sin éxito, lo que las lleva a afianzarse a la federación a la que están integradas y no a intentar un relativo distanciamiento de ella. Se sienten irremplazables y bloqueadas, teniendo en cuenta un conocimiento acumulado que adquirieron en una práctica que suponía elementos democratizadores y al mismo tiempo la incapacidad de trascender el círculo de vínculos establecidos una vez que había llegado a cierto nivel de consolidación. Las limitaciones en la vida asociativa traban el ingreso a la política institucional, ambos planos debilitados se conectan cada vez menos entre sí.

Por otro lado, las ONGs se acostumbran a trabajar con un mismo grupo de referencia, lo que les otorga garantías de que los objetivos formales, mesas de coordinación, talleres, actividades de sensibilización en temas de género entre otras, serán cumplidos. Dirigentas y profesionales de organismos de intervención social se requieren recíprocamente; este vínculo no surge necesariamente de una relación de clientelismo sino del temor de cada una de las partes de deshacer relaciones establecidas por largo tiempo y probar otras nuevas. En términos rigurosamente administrativos y de evaluación de ventajas de corto plazo se arriesgan a perder en una estrategia alternativa. Además, en la medida que la práctica profesional o el trabajo de las dirigentas se desliga de un proyecto de cambio, no se necesita revisar el alcance de la influencia ni el impacto social, salvo en los términos generalmente controlables de una metodología tecnocrática. Y se puede sostener y hasta sofisticar un discurso ciudadano sobre reconocimiento de derechos y ejercicio de poder, sin darle en los hechos un contenido inclusivo e integrador por no hacerlo parte de una apropiación colectiva del conjunto de la comunidad.

En esta perspectiva el funcionamiento de una maquinaria política impulsada por el gobierno no supone necesariamente un

retroceso en la democratización social; si se tiene en cuenta que las dificultades venían desde antes; y que más allá de la relación de dependencia que se establece, ella admite diversas lecturas más complejas y con mayores matices que la que sucede con el clientelismo tradicional. En primer lugar, surge una nueva promoción de dirigentas sociales que en parte reemplaza a las tradicionales. Este proceso no ocurre por la vía institucional, o mejor dicho se manifiesta en el contraste entre una institución que se va fortaleciendo y otra que pierde progresivamente influencia.

En todo caso se asiste al surgimiento de un nuevo grupo de personas diferentes que ejercen el poder en los barrios populares de Lima, las ciudades intermedias y los caseríos. Estas mujeres no hacen una lectura unívoca, pueden tener gestos de deferencia hacia el Presidente o el encargado del Pronaa, pero valoran sus cargos no solamente de modo instrumental sino introduciendo una dimensión de reconocimiento que creen haber logrado por sus propios méritos. Una dirigente de los centros de acopio de los comedores populares organizados por el Pronaa puede reivindicar por ejemplo una dimensión de autonomía y los términos de su discurso no son diferentes en sus ideas fuerza a la de las dirigentas tradicionales. Cambian en todo caso el grupo destinatario que pretende controladas, ahora se dirige contra las ONGs reivindicando los márgenes de acción que les permite el gobierno. Puede ser un discurso justificatorio de un comportamiento pero también debe tener márgenes de convicción. No se trata solamente de un intercambio de bienes por ayuda, tal como lo interpretan generalmente las profesionales que por décadas han trabajado con un grupo de dirigentes determinado. Supone un manejo complejo en que se reconoce la manipulación pero se valoran los logros personales alcanzados. Considerar este vínculo como solamente pragmático es simplificar la explicación que exculpa de errores cometidos al que interpreta.

Quizás las viejas y las nuevas dirigentas se parezcan más de lo que generalmente se quiere reconocer; en todo caso tanto desde el gobierno como de personas que provienen del debilitado movimiento social se pretende ampliar las distancias entre unas y otras, cerrando las perspectivas de diálogo e introduciendo exclusiones con condenas establecidas de antemano. Por otro lado, este criterio de promoción no ocurre solamente entre las mujeres de sectores populares. El antropólogo Ponciano del Pino observa que los planes de desarrollo y de promoción de las comunidades propiciadas por el gobierno en zonas campesinas posibilitan el surgimiento de jóvenes dirigentes que no necesariamente van a asumir un discurso cerradamente oficialista. Resulta simplista asociar apertura del sistema político a través de la renovación de su personal, con la extensión de opiniones opositoras. En todo caso, lo que seguramente se desconoce es una noción de pluralismo de propuestas en la medida que las personas que asumen responsabilidades siguen la orientación del gobierno. No obstante, dicho esto cabe reconocer que en el escenario de los años ochenta y principios de los noventa había también una opción predefinida de lo que debían ser las opiniones de quienes tomaban una posición directiva en una organización social.

Por otro lado, la concesión de determinados beneficios en coyunturas electorales, por ejemplo ollas y cocinas para una organización, puede ser entendida como resultado de una negociación autónoma con el gobierno aunque sea a modo de justificación. El mejoramiento de la prestación del servicio ha sido una reivindicación de los comedores cualquiera sea su esquema de organización. Así, determinados actos de apoyo al gobierno pueden ser vistos como el resultado de las condiciones de un acuerdo que antes requirió una propuesta previa. No son considerados como una manipulación sino como resultado de un acuerdo, o por lo menos se entiende que la manipulación no

hubiera existido de no haberse presentado una demanda previa de la asociación, lo que permite justificar en el plano discursivo el juego de relaciones establecidas con las autoridades.

Fundamentalmente, las mujeres no entienden que han ingresado en un tipo de organización radicalmente distinto en sus características que la de los cada vez menos numerosos comedores autogestionarios. Entre las que se vinculan con el Pronaa también hay actividades de capacitación destinadas a la generación de ingresos mediante organización de microempresas, algunas de ellas con "mercados cautivos" como panaderías que proveen de ese producto a la red de comedores de una zona. El Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano puede promover desde cursos de autoestima, campañas de salud reproductiva, lucha contra la violencia familiar, del mismo modo que las ONG y probablemente -no hemos tenido oportunidad de comprobarlo-- con el mismo contenido a cargo de personal que ha recibido parecida capacitación. Por lo que los cambios pueden ser menores que aquellos que percibe un observador externo. Por otro lado, a estas mujeres les preocupa, como a las de la anterior generación, tener acceso a quienes toman las decisiones políticas, y en este sentido es razonable hacerlo con el gobierno. Lo que además, no en todos los casos, se traduce en un vínculo excluyente, ya que las organizaciones pueden hacer por ejemplo convenios de capacitación con otras instituciones públicas y privadas.

Las mujeres con mayores capacidades, iniciativas o ambiciones pueden intentar hacer una carrera política utilizando al Pronaa, manejando su propia red de contactos y ocupando cargos progresivamente de mayor responsabilidad, sin sentir que esta actitud marca una ruptura radical con los estilos de hacer política de la generación anterior. Lo percibirán más como un cambio de reivindicaciones que una modificación de las pautas de com-

portamiento. Quizás en el futuro tengan que aferrarse a los vínculos con los interlocutores seleccionados, no necesariamente por lealtades con el gobierno, sino para mantener su posición de influencia, y se acostumbren a tender vías de encuentro y de negociación con un conjunto de instituciones públicas y privadas de distinta orientación, tratando de conseguir ventajas de cada una de ellas. No sería extraño, por ejemplo, encontrar una dirigente integrada a los centros de acopio del Pronaa y participando en una Escuela de Líderes auspiciada por alguna ONG.

En todo caso, no se puede prever una trayectoria lineal de las nuevas promociones de dirigentes, como vimos que tampoco resultaba adecuado hacerlo con las más antiguas, ni suponer que van a tener una orientación proclive a éste o a cualquier gobierno, fija, inmodificable. En el conjunto de las organizaciones vecinales, ni las anteriores fueron tan autónomas ni las nuevas tan dependientes. Lo que exime de dar explicaciones sobre un supuesto viraje desde una extrema conciencia ciudadana a una arcaización de la política por una relación de clientelismo expuesta en sus rasgos más fuertes y elementales. Hay una tendencia a imponer desde fuera oposiciones radicales cuando los actores combinan distintos comportamientos en diferentes instancias. Lo que no quiere decir que no exista un sistema de castigos y recompensas más explícito establecido por el Pronaa, que va graduando el apoyo a las organizaciones según las adhesiones mostradas.

10. Los operadores políticos

La presencia de maquinarias en lugar de partidos con ideología y en el momento que el liderazgo ejercido por el presidente pierde parte de su capacidad de convocatoria, hace surgir la figura del operador político como intermediario entre las orientaciones de

las organizaciones sociales que libradas, a sus propias fuerzas, se confinarían a lo local y no tendrían acceso a las decisiones y las autoridades del gobierno central. El engranaje que trata de ser cuidadosamente armado sustituye la relación cara a cara del clientelismo. En buena parte estos operadores políticos han sido antes militantes de partidos de masas o con vocación de tal, como la izquierda y el APRA. Reivindican los conocimientos adquiridos como cuadros de organización asociados a la capacidad de movilizar personas y recursos. Sus habilidades vuelven a ser reivindicadas al servicio de un proyecto autoritario defendiendo en un nuevo contexto la idea de frentes donde actuar: barriales, provinciales, de organizaciones de supervivencia y de jóvenes o hasta de grupos de intereses creados y controlados desde el poder. Absalón Vázquez, fogueado cuadro partidario en décadas anteriores, es quien desde el gobierno está en mejores condiciones para evaluar a este personal político dispuesto a actuar y al mismo tiempo a través de estos reclutamientos armar su propio aparato político. Se crea así una estructura paralela a la del SIN, esta vez con rostro visible, que daría un sustento social no desdeñable al fujimorismo aunque Fujimori mismo se retirara del primer plano.

Algunos de ellos actúan exclusivamente por razones de conveniencia personal; otros lo hacen por razones más complejas, entre ellas la tentación de movilizar y disciplinar a la sociedad. Es lo que saben hacer, es lo que hicieron siempre. Se trata de un agudizado sentido de oportunidad para ejercer sus prácticas militantes pero no en todos los casos un oportunismo de tangibles ventajas personales.

Interpretar a los operadores no es tarea sencilla. En ellos se plantea la incapacidad de discernir en la práctica lo que acaso puedan hacer intelectualmente, que es la distinción entre medios y fines. Como se ha señalado, tomando el caso de los militantes

políticos, en teoría actúan como piensan, pero al fin involucrados en el activismo se piensa como se actúa; la práctica es el criterio orientador.²⁸ Esta situación latente en un contexto de partidos ideológicos de confrontación, se extrema cuando ya no existe proyecto de largo plazo. Puestos en esta disyuntiva puede caerse como la mayorías en el desasosiego, la incertidumbre y el desestimiento, o dejar que los medios se liberen del pesado fardo de una utopía de sociedad y se conecte en cambio con pequeños planes, con metas precisas y fáciles de lograr.

Realizada esta tarea de simplificación intelectual puede pensarse, como lo hace un operador del gobierno en Tarapoto, que tomamos entre otros ejemplos posibles, en capitalizar la tradición organizativa de la población, formar redes que esta vez serán más eficaces porque se puede llegar a las instancias de decisión con una intención reivindicacionista velada, y no planteando una confrontación.

El acercamiento a los sectores populares justifica el abandono de sus antiguas adhesiones partidarias. Sus organizaciones, en la percepción de los operadores, se habían alejado del pueblo, ellos tienen la oportunidad de vincularse nuevamente con este sujeto idealizado al que habían tomado como objeto de sus esfuerzos. Pueden articular nuevamente la práctica de conjugar realismo con antielitismo, se sienten nuevamente en su sitio.

Por otra parte, tentación de las ideas totalizadoras, pueden entender que lo que está acaeciendo en la realidad corresponde a una inexorable lógica histórica. El autoritarismo se justifica y está investido de razón porque simplemente está aconteciendo. Lo real es necesario.

28. Esta observación ha sido tomada de Maggy Le Saux: "Aspectos psicológicos de la militancia de izquierda en Chile desde 1973". En: *Proposiciones* 12, Año 6, Vol. 12. Octubre-diciembre 1986.

En muchos de estos militantes surge como una suerte de fetichismo el libro esclarecedor que justifica que se tome una nueva orientación. Así, el militante mencionado de Tarapoto encuentra a Popper como autor de cabecera, curiosamente con la confesión de que está leyendo un texto de mercadotecnia que se inspira en algunos principios de Clausewitz, el cual indica que "toda guerra se gana con una posición mayoritaria" y que es necesario crear estructuras. En este caso un nuevo partido.

Como en sus primeros tiempos de militantes, pueden seguir pensando la política como confrontación antes que negociación, o en el mejor de los casos esta negociación como una maniobra táctica en el enfrentamiento. Un operador marca en positivo una oscilación de Sendero Luminoso a Fujimori en el cual los dos resultan bien parados. Ambas partes entendían que se jugaban problemas "de vida y muerte"; mientras que otros partidos y movimientos que no entendieron en su dramatismo lo que estaba en juego se condenaron al fracaso. Se produce así una extraña conjunción de los "duros", unidos por una parecida actitud de intransigencia frente a tendencias más moderadas. Se renuncia a las ideologías pero queda la intolerancia con que las mismas se defendían. El operador puede ubicarse entonces con menos dificultades de las previstas en este nuevo contexto.

Los operadores son adherentes convencidos de Fujimori, militantes a tiempo completo, realizando o anticipándose a sus maniobras, procurando crear situaciones de hecho a su favor y al mismo tiempo jugando a la transición dentro del mismo régimen. A criterio de la mayoría de ellos, Fujimori no podía durar en el mediano plazo, como finalmente ocurrió, y los recambios se van a dar dentro de sus propias filas; esta vez no alrededor de personalidades sino de organizaciones sociales con poder, como Vamos Vecino, por ejemplo. Los operadores se disponen otra vez para un asalto ordenado hacia mayores posiciones de influen-

cia basadas en credenciales de fidelidad. Y a veces en el proceso renacen las viejas convicciones que parecían abandonadas. Un aprista que trabaja con el gobierno puede decir, por ejemplo, que no ha renunciado a sus ideales pero que ellos pueden sólo resurgir dentro de la evolución del propio régimen autoritario y no de una contraproducente oposición desde fuera que les alejaría de los resortes en donde se ejerce verdaderamente el poder. Por lo que la fidelidad presente explicaría la desafección futura y lo que es más complicado aún, sin hacer un discurso alternativo sino de continuidad con el régimen. Las lealtades se bifurcan en el momento de imaginar un escenario de transición, procurando combinar viejos y nuevos contenidos y adhesiones. El operador es un adherente entusiasta del presente autoritario del régimen pero imagina que va a actuar con un renovado protagonismo cuando las circunstancias se modifiquen. Y seguro de su condición, no tiene inconveniente de proclamar abiertamente lo que piensa.

En las nuevas condiciones que surgen desde la caída del fujimorismo y el surgimiento de un gobierno democrático de transición, estos operadores vinculados a Absalón Vásquez se encuentran en mejores condiciones que los dirigentes tradicionales del fujimorismo para seguir tratando de mantener influencia política por su relativo arraigo social. Lo que se ha superado es la expectativa de convertirse en protagonistas decisivos porque ha quedado atrás la perspectiva de un recambio ordenado dentro del mismo régimen autoritario.

11. Movimientos de independientes y lealtades políticas

La recuperación de la democracia en el Perú requiere resolver si los movimientos políticos independientes pueden sustituir a los

partidos como estructuras de mediación o bien convertirse ellos mismos en nuevos partidos. Es un problema teórico en el que no encontramos respuestas claras y se enlaza con una posible renovación de la política cuyos alcances no comprendemos bien. Se presta a afirmaciones aventuradas, a esperanzas, a dudas y a aprensiones. En la reciente coyuntura electoral el llamado Partido Solidaridad Nacional, los movimientos Somos Perú y Perú Posible aparecieron cada uno de ellos en diferentes momentos como los principales contendores a la re-reelección presidencial de Fujimori. La oposición democrática ahora liderada por Toledo se hace visible como consecuencia, en parte contingente, de las campañas dirigidas contra otras opciones tanto o más que por las potencialidades de un nuevo liderazgo y una nueva alternativa. Visto en perspectiva realista, la defensa de las instituciones democráticas ha sido resultado de la polarización provocada por una campaña electoral fraudulenta. Cuestionadas exigía ir más allá de los comicios mismos. Obligaba a hacer explícito el andamiaje del sistema mismo. El movimiento de Toledo tuvo que tomar como bandera la defensa de la democracia y el cambio, tema sobre el que no había incidido en su campaña y en cierta manera se obligó a ir asumiéndolo, en medio de las circunstancias que pusieron este problema en primera línea. No se trata de juzgar la sinceridad de las convicciones sino las circunstancias que hicieron que ellas se expresaran.

No sabemos si estos grupos u otros que surjan en el futuro podrán adquirir niveles apreciables de organización. Por ahora impresionan como frágiles y volátiles. En primer lugar por dificultades o renuencias a institucionalizarse, salvo como una proclama retórica o una imprecisa aspiración de futuro. La toma de decisiones, incluida la regulación de ingresos al movimiento, queda reservada al líder ya su entorno de confianza, grupo que en principio no tiene otra legitimación que la de su cercanía al conductor. No

hay entonces criterios para reconocer las jerarquías establecidas. Tampoco se sabe las razones por las que algunas personas se acercan al movimiento, si es por convencimiento de la necesidad de una perspectiva de cambio, o por iniciar apresuradamente una carrera política. Direcciones y postulantes son improvisados en su surgimiento y siguen improvisando en la marcha del proceso. Hay conversaciones, cambios de ideas apresuradas pero no se puede generar una estructura que permite un diálogo bajo parámetros conocidos. No existen ni las convenciones de la democracia ni las del autoritarismo. Por lo que el marco de relaciones establecido entre los seguidores del movimiento es imprevisible y discrecional.

En casos que exista una voluntad de constitución de una organización política se teme que una definición programática disperse más que una y que criterios democráticos claramente establecidos de elección de autoridades provoquen tendencias centrífugas más que aquellas dirigidas a la concentración de esfuerzos. Pareciera que la instancia de articulación política no suprimiera la atomización sino que tendiera a expandida.

Al margen de la discusión un tanto estereotipada y a veces banal sobre la irrelevancia de la formulación de programas en una nueva política mediática, la capacidad de plantear ideas claras y precisas en los temas de la agenda crea dentro de una organización política un margen de inteligibilidad, al saberse con un grado razonable de precisión sobre lo que se está hablando. Este hecho favorece el establecimiento de compromisos, entre otros motivos porque en función de lo proyectado se tiene idea de lo que puede esperarse y exigirse de cada uno de los participantes. Sujetarse a las presiones de cada coyuntura contribuye a la inestabilidad y define una presentación errática de planteamientos, que sacrifica la ventaja de largo plazo por la sujeción al momento. Este hecho le quita estabilidad a la organización. Y

también es un proceso percibido por los ciudadanos, que por ello toman opciones poco entusiastas y variables.

Paradójicamente mientras los movimientos reivindican el predominio de lo técnico sobre lo político, los expertos son los últimos en ser reclutados, en el momento de tener que salir de los planteamientos generales y las declaraciones de intenciones y exponer con algún detalle sus ideas. Este hecho precipita un clima de rumores con cierto aire conspirativo que tiene más que ver con el ambiente creado por largos años de funcionamiento del autoritarismo que con una renovación democrática. Las personas que asesoran actúan más como un equipo creado a propósito en una situación de riesgo y contingencia, adaptándose a un contexto en lo que algo se tiene que decir sobre política económica y social, más que consecuencia de un proceso de reflexión colectiva que combine proyecciones de largo plazo con impulsos democratizadores. Recordemos que Silva Ruete, ahora ministro de Economía del gobierno transitorio, aparece como el vocero del Plan de Gobierno de Somos Perú muchos meses después de organizado el grupo. Es el asesor de un político, no un ideólogo destacado de un grupo. Vale tanto o tan poco como eso. El economista Hernán Garrido Lecca ingresa con parecidos propósitos a Solidaridad Nacional y al margen de juzgar las razones de su rápido retiro, su desvinculación se asocia probablemente a incongruencias y distanciamientos surgidos de la circunstancia de ingresar de golpe a un escenario con un conjunto de reglas improvisadas que no conocía. Ni su entrada ni su retiro tienen una exigencia de justificación como ocurriría en un partido político.

Gustavo Gorriti y Álvaro Vargas Llosa aparecen asesorando la campaña de Toledo como acto de compromiso y no simple asesoramiento profesional, o ayudando a establecer una vasta red de relaciones internacionales, sólo a partir de la segunda

vuelta. De no ocurrir este escenario de confrontación en tomo a libertades e instituciones democráticas, probablemente no se hubiera dado este acercamiento a Toledo, o este hecho no hubiera adquirido mayor relevancia.

Establecidas así las cosas importa saber más quién interviene, que lo que se está presentando como propuesta o mejor dicho, una vez conocido el actor se conoce el probable planteamiento y así --en una lógica que viéndola bien está contaminada de fujimorismo-- siguiendo trayectorias y personas podemos identificar una política. La tendencia es la casi prosecución de lo inmediato concentrándose los esfuerzos en ganar a la opinión pública tal como ella se expresa en las encuestas. Y esta opinión pública tendrá en parte la misma volatilidad de la que aquellos que quisieron seguida de cerca. No existe un espacio de afirmación y lo ganado en un determinado momento puede perderse en un breve tiempo.

En contraste con estos movimientos independientes y por razones diferentes en cada caso los liderazgos autoritarios consolidados y los partidos políticos buscan un enraizamiento social que —sin dejar de atender los temas asociados a la imagen que se quiere proyectar a través de los medios— supone una lectura de la realidad que atiende a un análisis de correlaciones de fuerzas y dotarse además de una mínima estructura organizativa que permita adhesiones estables y el eslabonamiento de una cadena de intermediaciones que otorgue márgenes de seguridad, de identificación y de control respecto a los adherentes y seguidores.

En los movimientos políticos de independientes se produce una desestabilización entre los incentivos selectivos y los colectivos, a favor de los primeros. Como señala Panebianco: "la teoría de los incentivos selectivos explica bastante bien el comportamiento de las élites que compiten entre sí dentro del partido

por el control de los cargos así como de los clientes que intercambian votos contra beneficios materiales y de ciertos sectores de la militancia que pretenden ascender en su carrera. Como máximo los incentivos selectivos (a base de servicios colaterales de ayuda, de organización del tiempo libre, etc.) pueden reforzar pero no crear la identificación que es más bien resultado de los incentivos colectivos.²⁹

Los movimientos independientes en el Perú no se han creado en una red de solidaridades mutuas que permita afirmar lealtades y plasmar una idea de renovación. Los incentivos colectivos suponen adhesiones a fines definidos por la organización y que tienen un margen amplio de incondicionalidad. Hacen de la política una actividad identificante. Estos fines pueden diluirse con la profesionalización política pero son un necesario punto de partida para una organización. Afirman un sentimiento de pertenencia y restringen los márgenes de libertad de dirigentes y de seguidores. Sucede, en cambio con los nuevos movimientos en el Perú, que los dirigentes pueden hacer lo que se les ocurra y sus adherentes, desprovistos de identificaciones simbólicas y de códigos interpretativos estables, desistir o desvincularse, de acuerdo a expectativas cumplidas o fracasadas respecto a la posición a la quieren aspirar. La ideología no es solamente una propuesta de sociedad, un programa de acción sino también un mecanismo de rendición de cuentas que hace previsible lo que cada persona puede hacer. Curiosamente, termina siendo mucho más pragmática que los bruscos cambios de orientación porque contienen una utopía de "verdad política" a la que cada parte debe atenerse si no quiere afrontar los costos de la modificación de su actitud.

29. Angelo Panebianco. *Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1982.

Devaluado un proyecto en improvisada plataforma electoral no puede crear un lazo vinculante.

La falta de un núcleo reflexivo en los movimientos no sólo los desgasta internamente sino que les dificulta anticipar con claridad los movimientos de sus adversarios. Corren día a día por el almanaque, cada jornada se explica por la anterior y no pueden o no quieren mirar más allá. Constituido un sistema de intereses antes que un sistema de solidaridad, les resulta extremadamente complejo establecer un cimiento común para institucionalizarse. Pasan a ser un movimiento de séquito pero los notables no articulan. Recurrimos otra vez a Panebianco, quien señala que "la legitimidad del liderazgo está en función de su capacidad para distribuir bienes públicos (incentivos colectivos) y bienes privados (incentivos selectivos). Si el flujo de beneficios se interrumpe, la organización entra automáticamente en crisis, estallarán revueltas, los líderes serán puestos en tela de juicio cada vez más duramente y se multiplicarán las maniobras para provocar un cambio de guardia y salvar así la organización".³⁰ En realidad el razonamiento de Panebianco supone un estadio superior al de los movimientos independientes. Hay líderes, flujos y capacidades de reemplazo. En el Perú en cambio estos movimientos comienzan a vivir todo este conjunto de problemas asociados a lógicas de identificaciones y de intereses cuando la organización no ha terminado por articularse. Pueden emerger, expandirse y estallar sin que se esté en condiciones de saber cuándo ocurrieron cada uno de estos momentos; el tiempo es demasiado apretado, todo ocurre muy rápido como para marcar etapas.

Estos movimientos de independientes no pueden entonces renovar sus élites personalizadas ni, por lo general, asegurar leal-

30. Angelo Panebianco. *Ob.cit.*

tades estables. Quienes ingresan a ellos están por lo general predisuestos a asumir una actitud reticente. Ello se debe a que tienen incertidumbre de la posición que van a ocupar y no están en condiciones de definir una estrategia de afirmación personal dentro de la organización por inexistencia de instancias institucionalizadas. Un ejemplo entre muchos posibles: una promotora de una ONG de provincia consiguió un lugar poco expectante en Solidaridad Nacional yendo a hablar directamente con Castañeda Lossio, haciéndole conocer antecedentes y vínculos. El año anterior se rumoreaba que había sido considerada para ocupar la dirección del CTAR, con una orientación, por supuesto, gobiernista. Quizás haya en este caso algo más que oportunismo político. Ocurre que los caminos de realización personal y política se comienzan a entremezclar y los deslindes de posiciones entre los distintos movimientos, fueron por lo menos en las primeras etapas, poco claros. Cada uno puede imaginar acceder a una posición de privilegio y la mayoría intuye también un brusco cierre de puertas. La falta de adhesiones convencidas se debe en parte, también, a que sólo unos pocos tienen acceso a quienes toman las decisiones, y de existir ese privilegio, con frecuencia no tiene una noción precisa de cuánto tiempo puede durar. A ello se le agrega una incertidumbre adicional: las dudas sobre las perspectivas de consolidación del movimiento al que se han integrado y la falta de incentivos para correr riesgos por la aludida debilidad de lazos vinculantes.

Resulta inevitable que en estos movimientos se produzcan situaciones de bloqueos. El jefe o el candidato duda con frecuencia de las capacidades de influencia del representante local y éste a su vez de la capacidad de convocatoria que puede alcanzar el jefe o candidato. Las consecuencias pueden ser postergaciones inesperadas de quienes habían tenido una posición expectante o bien deserciones de los miembros de estos movimientos.

Como resultado de la carencia de propuestas, de la falta de organicidad y del carácter provisorio de las lealtades, las discrepancias carecen de un marco de racionalización para procesadas y toman entonces formas personalizadas, siendo a menudo indefinible el límite que separa los enconos, las ideas y los intereses que, por lo general, terminan superponiéndose. En el proceso se van perdiendo las razones desde las cuales evaluar por qué se ha sido finalmente elegido y a quién se representa. Al margen de la sinceridad de sus argumentos, el desertor del Frente Independiente Moralizador (FIM) Waldo Ríos, entiende que ha sido electo, no para defender una propuesta integral sino un interés determinado, el canon minero para Huaraz, y sólo puede conseguirlo pasándose a las filas del oficialismo. Por lo mismo, los consensos entre dirigencias y representantes de los movimientos de independientes son también precarios y pocas veces definen un referente estable de entendimiento. Por lo contrario, los acuerdos se establecen y se deshacen con facilidad obligando a continuos recomienzos.

La imprevisibilidad, asociada a esta falta de un contexto de racionalización, crea aspiraciones de los miembros de los movimientos que no están en condiciones de evaluar con realismo. La: indefiniciones en el cuadro que están viviendo pueden hacer que la mayoría considere plausible en algún momento llegar a ocupar una posición de preeminencia contando con pocos recursos materiales o de influencia. Esta situación permite sostener adhesiones por un tiempo, que pueden ser seguidas por un abandono de la organización. Las reglas establecidas precipitan una conducta oportunista de corto plazo. Los movimientos de independientes no terminan con frecuencia de armarse involucrados como están en esta dinámica de ingresos y deserciones.

No deberle nada a nadie es un equívoco signo de fortaleza en política. Porque puede ser tanto expresión de un éxito

personal, como de la falta de instituciones que protejan. En lugar de ideas, una adecuada presentación personal; en lugar de un profesional orientado a la política, el dueño de una mediana empresa o un ex rector de universidad de provincias que tiene solidaridades de contados alcances y casi siempre poco dispuestas a comprometerse. Las nuevas élites políticas son más proclives a cambios de posiciones que las antiguas. El concepto de lealtad pierde vigencia cuando no se encuentra la ventaja de expresar la voz en una organización, si la propia empresa política no tiene un modelo de gestión y de objetivos bien precisado. No hay que defender ni quiénes lo defiendan. Queda nada más ni nada menos que esgrimir los principios frente a eventuales chantajes por parte del autoritarismo; no hay más allá de ellos otra línea de protección. La pudieron establecer quienes tuvieron trayectorias partidarias previas, puestos como congresistas y alcaldes, tareas cumplidas de acusadores y de acusados como ocurre por lo general con los que han sido electos por los movimientos Somos Perú o Unión por el Perú. Los otros llegaron aluvionalmente al poder, convocados sin indagar convicciones ni establecer compromisos, entendiendo que eran acogidos más por su probable influencia personal que por sus ideas, que ni siquiera necesitaron pensar y exponer. Por esta razón la condición de tráfuga es tan frecuente y al mismo tiempo tan previsible. Por un lado, el gobierno autoritario con su maquinaria judicial y tributaria dispuesta a buscar los puntos débiles de personas que emprendieron alguna actividad privada y junto a la amenaza la oferta de prebendas. Por el otro, los movimientos en fase de constitución poco pueden hacer para defenderlos y no conocen lo suficiente al amenazado para ofrecerle su confianza. Puestas así las cosas, sin el marco legitimador de una vida partidaria desde el cual defenderse, la deserción puede ser una opción aconsejable. Justifica, además, una inversión de tiempo y a veces de dinero que puede

ser resarcida por el gobierno incurriendo desde el soborno directo a facilitarle contactos y redes de influencia con las que pueden renovar los vínculos con sus electores o crear otros nuevos. Esta anulación de un lazo representativo le quita asidero a un juego de mayorías y minorías en el congreso dentro de marcos previsibles, tergiversa la voluntad de los votantes y permite que el autoritarismo sea el punto de atracción al que confluyen los representantes más débiles, más amenazados o más dispuestos a sacar una rápida ventaja personal al precio de un desprestigio que deja de ser un estigma en la medida que entra dentro de la lógica de un comportamiento generalizado.

En esta línea puede entenderse no sólo el soborno de Montesinos al congresista electo Alberto Kouri sino hasta la falta de buenos modales, rodeos, subterfugios con los que se realiza la operación de compraventa. El compromiso de Kouri con Perú Posible fue débil desde el comienzo. No tenía que explicar a otros, y ni siquiera a sí mismo, su cambio de opción. Había llegado literalmente por su propio esfuerzo a ocupar una posición en el mercado y podía hacerla valer. O en la hipótesis más pesimista, nadie podía salvarlo de amenazas y chantajes. Los tráfugas oscilaron entre la sensación de peligro y la sensación de oportunidad.

Desde este punto de vista, la fragilidad de los representantes de los movimientos de independientes expresaba la capacidad de la camarilla nucleada en el autoritarismo. Ella no podía controlar al conjunto de la sociedad pero sí conocer a quiénes presionar, por qué razones y en qué momentos. Estaban expuestos a ser derrotados por un vasto movimiento social pero no por una paulatina renovación del personal político porque con cada uno de estos nuevos integrantes puede ubicarse el punto justo donde ejercer la fuerza para trastocar sus voluntades. El sistema parecía resistirse al gradualismo. Su lógica no permitía pequeños reem-

plazos. No podía actuar sino en mayoría y por un tiempo y contra los pronósticos que podían hacerse a partir del resultado de los comicios del 9 de abril del 2000 pudo logrado, hasta que llegó la situación de descalabro del régimen. Y queda pendiente la ambigüedad si estos movimientos de independientes son aquellos llamados a sustituir al autoritarismo o ayudan a su vigencia más allá de la voluntad de sus principales dirigentes.

La fragmentación social le quita dramatismo a los ingresos y salidas en las opciones sobre las que no puede ejercerse mecanismos de rendición de cuentas. El principio que los represente lo son de la nación surgió en el constitucionalismo liberal y en el conservador por el temor de la presión que podían ejercer los intereses particulares, de los pequeños poderes locales de los propietarios, primero, de los partidos de masas, después, y alentaba la idea de una deliberación sin restricciones ni condicionamientos entre pares.

En el escenario actual se produce una perversa inversión de estos principios. No hay que defenderse de los intereses particulares porque sólo hay intereses particulares, se busca clausurar el ámbito mismo de formación de ideas en lugar de facilitar las condiciones para su discusión libre. La política representativa queda encerrada en el círculo del autoritarismo. Los movimientos de independientes llegaron tan lejos como lo permitieron sus precarios márgenes de formación. En estas condiciones, sólo el fortalecimiento de actores sociales puede provocar cambios en los actores políticos.

12. El autoritarismo acosado

En este trabajo hemos expuesto las razones por las que entendíamos que este régimen autoritario no terminaba de afirmarse y

asegurar condiciones de gobernabilidad. Resultaba previsible suponer que al no tener alianzas estables y concentrar el poder en pocas personas -lo que suponía vigilancia sobre seguidores y opositores y manejo excluyente de las cada vez más visibles redes de corrupción- se produjeran filtraciones de información. Comenzaron a abrirse expedientes a los que se quería dar rango de secreto de Estado, se fue erosionando la confianza de quienes buscaban beneficios del sistema y sentían que no les llegaba la oportunidad, y la oposición ganaba fuerza manejándose en dos planos, el de la denuncia y el de la presentación de alternativas económicas y sociales ante un modelo que presentaba fisuras, fracasos e incongruencias. El desenlace se precipitó en términos de una tragedia para el gobierno en que como en *Macbeth* ocurrió una muerte espantosa antes que un espanto sin fin. Montesinos interviniendo en triangulaciones en el tráfico de armas jugó fuerte, quiso sacar beneficios y probablemente cumplir una misión histórica a su medida en el intrincado laberinto en el que se encuentran los países andinos. Rebasó así los umbrales de tolerancia de Washington que hasta entonces, visto en perspectiva, habían sido extremadamente altos en relación a su antiguo agente de inteligencia. El video que muestra a Montesinos sobornando a Kouri es escandaloso hasta por su trivialidad. Se realiza la operación de la compra y venta sin guardar las buenas maneras, de modo que no quedaran dudas de quién era el súbdito en la relación. Fue el pretexto buscado cuando ya se le había bajado el pulgar al asesor.

Vale la pena detenerse en los detalles que explican el anticipo de elecciones de Fujimori. Conviene, sin embargo, advertir que hasta ese momento el gobernante tenía la ilusión de estar ante una situación relativamente controlable. Es cierto, fue demasiado ostensible la transgresión de las reglas durante las elecciones. Un régimen más afianzado o que tuviera menos que

perder hubiera actuado de modo distinto. El objetivo de ganar las elecciones habría sido emprendido con una utilización menos evidente de los fondos del Estado. Podía establecer controles eficaces sin necesidad de una intervención directa y sin matices en la programación de los medios de comunicación. Estaba en condiciones de conseguir el apoyo popular en base a sus políticas de asistencia social sin necesidad de recurrir a un tráfico tan evidente de influencias que incluía sanciones explícitas a las organizaciones que se mostraran renuentes a prestarse a la campaña de movilización del gobierno. Finalmente, el SIN podía influir en la coyuntura sin recurrir de modo ostensible a la amenaza y al chantaje. Si el manejo fue así, tan desembozado, se debía a que la derrota en las elecciones no podía aceptarse siquiera como una probabilidad lejana. Dejar el poder, y ahora se comprende mejor, suponía estar expuestos a denuncias de corrupción a las que no se estaba en condiciones de responder. Desde esta perspectiva no se podía arriesgar lo mínimo y enfrentar el margen de aleatoriedad que tienen los comicios aun en condiciones tan favorables para el gobierno, cuando queda la duda al confrontarse con una ciudadanía tan volátil en sus opciones. Por esta razón el proceso electoral y las elecciones mismas tenían que ser fraudulentas.

El gobierno dio una imagen impresentable ante la comunidad internacional y los acuerdos de la Asamblea de Windsor lo obligaron a negociar. La obtención de una mayoría parlamentaria mediante compra y chantaje, pero también, como vimos, por la incapacidad de los movimientos independientes de generar lealtades estables, podía resolver ordenadamente la mayoría de puntos en debate, entre ellos la reforma del Poder Judicial, el nombramiento de un nuevo Tribunal Constitucional, reformas electorales, y cambios en el Servicio de Inteligencia que se limitaran a amagues de modificaciones institucionales sin afectar lo que había sido hasta entonces su estilo de intervención. En el

caso del empresario de televisión Baruch Ivcher podía intentar adormecer el problema separándolo en dos etapas, el de la nacionalidad que requiere una decisión política donde no hay lugar para los subterfugios y el de la resolución sobre la propiedad de las acciones del canal en que se supeditaba en teoría a un fuero judicial donde el Ejecutivo podía influir decididamente en las sentencias finales.

El tráfico de armas desde Jordania al Perú para abastecer a las FARC, en la que estaba comprometido el ejército peruano era la tercera operación emprendida con este objetivo,³¹ habiéndose realizado intercambios de información sobre estos imprevisos vuelos entre militares colombianos y peruanos en setiembre de 1999 y junio del 2000. El Perú entraba de lleno a actuar política y militarmente en la convulsionada región andina caracterizada por la presencia de movimientos guerrilleros en Colombia, levantamientos indígenas en Ecuador, resurgimiento de las protestas campesinas en Bolivia y eclosión de un movimiento nacionalista formado inicialmente por militares de baja graduación en Venezuela. La operación ilícita del ejército peruano atacaba centralmente la estrategia privilegiada de Washington en la región, que es el Plan Colombia. Puede darse diversas interpretaciones sobre esta línea de acción. De atenemos a la interpretación del subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, Thomas Pickering, su puesta en marcha obligaría a las FARC a sentarse en la mesa de negociación, comprometiéndolas además en la erradicación y sustitución de

31. Los detalles sobre militares colombianos y peruanos que intercambiaban información sobre operaciones de tráfico de armas fueron informados con anticipación por la revista colombiana Cambio, de acuerdo a un artículo de la revista Caretas del 31 de agosto del 2000.

cultivos.³² Las preocupaciones entre los que se mueven dentro de esta línea de interpretación es garantizar que se respetan los derechos humanos, advertir sobre los peligros ambientales y para la salud del que se derivan del uso de microherbicidas, señalar la necesidad de extender una ayuda económica, política, social y humanitaria y dar cuenta de los riesgos de emprender medidas inconsultas sin participación de la población afectada.

Otros autores interpretan que se trata de una intervención militar de más amplios alcances, dirigida a controlar la región, lo que explicaría que al mismo tiempo se instale una base aérea estadounidense en el puerto ecuatoriano de Manta y una base de lanzamiento de cohetes en El Esequibo, territorio en litigio entre Venezuela y Guyana. Este escenario explicaría la reacción del canciller brasileño Luiz Felipe Lampreia, quien previendo una intensificación del conflicto en el año 2002, teme "el empleo de nuestro territorio como santuario, e incluso, la realización de acciones militares colombianas en nuestro país con fines de persecución". El acuerdo de cooperación militar establecido en agosto del 2000 entre Brasil y Venezuela se ubicaría en una línea de respuesta a una creciente intervención estadounidense.³³

Más allá de las opiniones que se puedan tener sobre los alcances del Plan Colombia, existe consenso sobre su importancia estratégica para la región. Queda por saber por qué Fujimori y Montesinos decidieron caminar al borde del abismo. Las explicaciones pueden ir desde el deseo de recuperar protagonismo, dar señales de posibles desplazamientos en sus alianzas o, en una línea más afín a la psicología, pensar que el asesor se había encerrado

32. Esta información ha sido tomada del artículo de Fernando Cepeda: «Los diamantes ensangrentados» de la revista *Ideele* N° 131, setiembre del 2000.

33. Luis Bilbao «El Plan Colombia de Estados Unidos. Militarización de la política». En: *Le Monde Diplomatique*. Setiembre 2000.

en el círculo de su propio poder, de la información que manejaba, perdiendo los contornos de hasta dónde podía llegar su influencia consideraba que ésta, al margen de cualquier presión, viniera de donde viniera, incluso podía desafiar a las agencias del gobierno norteamericano. Y su caída precipita la renuncia de Fujimori, conecedor o no de todas estas maniobras, quien ante el peso de futuras acusaciones, debe inevitablemente abandonar su cargo de Presidente.

El viaje a Panamá, el retorno al Perú, la información suministrada por el gobierno suizo sobre sus cuentas bancarias, indican que el agente de la CIA había caído en desgracia. Queda al descubierto una vasta red de corrupción vinculada a las comisiones obtenidas en compra de armamentos, cupos cobrados a narco, traficantes, chantajes utilizando al Poder Judicial, defraudación tributaria, manejos irregulares del presupuesto destinado a la defensa nacional, probablemente beneficios obtenidos en el proceso de privatización de empresas públicas. Aun cuando pueda aducirse la falta de coordinación que en ocasiones se registra entre las distintas agencias del gobierno norteamericano, estas circunstancias, por lo menos en sus líneas generales, debieron ser conocidas por todas ellas y, sin embargo, pasadas por alto. Mientras grupos significativos vinculados a derechos humanos, apoyo a la democracia y de supervisión electoral estadounidenses trataban de influir para que en el Perú se instalara el Estado de Derecho, los círculos dirigenciales tomaban en cuenta básicamente la gobernabilidad del país, lo que les llevaba a tomar una actitud de crítica mesurada respecto a Fujimori. En parte por la oposición política y social pero sobre todo por factores internacionales, esta idea de estabilidad ya no puede sostenerse.

Aun cuando se quiera mantener una posición optimista destacando el terco enfrentamiento de la oposición ante un proceso electoral fraudulento y la capacidad de ella de moverse con

inusitada soltura en el frente interno y en el escenario internacional, no se llega ni de cerca en el caso peruano a lo que Huntington caracteriza como un escenario de ruptura.³⁴ En efecto, no se asiste a la caída de un grupo ultraconservador aislado en el gobierno porque la resistencia social lo haya conducido a un juego imposible de permanencia llevándolo a su derrota inevitable.

Es recién en la última etapa de noviembre del 2000 y por la evidencia de la impresionante maquinaria de corrupción de Montesinos y las responsabilidades inocultables de Fujimori, que la oposición toma por primera vez la iniciativa con capacidad de imponerse. El autoritarismo quedó envuelto en sus propias redes de corrupción, no pudo evitar que se infiltraran informaciones, incluso a cargo de organismos de inteligencia del exterior y sus principales protagonistas tuvieron que renunciar lejos del país o refugiarse en la clandestinidad en la que estaban acostumbrados a moverse. Esta vez no para ejercer el poder sino para evitar que las autoridades a las que acostumbraban controlar, sustituidas por otras nuevas, los sometan a los fueros de un Poder Judicial actuando con criterios jurídicos. Había llegado el final del juego.

13. La recuperación de la sociedad civil

Si del lado del régimen puede advertirse un escenario de tierra arrasada, las fuerzas democráticas cuentan con algunos recursos para reconstruir la sociedad civil y el sistema de partidos. Es débil todavía lo que se ha acumulado y confusas las estrategias a seguir para pensar en el largo plazo. Se trata de emprender una tarea

34. Samuel Huntington. *La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX*. Buenos Aires: Paidós, 1994.

con voluntad e inteligencia y caminando a paso forzado. Según Avritzer, en la historia de la mayoría de países de América Latina, mientras se extendían los discursos sobre la autonomía de derechos y la importancia de los debates públicos, éstos en los hechos estaban ausentes en las prácticas políticas dominantes.³⁵ En los últimos años se realizó en el país un aprendizaje sobre las potencialidades del sistema legal como instancia para extender la vigencia de la sociedad civil, tanto como lugar de enfrentamiento con el gobierno como ámbito para promover espacios de encuentro de individuos sin la intermediación y al margen de la autoridad pública. No constituyeron logros espectaculares, por cierto, pero superaron en parte la fragmentación social y una sensación de desaliento acerca de las perspectivas de una acción política ante un régimen que parecía dominarlo todo, por la represión y el control, que en algún momento llegó a ser predominante.

Con sus raleadas fuerzas el movimiento sindical plantea por primera vez con insistencia una reivindicación democrática que se antepone al discurso maximalista y las demandas puntuales. Los colegios profesionales comprenden que las demandas de cada una de sus corporaciones requieren un marco jurídico que brinde las garantías, seguridades y oportunidades del Estado de Derecho. Los movimientos regionales convocan a viejos y nuevos actores sociales tomando una diversidad que hay que rescatar en la multiplicidad de sus expresiones en distintas provincias del país. Desde una pretensión purista en lo teórico puede señalarse la vaguedad de sus demandas de defensa de la descentralización, pero esta imprecisión finalmente tiene la ventaja que obliga-

35. Leonardo Avritzer. "Modelos de sociedad civil: un análisis de la especificidad del caso brasileño". En: Alberto J. Olvera (coordinador). *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*. El Colegio de México, 1999.

damente los lleva a discutir y buscar nuevas definiciones, quizás más creativas y seguramente más democráticas que los paquetes programados de los organismos de cooperación preocupados por monitorear la evolución en los procesos de participación y de construir ciudadanía en grupos acotados de la población. En nuestras conversaciones con estos nuevos dirigentes hemos comprobado persistencias de un discurso tradicional y reconocimiento de la necesidad de buscar nuevos interlocutores y de innovar procedimientos y propuestas. Sienten que ha llegado el momento de proponer y de escuchar, sacudiéndose de prejuicios y de un eco que se va apagando de viejas polémicas. Si como primera línea de defensa recurren a la retórica, ante la presencia de un nuevo interlocutor fácilmente se desplazan al problema de plantearse nuevas preguntas sobre su ubicación en una sociedad que está cambiando.

Lo más importante es una disposición ciudadana sin un foco asociativo preciso en la que emerge una disposición contestataria, al tiempo que se generan sentidos comunes compartidos acerca del intolerable carácter autoritario del régimen. En ocasiones toma como referente el liderazgo de Toledo, pero claramente esa conducción es aceptada y trascendida a la vez.

Son manifestaciones de defensa de los principios éticos en la sociedad civil que expresan la resistencia a la acción instrumental que busca que se acepte el ejercicio inevitable del poder y los principios impositivos del mercado, fortaleciendo en cambio espacios de encuentro y definiendo inequívocamente autonomías personales y sociales que acogen, aun con los problemas de nuestra sociedad, los valores de una modernidad relativamente avanzada. Como ha ocurrido en otros procesos, una de las primeras expresiones de esta orientación hacia el cambio son los artistas que recurren a distintas expresiones de resistencia simbólica, la más conocida es la del lavado de banderas. Sus expre-

siones van más lejos que las palabras que se pueden balbucear porque la indignación no siempre es elocuente, se pierde y trastabilla en su propio furor. Ayudan a expresar nuestros sentimientos y a que otros los comprendan. Logran inesperadas complicidades en quienes de otra manera no se hubieran podido encontrar.

Las nuevas generaciones de estudiantes, por su parte, abandonan en algunos de sus grupos un discurso indiferente y auto-centrado y se movilizan también, siguiendo una prédica en donde predominan los valores democráticos. Reconociendo lo auspicioso de estas iniciativas y pensando en una reconstrucción democrática la tarea es evitar que esta actitud ética sea sólo de corto alcance. Se corre el riesgo de que valgan para un momento político de salida de un régimen corrupto y quede exhausta en sus energías y propósitos una vez que ha pasado el momento más álgido de una coyuntura crítica. Creo advertir en estos movimientos un rechazo a los políticos que no logra zafarse del clima intelectual que impuso el fujimorismo, aún entre sus más convencidos opositores. Y que extremando la idea de la democracia como una utopía de consenso sin fisuras, estos nuevos actores rechacen su dimensión pluralista, aquella en donde se enfrentan proyectos de sociedad pero también intereses de grupo y hasta personales; que, en definitiva, a los nuevos grupos les cueste aceptar el conflicto aun cuando en el futuro éste se encuentre institucionalizado. Esta situación plantea algunos problemas cruciales, el primero de ellos buscar que estos movimientos se inserten y contribuyan a renovar la política. Sin una activa discusión los recién ingresados en la vida pública pueden caer en una actitud de desencanto, o en la postura elitista de considerarse una suerte de reserva moral al margen de las potencialidades y las miserias de quienes aspiran a construir otra vez la democracia.

Estos meses fueron también de una activa movilización de la sociedad civil en Lima y provincias. Las que se realizaron entre

la primera y la segunda vuelta consiguieron cuestionar la legitimidad del tercer gobierno de Fujimori, impidieron por lo pronto que se proclamara ganador en abril del 2000. Pero visto el proceso en su conjunto no se tomó el cielo por asalto, por decirlo de alguna manera. Consiguieron una amplia convocatoria, sin alcanzar la abrumadora contundencia que tuvieron en otros países de América Latina o en Europa del Este cuando se quería precipitar la caída de un régimen. Y los sucesos que ocurrieron el 28 de julio del 2000 en Lima con el incendio del Banco de la Nación no respondieron a una irresistible espontaneidad de grupos que no podían soportar más el estado de cosas existente o una decisión calculada en sus consecuencias por una dirección que estaba buscando precipitar alternativas, dueña de una situación. Surgió como una bien urdida provocación desde el poder, que sabía con precisión realizar maniobras de infiltración y calcular los niveles de violencia o transgresión a los que podían llegar aquellos que todavía se movilizaban. El examen desapasionado de estas circunstancias no significa desvalorizar que se haya llegado al escenario de la calle. Ellos valieron por sí mismos como expresión de resistencia e influyeron también decisivamente en los escenarios de negociación impulsados por la OEA. Por otra parte, frente a razonamientos que hablan de que se había superado una etapa "movimientista" y se ingresaba a otra mediática, en las circunstancias que estaba viviendo el Perú, la falta de instituciones mediadoras obligaba a que las personas —más allá de que fueran convocadas por el liderazgo de Toledo— buscaran momentos privilegiados de encuentro y reconocimiento público en el acto callejero, a la vez que los medios masivos de señal abierta ocultaban concertadamente noticias y procesos que no le convenían al gobierno. Sinesio López observa que si existió una influencia mediática, ésta se dio a través de un periodismo de investigación y denuncia que se abrió paso en circunstancias

adversas en periódicos como *El Comercio*, *La República* y *Liberalización*, a través de un canal de cable y algunas radioemisoras.

O'Donnell y Schmitter teorizando sobre las transiciones, señalan que la movilización es un recurso cuando el régimen autoritario se liberaliza, pero cuando se ingresa a una fase de negociación se pierden incentivos para realizadas y esa misma movilización obstaculiza el acuerdo entre las élites.³⁶ Como observa Olvera, en el razonamiento de estos autores sobre las transformaciones de un sistema político, la alusión a la sociedad civil se limita a una etapa primera y limitada a la protesta y no existe una preocupación por entender sus vías de institucionalización y permanencia.³⁷ Probablemente la influencia de estas concepciones tan centradas en última instancia en aquello que pueden hacer las élites, explica que hayamos llegado en la mayoría de América Latina a democracias de baja calidad en términos de inclusión social y delineamiento de un horizonte de cambios y que sigan vigentes problemas de consolidación.

Tampoco se puede aspirar, es verdad, a un estado de movilización permanente. Quizás, como ocurriera en algunos países del Este, viviendo como estamos en una sociedad fragmentada, se tenga que recurrir a foros y espacios de encuentro entre personas de distinta procedencia de clase, género, generación y etnia para no caer en círculos de aislamiento que faciliten que la única vía de articulación disponible quede en el albedrío de quien ejerce la autoridad, corriéndose el riesgo de repetir la historia de imposición y autoritarismo. Pensar en recrear una esfera pública no es

36. Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter. "Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas". En: *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós, 1988.

37. Alberto J. Olvera. "Los modos de la recuperación contemporánea de la idea de sociedad civil". En Olvera, *ob.cit.*

entonces una aspiración desde la filosofía política ni una simple apuesta a la innovación sino una estrategia a la vez compleja y razonable. Un proceso de integración social requiere del conocimiento mutuo entre personas de distinta condición que pueden comprender lo que les une y el alcance de las diferencias, para intentar superar aquellas que surgen de la desigualdad, y enriquecer a la vez interpretaciones y discursos que son expresiones del pluralismo cultural que es necesario acoger como parte del acervo de los ciudadanos.

Lo que estamos afirmando es por cierto mucho más fácil de decir que de hacer. Y sin embargo no hay otra vía para que se garantice vigencia social a la democracia. Requiere del concurso de organizaciones de intereses, grupos culturales, movimientos regionales, asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos más amplia que la del circuito de las ONGs, reconociendo por supuesto que ellas contribuyeron decisivamente al desmantelamiento de la dictadura, se necesita también de universidades que renueven creadoramente su vínculo con la sociedad y espacios de confluencia en las que el diálogo no quede en manos de expertos "facilitadores" que ordenen filantrópicamente la agenda. Es una vía que no se puede recorrer adormeciéndose en el gradualismo. Entendiendo los abismos que nos separan a unos y otros, lograr que tenga algún sentido el concepto de sociedad civil requiere de un democratismo extremo, una consecuente "reforma intelectual y moral".

14. La expectativa de nuevos partidos

La recuperación de la democracia requiere de la construcción de partidos. En esta etapa van a transitar todavía en su mayoría por liderazgos personalizados. Afortunadamente el descrédito del

régimen autoritario quita espacio a una prédica dirigida frontalmente contra la política y los políticos, lo que no significa por cierto una renovación rápida de la confianza en ellos. Resulta trivial señalar a esta altura que el cuestionamiento de las ideologías de transformación social, la crítica dirigida al Estado en tanto encargado de tareas orientadas a la reducción de las desigualdades y el predominio de la ideología neoliberal han debilitado a las organizaciones políticas como articuladoras de propuestas, profesionalizado al político, debilitando el lazo representativo y orientado a dirigentes y a la sociedad a opciones moderadas o de centro político. Sin embargo, los politólogos aferrados a este discurso todavía consistente en sus rasgos esenciales, están perdiendo probablemente algunos reflejos.

El Perú ha pasado la etapa de ajuste estructural y los intentos, como vimos limitados, de reforma del Estado, y ya se está en condiciones de hacer un balance de esta experiencia. Como en el resto de América Latina, res urge la discusión sobre los criterios de ordenamiento de la sociedad, mucho más allá de los límites impuestos por el Consenso de Washington y la prédica de las organizaciones internacionales de crédito que, por lo menos declarativamente, están más abiertas a temas relativos a políticas sociales y condiciones de equidad. De modo todavía larvario, se están formando corrientes de opinión con mensajes relativamente más propositivos. La imagen del candidato importa pero no lo es todo. Es previsible que se trate de sustentar en el corto plazo un mensaje social cristiano que reivindique la economía social de mercado, la intervención subsidiaria del Estado y algunas políticas redistributivas sustentadas a partir del, con frecuencia, elusivo concepto del bien común. En sus líneas principales continuarán haciendo correctivos menores a sus propuestas los defensores de las políticas neoliberales. Los años vividos bajo el autoritarismo pueden dar-

le vigencia a prédicas como las de Francisco Tudela, donde se combine la ortodoxia económica con la apelación de la decisión política centrada en el Ejecutivo, reivindicador del momento de unidad del pueblo-nación, intolerante al enfrentamiento, hostil a los mecanismos de mediación y enfrentado a las corrientes internacionales que se preocupan por la vigencia de los derechos humanos. Probablemente Toledo asuma una orientación socialdemócrata moderada, no muy elaborada en sus líneas estratégicas pero tomando como centro la reactivación económica y el problema del empleo. Como indica Sinesio López, este candidato terminó siendo una hechura de los ciudadanos y está obligado a recoger sus aspiraciones y líneas de preocupación. La opción socialdemócrata puede ser defendida por el APRA, que todavía no ha conseguido renovar su imagen. Queda también en teoría un espacio para la izquierda: las personas que defienden esta alternativa no consiguen, ni en muchos casos les interesa, conjugar el cuestionamiento a la dominación de grupos económicos cada vez más concentrados y decisivos a nivel internacional utilizando políticas deliberadamente excluyentes, con un rescate o, en otros casos, un descubrimiento de la reivindicación de la democracia como régimen político y no sólo como apelación vaga a una forma de convivencia social. Pareciera que quienes sostienen orientaciones de izquierda estuvieran escindidos en dos polos, uno que insiste en una intransigencia mal fundamentada y otro que desconfiaba de un pensamiento crítico. Los actores en este caso pareciera que no están a la altura de las ideas que proclaman, no pueden soportar el lastre de la equivocación que cometieron alguna vez, de la culpa, del desánimo. Y en otro plano, con un discurso probablemente errático queden expresiones del fujimorismo cuyos candidatos saquen partido del aparato construido en los últimos años y del grado de reconocimiento no definitivamente perdido por el gobernante.

Y más allá de este alineamiento un tanto rígido que hemos utilizado, por todas partes del país encontramos gentes dispuestas a construir y participar en organizaciones políticas, núcleos de técnicos competentes en algunos casos, dirigentes sociales, integrantes de movimientos regionales, universitarios de todos los estamentos que están haciendo una mirada al país como si todo tuviera que ser observado nuevamente; profesionales de ONGs que sienten el límite de sus prácticas, jóvenes de distinta procedencia social que oscilan entre el colectivo cultural y la institucionalidad política.

Quizás las perspectivas abiertas a la formación de partidos no sea definitivamente el desenlace que espera en el corto plazo —hay incluso dificultades de conseguir firmas para lograr la habilitación legal de nuevos agrupamientos— pero existen mayores oportunidades que a principios de la década anterior. En todo caso, la apelación a la discusión de propuestas formulada en sus rasgos generales probablemente ya no sea una vana invocación a una discusión ilustrada dirigida a ciudadanos esclarecidos. Tiene que ver con la experiencia que las adhesiones volátiles motivadas por razones oportunistas promueven la corrupción. Lo hemos analizado ya cuando aludimos a las vinculaciones entre movimientos de independientes y abdicaciones en las lealtades políticas. En un estudio sobre este tema que se realizara en Italia entre 1994 y 1996, cuando se produjo en ese país el colapso del sistema de partidos, Donatella della Porta señalaba que la comisión de actos ilícitos tenía una asociación negativa con la capacidad de los partidos de elaborar programas de larga duración, la apelación a la ideología, el estímulo de la participación y la preocupación por ganar un electorado de opinión.³⁸ El desacreditado

38. Donatella della Porta. "Partidos políticos y corrupción. Reflexiones sobre el caso italiano". En: *Nueva Sociedad* 145, setiembre-octubre, 1996.

mundo de las ideas crea entonces ataduras y compromisos que ayudan a la transparencia en la gestión pública. Quizás porque la gente siente que a quien eligió es su representante en los hechos y no solamente en una ficción jurídica. El ciudadano tiene algo que saber, algo que exigir, se muestra atento. Lo cierto es que quienes comienzan a subestimar que se tenga un proyecto de sociedad, ayudan a que ellos u otros encuentren justificación para sus posteriores transgresiones.

No sólo se trata de programas sino de procedimientos. Para las próximas elecciones no existe tiempo para difusión de propuestas, reclutamientos, creación de un círculo de influencia entre simpatizantes no incorporados y elecciones primarias que legitimen a los postulantes de las distintas agrupaciones. Sin embargo, es razonable pensar que sólo definiendo con rigurosidad lo que cada agrupación se propone hacer, habrá promociones de candidatos respetando criterios democráticos y competencias reconocidas y los niveles de involucramiento de los elegidos en una organización pueden ser así sostenidos en el tiempo, librando al sistema de las deserciones motivadas por el más despiadado cálculo de costo y beneficio.

Por ahora, parecen confluír las conveniencias de los líderes de movimientos y partidos con el intento de consolidación de sus organizaciones. Coexistirá la democratización interna con la necesidad de asegurar controles. Falta, no obstante, un hecho decisivo. Para que puedan resurgir los partidos se necesita, como ha ocurrido en otros países de América Latina, la influencia de un núcleo intelectual que se integre a estas organizaciones o tenga relaciones de colaboración con ellas. Junto a los dirigentes sociales, dicho núcleo puede darle consistencia a la iniciativa, plantear exigencias, ser más acucioso en la rendición de cuentas de lo ofrecido y de lo actuado. Probablemente no exista esta preocupación en buena parte de nuestros profesionales, académicos,

artistas. No se trata de incurrir otra vez en la trillada discusión del compromiso sino de evitar retóricas encontradas, la de la entrega sin vacilaciones a una causa, el discurso ilustrado del poder subversivo del arte, dicho curiosamente por quienes pretenden ser posmodernos, los presuntos desencuentros entre autonomía individual y preocupación por lo que pasa en el país, el elogio de la indiferencia como rescate de la propia e intransferible lucidez. Al margen de cualquier juicio de valor, es fácil de comprobar que en América Latina el fortalecimiento de la democracia requirió del involucramiento de los intelectuales y que en el Perú esta ausencia es una de las limitaciones que debe enfrentar el sistema político.

15. Perspectivas de una salida ordenada

Un régimen autoritario y personalizado se ha encontrado en el Perú obligado a abandonar el poder sin que existan en la oposición actores políticos y sociales consolidados. Hasta noviembre del 2000 existían dificultades para encontrar una transición ordenada. La falta de lineamientos estables y consistentes generaron un amplio espacio de indeterminación. Hasta hace pocos meses, en la mesa de negociación de la OEA sólo podía llegarse a acuerdos provisionales y expuestos a una posterior revisión. Sólo en el período reciente las fuerzas políticas contrarias al gobierno recuperan fuerza, iniciativa y capacidad de propuesta.

Cuando comienza la transición en un Estado burocrático autoritario con Fuerzas Armadas institucionalizadas, puede pactarse que no habrá persecuciones y represalias por actos cometidos por los oficiales mientras estaban en el poder. Ellos como contrapartida se repliegan ordenadamente, definen un perfil profesional y se subordinan al poder civil. En el caso peruano

estamos ante una coalición de civiles y militares que se comprometieron en hechos que se fueron alejando progresivamente de intereses que puedan defenderse argumentando que estaban vinculados a criterios de seguridad nacional. Por otra parte, no se respetó la carrera militar con promociones ordenadas y se crearon mecanismos de vigilancia y control. Por esta razón, resulta probable que se produzcan desde filtraciones de información, hasta denuncias públicas sobre la comisión de actos ilícitos, la mayoría dentro de los marcos del derecho penal ordinario, sin que pueda ponérseles un punto final sin alterar el orden jurídico que se quiere reconstruir. No corresponde establecer acuerdos de reconciliación y comisiones de la verdad, tan genéricos en sus planteamientos que permitan una exención de responsabilidades, comprendiendo al conjunto de personas involucradas por la comisión de cualquier delito, prescindiendo de considerar ante qué tipo de transgresión estamos. Y no tiene sentido distinguir en estos casos entre civiles y militares.

Por la naturaleza excluyente del régimen, los responsables serán probablemente un grupo relativamente reducido de funcionarios con alta concentración de poder. Las circunstancias parecen recomendar que se emprenda una estrategia en que se transite al mismo tiempo por dos vías: por un lado la actuación independiente del Poder Judicial, por otro una rápida renovación institucional redefiniendo tareas en las Fuerzas Armadas y en algunas instituciones públicas, de modo que quienes ocupen cargos jerárquicos sean personas que hayan estado fuera del proceso en los últimos años y no se sientan obligados, en consecuencia, a intentar una defensa corporativa. El desafío que se enfrenta en el retorno a la democracia radica en la capacidad de tomar decisiones rápidas, radicales y confiables. La descomposición del régimen obliga a ser intransigente, no por la ausencia de un espíritu tolerante sino por el hecho de que para afirmar el

principio mismo de tolerancia, es necesario restablecer niveles mínimos de confianza entre gobernantes y gobernados.

La depuración de los cuadros militares, sometidos y socios a la vez de Montesinos y Fujimori, el cambio de los mandos y aspiraciones de las Fuerzas Armadas, iniciativas del nuevo gobierno de Valentín Paniagua y de la gestión del ministro de Defensa, Walter Ledesma, son tareas que se deben emprender desde ya. Al mismo tiempo que hay que abrir la caja negra de los presupuestos militares donde se han probado gastos sin rendición de cuentas y probable comisión de delitos. A diferencia de otras transiciones, las fuerzas democráticas están confrontadas a una cúpula militar débil y aislada que va a tener que enfrentar responsabilidades ineludibles.

La democracia renovada y las propias Fuerzas Armadas deben emprender después una discusión colectiva para comprender tanto lo que ha ocurrido como las nuevas tareas que deben emprender en la sociedad. Lo que es seguro es que si quieren vender una verdadera modernización, deben vincularse a la sociedad y no caer en el aislamiento buscado a veces por los propios militares. Todavía las Fuerzas Armadas y los civiles desconfían entre sí por razones atendibles y el autoritarismo vivido ha exacerbado este sentimiento.

La incorporación castrense enfrentada a un escenario nacional e internacional que da nuevas dimensiones a sus responsabilidades tradicionales de defensa, debe proceder a pensar y emprender nuevas formas de inserción. El tema no es sencillo porque requiere superar prejuicios y abrirse a nuevas ideas. Quizás venga en auxilio de una discusión creativa la urgencia de superar una extrema decadencia institucional.

16. Democracia: el breve espacio en que no estás

"Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos" decía un poeta latinoamericano. Diez años de fujimorismo no pasaron en vano. Funcionarios públicos ejecutores de políticas sociales desconfiados, manipuladores o corruptos, disposición a la obediencia sin previa deliberación por miedo o por convencimiento, desidia en los opositores ante la contundencia de lo que parecía inevitable, hartazgo conviviendo con el sentimiento de la inutilidad de los cambios.

Se ha insistido en que estamos viviendo en una sociedad polarizada. Pienso sin embargo que la idea más fuerte es la de la fragmentación. Extendidas las diferencias sociales, la pobreza se toma como un hecho natural. La polarización supone un momento de polémica girando sobre los mismos temas. La fragmentación parte del hecho de que distintos actores están hablando de cosas diferentes. El neo liberalismo, al margen de la discusión sobre su conveniencia produjo múltiples fracturas, entre ellas el encierro espacial e intelectual de las élites, que como vimos no se han caracterizado precisamente por su creatividad, y las dificultades de comunicación entre las raleadas clases medias y una sociedad de pobres.

Suenan por cierto extraños algunos discursos pertinentes para la comunidad académica norteamericana que asocian la democracia con la incertidumbre aceptada y la consideran como una consecuencia contingente de conflictos. El clima intolerable del autoritarismo, hasta el mismo desconcierto en que hoy viven muchos de los que lo apoyaron enfrentados a los patéticos acontecimientos recientes, exige reconocer que aun cuando haya dificultades históricas para instaurar el Estado de Derecho, que no es del caso detallar aquí; ello es una tarea impostergable si no queremos caer en este envilecimiento de las relaciones personales

que promovió el fujimorismo con su intolerancia y su desprecio a los ciudadanos y su empecinado propósito de enfrentar a unos con otros. Esta corrosión de los vínculos sociales traslada en las relaciones con los otros lo que en el plano político se vive como falta de derechos y garantías.

Se puede invocar en nombre del realismo las virtudes de la negociación, difícil en cambio es apelar a la tolerancia ante un grupo que interpretaba que las personas que sostenían una opinión distinta eran potenciales agresores o inaceptables enemigos. Quizás se pueda llegar a mínimos acuerdos, aquellos que ayuden a recuperar la institucionalidad perdida, que en verdad nunca en nuestra historia tuvo una enraizada vigencia. Queda por saber si se puede pasar por alto los "agravios" de un régimen de salida como el que tuvimos: violaciones a los derechos humanos, amenazas y chantajes, saqueos que se irán descubriendo progresivamente en cuentas bancarias desperdigadas en diversas plazas financieras, dilapidación de aquello que la sociedad procuró salvar en medio de su sacrificio, enfrentando duras medidas de ajuste estructural, fondos obtenidos de las privatizaciones de cuyo destino probablemente no puede darse cuenta. Fujimori no está al margen de la comisión de estos actos ilícitos y su renuncia es una demostración de la bancarrota de un sistema en la que el gobernante descubierto no puede aducir argumentos en su defensa.

Es necesario que el gobierno democrático de transición haga comprender a buena parte de la ciudadanía, todavía desconcertada, la magnitud del daño que se le ha infringido al país. Y que al mismo tiempo emprenda los primeros y definitivos pasos para que las personas que aceptaron el clientelismo sepan que el Estado de Derecho ofrece tanto garantías como oportunidades.

En un plano más profundo se trata de luchar contra esta devaluación de palabras y argumentos que el fujimorismo impuso

y que va a ser un lastre difícil de arrojar. Es imprescindible restablecer un diálogo interrumpido, o que a veces ni siquiera ha llegado a entablarse, entre actores políticos y sociales y entre personas de distinta procedencia cultural y de diferentes situaciones económicas. Se trata, como siempre, de vencer y de vencer. Y para ello tiene que estar claro para las grandes mayorías, que se abre una perspectiva de cambio que va desde la vigencia de comportamientos éticos, a una inevitable transformación social, llevada con realismo pero con una decisión firme de llegar tan lejos como se pueda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avritzer, Leonardo.

- 1999 "Modelos de sociedad civil: un análisis de la especificidad del caso brasileño". En: Alberto J. Olvera (coordinador). *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*. El Colegio de México.

Bilbao, Luis.

- 2000 "El *Plan Colombia* de Estados Unidos. Militarización de la política". En: *Le Monde Diplomatique*. Setiembre.

Bowen, Sally.

- 2000 *El expediente Fujimori. El Perú y su presidente 1990-2000*. Lima: Perú Monitor.

Cepeda, Fernando.

- 2000 "Los diamantes ensangrentados". En: *Ideele* N°131. Setiembre.

Chalmers, Douglas.

- 1977 "Parties and Society in Latin America". En: Schmidt, Stephen; James C. Scott; Carl Landé y Laura Giusti (eds.): *Friends, followers and factions. A reader in political clientelism*. Berkeley: University of California Press.

Cotler, Julio.

- 1998 *La articulación y los mecanismos de representación de las organizaciones empresariales*. Documento de trabajo N° 97. Lima: IEP.

Durand, Francisco.

- 1999 "La democracia, los empresarios y Fujimori". En: Tuesta Soldevilla, Fernando (ed). *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Gonzales de Olarte, Efraín.

- 1998 *El neoliberalismo a la peruana: Economía política del ajuste estructural, 1997-2000*. Lima: IEP-CIES.

Guerra-García, Gustavo.

- 1999 "La dimensión política del ajuste económico en el Perú". En: Bardález, Elsa; Martín Tanaka; Antonio Zapata. *Re-pensando la política en el Perú*. Lima: Red para el desarrollo de las ciencias sociales.

Lanzaro, Jorge.

- 1998 "Uruguay: las alternativas de un presidencialismo pluralista". En: Revista Mexicana de Sociología. N°2. Abril-junio.

Le Saux, Maggy.

- 1986 "Aspectos psicológicos de la militancia de izquierda en Chile desde 1973". En: Propositiones 12, Año 6, Vol.12. Octubre- diciembre.

Linz, Juan.

- 1975 "Totalitarian and Authoritarian Regimes". En: Greenstein, Fred y Nelson W. Polsby (eds.), *Handbook of Political Science: Macropolitical Theory*. Massachusetts: Addison- Wesley.

Linz, Juan y Alfred Stepan.

- 1996 *Problems of democratic transition and consolidation*. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Londres: Hopkins University Press.

López, Sinesio.

- 1997 *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS.

Lynch, Nicolás.

- 1999 *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980-1992*. Lima: Fondo Editorial Universidad Mayor de San Marcos.

Mauceri, Philip.

- 1999 "Prerrogativas de las Fuerzas Armadas en alianza cívico-militar en el Perú". En: Tuesta Soldevilla, Fernando (ed). *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Murakami, Yusuke.

- 2000 *La democracia según C y D*. Lima: IEP.

Nelson, Joan N.

- 1979 *Access to power. Politics and the urban poor in developing nations*. New Jersey, Princeton: Princeton University Press.

Obando, Enrique.

- 1999 "Las relaciones civiles-militares en el Perú 1980-1996: sobre cómo controlar, cooptar y utilizar a los militares (y las consecuencias de hacerlo)". En: Stern, Steve (ed). *Los senderos insólitos del Perú*. Lima: IEP-Universidad Nacional de Huamanga.

O'Donnell, Guillermo.

- 1997 "Tensiones en el estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia". En: O'Donnell, Guillermo. *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.

O'Donnell, Guillermo y Philippe C. Schmitter.

- 1988 "Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas". En: *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós.

Offe, Claus.

- 1996 *Modernity and the State. East, West*. Massachusetts: MIT Press.

Olvera, Alberto J.

- 1999 "Los modos de la recuperación contemporánea de la idea de sociedad civil". En: Alberto J. Olvera (coordinador). *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*. El Colegio de México.

Panebianco, Angelo.

- 1982 *Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid: Alianza Editorial.

Paramio, Ludolfio.

- 1999 "Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina". En: *Zona Abierta*, N°88/89.

Porta, Donatella della.

- 1996 "Partidos políticos y corrupción. Reflexiones sobre el caso italiano". En: *Nueva Sociedad* 145. Setiembre-octubre.

Rospigliosi, Fernando.

- 1996 *Las fuerzas armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista*. Documento de trabajo N° 73. Lima: IEP.

Sckocpol, Theda.

- 1990 "El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual". En: Edelberto Torres (comp.) *Política, teoría y método*. Costa Rica: Editorial Universidad Centroamericana Educa Flacso.

Touraine, Alain.

- 1988 *La parole et le sang. Politique et société en Amérique Latine*. París: Editions Odile Jacob.

Ugarte, Mayen.

- 2000 "La reforma del Estado: alcances y perspectivas". En: Abusada, Roberto; Fritz Du Bois, Eduardo Morón y José Valderrama. *La Reforma Incompleta*. Tomo II. Lima: Universidad del Pacífico-CIUP-Instituto Peruano de Economía.

Verdera, Francisco.

- 2000 *Cambio en el modelo de relaciones laborales en el Perú, 1970-1996*. Suita, Osaka: The Japan Center for Area Studies.

Diagramado en
el *Instituto de Estudios Peruanos* por:
Mercedes Dioses V.
Impreso en los talleres gráficos de
TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA
Psje. María Auxiliadora 156, Breña
Teléfonos 332-3229/ 424-8104
Lima - Perú

Julio Cotler es investigador y ex director del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido profesor en la Universidad de San Marcos, así como también en varios otros centros académicos del mundo. Entre sus libros más conocidos, figuran *Clases, estado y nación en el Perú*, *Política y sociedad en el Perú*, *Cambios y continuidades* y *Drogas y política en el Perú*. *La conexión norteamericana*.

Romeo Grompone es sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, desempeñándose además como docente en la Universidad de San Marcos. Viene trabajando en los últimos años sobre temas de sociología política y las interrelaciones entre sociedad y cultura. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan *Nuevos tiempo, nueva política* (con Carlos Mejía) y *Las nuevas reglas de juego*. *Transformaciones sociales, culturales y políticas en Lima*.

En las futuras «Historias de la república» que se emprendan, el año 2000 quedará señalado como un momento decisivo en el devenir político del país. El vertiginoso desmoronamiento de un prolongado régimen político, se vio sucedido por una hasta hoy incruenta y pacífica solución de transición. Evitando el optimismo fácil que puede traer el advenimiento de un nuevo gobierno democrático, Julio Cotler y Romeo Grompone, investigadores del área de Sociología y Política del Instituto de Estudios Peruanos, examinan desapasionadamente en sendos ensayos las cuestiones de gobernabilidad, soberanía y consolidación de las instituciones democráticas en el país, a la luz de lo ocurrido en la década del fujimorismo y en el año de su caída.

IEP
Biblioteca



01598